

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

E. A. P. DE DERECHO

**Necesidad de regular adecuadamente la servidumbre
minera**

TESIS

para optar el título profesional de Abogado

AUTOR

Luis Fernando Calderón Sigvas

Lima – Perú

2010

***A Inés y Waldo mis padres; sin ellos
no hubiera podido lograr mis metas
profesionales con su amor, ejemplo,
apoyo y guía.***

***A Yanina mi novia, por su
compresión y amor incondicional.***

NECESIDAD DE REGULAR ADECUADAMENTE LA SERVIDUMBRE MINERA.

	Pág.
CAPITULO PRIMERO. GENERALIDADES DE SERVIDUMBRE.	01
1. Servidumbre.	02
1.1 Etimología.	02
1.2 Evolución histórica	02
1.2.1 En Roma.-	02
1.2.2 En la Revolución Francesa.-	04
1.2.3 En el Derecho Moderno.-	04
1.3 Definición.-	05
1.4 Naturaleza Jurídica.	07
1.5 Características.	07
1.5.1 Se trata de un derecho real.-	07
1.5.2 Requiere de la existen de dos predios.-	08
1.5.3 No son enumeradas ni limitadas por ley.-	09
1.5.4 Son derechos en principio perpetuos.-	09
1.5.5 Son derechos accesorios.-	09
1.5.6 Son derechos indivisibles.-	09
1.5.7 No se requiere que los predios pertenezcan	10
a propietarios diferentes.-	10
1.5.8 Deben prestar utilidad.-	10
1.5.9 No se presume.-	10
1.6 Clasificación de servidumbres.-	10
1.6.1 Servidumbres reales y personales.-	12
1.6.2 Por sus características:	12
1.6.2.1 Aparentes;	12
1.6.2.2 No aparentes;	12
1.6.3 Por su continuidad:	12
1.6.3.1 Continúas;	12
1.6.3.2 Discontinúas;	12
1.6.4 Por su constitución:	13

1.6.4.1	Voluntarias;	13
1.6.4.2	Legales;	13
1.6.4.3	Por voluntad testamentaria.	13
1.6.4.4	Servidumbres emanadas por disposición unilateral del propietario.	14
1.6.4.4.1	Servidumbre emanada por disposición del usufructuario.	14
1.6.4.4.2	Servidumbre emanada del co-propietario.	14
1.6.4.5	Por prescripción.	14
1.6.4.6	Diferencia entre la servidumbre minera y servidumbre civil.	14
1.7	Sujetos de las servidumbres.-	14
1.7.1	El titular del predio dominante;	14
1.7.2	El titular del predio sirviente;	15
1.8	Objeto de las servidumbres.	15
1.8.1	Servidumbres positivas.-	15
1.8.2	Servidumbres negativas.-	15
1.9	Extinción de las servidumbres.	15

CAPITULO SEGUNDO. SERVIDUMBRE MINERA.	17
1. Servidumbre Minera	18
1.1. Generalidades.	18
1.2. Definición:	19
1.3. Naturaleza Jurídica.	21
1.4. Características de la Servidumbre Minera.	22
1.5. Derechos del dueño del predio dominante y del dueño del predio sirviente.	25
1.5.1. El propietario del inmueble dominante tiene derecho a:	25
1.5.2. El propietario del predio sirviente es el que soporta la carga y por ello puede pedir:	26
1.6. Servidumbre Minera en la Legislación Minera	27
1.6.1. La Servidumbre Minera en la época virreinal.	27

1.6.2. La Servidumbre Minera reconocidas en el Código Minería del presidente Manuel Odría de 1950.	29
1.6.3. La Servidumbre Minera en el otorgamiento legal Decreto Ley 18880.	29
1.6.4. Las Servidumbre Mineras en el otorgamiento Legal del Decreto Ley 18880.	30
1.6.5. Las Servidumbre Mineras en el Decreto Legislativo N° 109.	30
1.6.6. Las Servidumbre Mineras en el T.U.O. de la Ley General de Minería.	30
1.6. Servidumbre Minera en la Legislación Comparada.	32
1.7.1. Colombia; Código de Minas ley N° 685.	32
1.7.2. Ecuador; Ley de Minería. Ley N° 126.	36
1.7.3. Argentina; Código de Minería, Decreto N° 456.	38
1.7.4. Guatemala; Ley de Minería y su reglamento.	42
1.7.5. El Salvador; Ley de Minería y sus Reformas, por decreto N° 544.	46
1.7.6. Costa Rica; Código de Minería, Ley No. 6797	48
1.7.7. Bolivia; Ley N° 1777, Código de Minería	50
1.7.8. Uruguay; Ley N° 15.242, Código de Minería.	51
1.7.9. México.- Reglamento de la Ley Minera.	56
1.7.10. Chile.- Código de Minería titulo	61
1.8. Procedimiento para la obtención de Servidumbre Minera en el Perú.	63
1.8.1. Trato directo.	63
1.8.2. Conciliación.	64
1.8.3. Informe del perito.	64
1.8.4. Culminación de la etapa de conciliación.	65
1.8.5. Solicitud.	66
1.8.6. Comparendo.	66
1.8.7. Inspección ocular.	67
1.8.8. Informe del perito.	67

1.8.9. Opinión técnica.	67
1.8.10. Resolución Suprema.	68
1.8.11. Consignaron.	68
1.8.12. Suscripción de la escritura pública.	69
1.8.13. Denegación de la solicitud.	69
1.8.14. Procedimiento para la obtención de servidumbre minera. Grafico.	71
1.9. Derecho a la solicitud de servidumbre minera.	72
1.9.1. Servidumbre minera sobre terrenos del Estado.-	72
1.9.2. Servidumbre minera sobre de terrenos de terceros.-	73
1.9.3. Servidumbre minera sobre la superficie de otras concesiones	73
1.10. Servidumbre Minera en la minería No Metálica	74
1.11. Diferencia entre Servidumbre Minera y Civil.	75
1.12. Servidumbre Minera y Expropiación.	76
1.13. Extinción de las servidumbres mineras.	77
CAPITULO TERCERO. CASUÍSTICA DE LA SERVIDUMBRE MINERA.	78
I. Resolución del Consejo de Minería	79
a) Resolución N° 145-95-EM.	79
II. Sentencias del Tribunal Constitucional;	84
a. Sentencia EXP. N.° 202-2000-AA/TC	85
b. Sentencia EXP. N.° 00228-2008-PHC/TC	89
III. Servidumbre Minera Convencional.	93
a. El acuerdo suscrito entre la empresa minera Compañía Azure del Perú S.A.C y la Comunidad Campesina de Shicuy.	93
IV. Servidumbre Mineral Legal.	99
a. Compañía Minera Antamina S.A. servidumbre Minera de paso, para la construcción, operación y mantenimiento de mineroducto destinado al transporte de concentrados de cobre y zinc desde la planta concentradora hasta la planta de secado y filtrado en el Puerto de Huarmey.	99

b. Compañía Minera Coimolache S.A. servidumbre Minera de uso para la construcción del Complejo Industrial.	109
2. Aportes.	121
A) Adecuación de la normatividad vigente que regula la actividad minera, en especial la servidumbre minera.	121
B) Proyecto de guía ha aprobarse para conseguir la servidumbre minera convencional.	124
Conclusiones.	132
Recomendaciones.	133
Bibliografía.	134
Anexos	138

INTRODUCCIÓN.

El sector minero reclama un adecuado ordenamiento de las normas jurídicas en materia de propiedad, no sólo a efectos de adquirir el máximo de los derechos la propiedad, sino también para la adquisición de los derechos desmembrados del dominio. Uno de ellos es la servidumbre minera.

La servidumbre minera es un mecanismo para conseguir el aprovechamiento de los recursos naturales mineros no renovable que cuenta el titular de la concesión minera, para la exploración, explotación, transporte y beneficio del yacimiento minero; pues solo el derecho de concesión minera, le otorga la propiedad de los recursos naturales extraídos, mas no le otorga el uso ni disfrute del terreno superficial; pues toda actividad minera debe ser ejercida con responsabilidad social y respetando el medio ambiente.

El propósito de la investigación busca en principio desarrollar la servidumbre minera, para reformular la legislación planteando propuestas normativas. Además de hacer de la servidumbre minera una herramienta eficaz para el desarrollo de la actividad del sector.

La adecuación normativa para el desarrollo de la tesis, consiste en las modificaciones a la legislación para hacer de las servidumbres legales o forzosas mineras una institución eficaz para el desarrollo de la actividad. Pues en los últimos 10 años solo se han otorgado 5 servidumbres legales mineras en el Perú.

La motivación de trabajar este tema, es tratar de conceptualizar el contenido de lo que se denomina “*Servidumbre Minera*”, estableciendo un bloque normativo, que finalmente configure el ámbito jurídico en el que se desarrolla la actividad, la actuación del Estado, los operadores y la comunidad en general.

La organización del proyecto de investigación esta constituido en tres capítulos:

En el **primer capítulo “Servidumbre”**, se empieza con la referencia conceptual de la servidumbre, entendido como gravamen que limita la propiedad; ahí nos interesa conocer aspectos de su origen y cómo es que en su contexto inicial romano función. Exponiendo para ello la evolución conceptual y cada una de sus características, clasificación y de la servidumbre ámbito civil.

En el **segundo capítulo “Servidumbre Minera”** se desarrolla sus antecedentes, la definición, características, evolución en la legislación peruana, en la legislación comparada y el procedimiento para constituir la.

En un **tercer capítulo “Casuística de la servidumbre minera”**, se aplica el método sistemático, a efectos de trabajar principalmente, sobre los cambios que debe sufrir la legislación para adecuarla a la realidad.

El Autor.

CAPITULO PRIMERO

LA SERVIDUMBRE

1. La Servidumbre.

1.1. Etimología. La palabra “servidumbre” deriva del latín **servitudo-servituris**- viene a ser o significar condición de siervo, esclavitud, sumisión, de gravamen, importante valor en aquellas clásicas definiciones de servidumbres como del Derecho Romano. “ Por la servidumbre , el propietario de una cosa se somete a sufrir alguna limitación en el provecho de otro predio, o a no hacer lo que podría”¹

La servidumbre en su definición primigenia hace alusión a la sumisión, condición de siervo, de dominio de una persona sobre otra, este concepto es trasladado a los inmuebles.

1.2. Evolución histórica.

1.2.1. En Roma.- En el Derecho Romano las servidumbres se clasificaban en personales y reales. Las servidumbres personales eran derechos que facultaban a una persona para obtener alguna utilidad de una cosa ajena. Eran inherentes a la persona, por lo que se extinguían con ellas, y podían recaer tanto sobre cosas muebles como inmuebles. El usufructo, uso y habitación constituían servidumbres personales.

Las servidumbres reales para los romanos son definidos como derechos reales sobre la cosa ajena.

Los derechos reales más antiguos sobre la cosa ajena, los únicos a los que los romanos daban originalmente el nombre de *servitutes*, junto con el otro de *iura praediorum*. Consiste en limitaciones determinadas y típicas que se le hacen a la propiedad de un fundo (que, por esa razón, es designado con la denominación de fundo sirviente) a favor o propiedad de este fundo (*fundo dominante*). De

¹ VÁSQUEZ RÍOS, Alberto; Los derechos reales, Lima: San Marcos; 2003. 2a ED. Páginas 257.

los textos romanos se deducen tres reglas principales en orden a las servidumbres prediales².

1º *Nemini res sua servit*. Es decir, la servidumbre, siendo un derecho sobre la cosa de otro, no puede constituirse sobre cosa propia. Así pues, si el propietario de dos fundos próximos pone a uno de ellos en una situación material que ofrezca una utilidad a otro (por ejemplo, si lo atraviesa con un acueducto para llevar el agua al fundo vecino), tal situación material no constituye una situación jurídica y no da lugar a un derecho de servidumbre.

2º *Servitus in faciendo consistere nequit*. Es decir, el propietario del fundo sirviente no está obligado a ninguna conducta activa sino exclusivamente a una conducta pasiva, que consiste en un *pati*, en un tolerar que el propietario del fundo dominante realice determinadas actividades sobre el fundo sirviente (por ejemplo, que lo atraviese, como en las servidumbres de paso), o bien en un *non facere*, esto es, en abstenerse de realizar determinadas actividades en el fundo propio (por ejemplo, en la *servitus altius non tollendi* debe abstenerse de levantar construcciones por encima de una determinada altura). Aparentemente, existe una única excepción a esta regla en el *servitus oneris ferendi*, que consiste en el derecho del propietario de un edificio de apoyarse con su construcción en un edificio de otro.

3º *Servitus servitutis esse non potest*. En regla, enunciada por las fuentes romanas, es inexplicable, en cuanto que no se comprende bien su significado lógico. Una hipótesis ingeniosa es la de suponer que originariamente fuera *fructus servitutis esse non potest*, esto es, que no puede constituirse el usufructo de una servidumbre. Los Justinianeos, haciendo integrado el usufructo en la categoría de las *servitutes personarum*.

² VOLTERRA, Eduardo. Instituciones de Derecho Privado Romano. Editorial Civitas S.A. Primera Edición. 1986. Reimpresión 1991. Madrid. Pág. 417-418.

La Servidumbre en términos generales, en el Derecho Romano, tiene las siguientes características³:

- a) No podía existir una servidumbre sub servidumbre.
- b) Se desprendía del derecho de propiedad, por lo que necesariamente debe proporcionar una utilidad a una persona o fundo.
- c) No tenía límite en el número, es decir, es "*numerus apertus*".
- d) Se trata de un derecho real por lo que el propietario del predio no está obligado a realizar acto alguno. Solo está obligado a no hacer o tolerar que se hiciera.
- e) No podía existir servidumbre sobre la cosa propia.
- f) El titular de la servidumbre tenía en su favor una acción civil "*in rem*" para hacer reconocer su derecho: la acción confesaria.

1.2.2. En la Revolución Francesa.- La Revolución Francesa se caracterizó, como explica Barbero, a "su aversión a toda idea de servidumbre, y hasta el término de "servidumbre" fue completamente desterrado, con excepción de las relaciones prediales, donde todavía se lo retuvo para explicar de modo que se evitara el peligro de un retorno a las antiguas concepciones feudales, hablando- según se lee todavía en el Código de Napoleón"⁴

1.2.3. En el Derecho Moderno.- El concepto fundamental de las servidumbres fue repitiéndose a través de la historia,

³ MAX ARIAS-SHEREIBER PEZET, CARDENAS QUIROS, Carlos. Exégesis Del Código Civil Peruano de 1984. Tomo V. Derechos Reales. Gaceta Jurídica. 1998. Pág. 279.

⁴ BARBERO, Doménico. Sistema de Derecho Privado, Tomo II, Editorial Jurídica Europa- América, Buenos Aires, 1967. Pág. 406.

acrecentándose con nuevos aportes de interés no solo privado sino esencialmente público. Hoy, el sistema de propiedad particular con función social no puede privarse de la servidumbre. Se le conoce como servidumbre simplemente, pues ha desaparecido la nomenclatura jurídica de servidumbre personales, las que ha tomado las definiciones de usufructo, uso y habitación⁵.

1.3. Definición.- Las definiciones de Servidumbres:

El concepto de servidumbre deriva especialmente del Derecho Justiniano, en el que las separaba en prediales y personales, según que su titular fuera el que en cada momento tuviera la propiedad de un predio, o una persona totalmente individualizada. Para Ulpiano: “Servidumbre es una calidad impuesta a la cosa, por la cual alguien disminuyó su derecho y acrecentó el de otro” (Digesto, 39,1.5.9)

Se trata de gravámenes impuestos en un predio para utilidad o beneficio de otro predio. He aquí que aparece con claridad el concepto de la utilidad de las servidumbres, por lo que si la utilidad o el beneficio desaparecen, consecuentemente la servidumbre debería también desaparecer⁶.

Según Isaías Pacheco Jiménez, “La servidumbre es un gravamen impuesto a la propiedad de uno en beneficio de otra propiedad de distinto dueño; entonces, a la vez, un carga y un derecho; una carga cuando se la toma desde el punto de vista pasivo y un derecho cuando se la considera bajo su carácter activo”⁷.

⁵ MAX ARIAS-SHEREIBER PEZET, CARDENAS QUIROS, Carlos. Exégesis Del Código Civil Peruano de 1984. Tomo V. Derechos Reales. Gaceta Jurídica. 1998. Pág. 280.

⁶ CASTAÑEDA, Jorge Eugenio; Instituciones de Derecho Civil, Tomo I, Lima: S.E; 1952. Pág.586.

⁷ PACECHO JIMENEZ, Isaías. Derecho Minero de Bolivia. Edición Financiada por la fundación Universitaria “Simón I. Patiño” La Paz. Bolivia. 1954. Pág. 411.

Según Alberto Ríos Vásquez Ríos⁸, es una gravamen impuesto sobre un predio en beneficio de otro predio y que da derecho al predio dominante hacer ciertos actos de uso del predio sirviente, o para impedir que los haga el dueño de este; acorde con lo expuesto en el artículo 1035 del código Civil, norma que señala que la servidumbre es un gravamen impuesto a un predio en beneficio de otro para que el predio dominante practique ciertos actos de uso en el predio sirviente. Además este es un importante derecho real, limitante de la propiedad, no es otro sino la necesaria relación y armonía entre los predios para su mejor explotación y mayor utilidad.

Según Mateo Borge; “ Jurídicamente : desde un punto de vista objetivo se define como un derecho real, matizado subjetivamente al traducirse en la legitimación del sujeto activo, titular del fundo dominante, para actuar sobre la finca sirviente, o para restituir el ejercicio de la servidumbre cuando la finalidad para la que fue impuesta por conducta anómala del titular del fundo gravado y como carga o gravamen que, desde el punto de vista pasivo, supone la carencia de legitimación de este bien oponerse al titular del derecho, bien para realizar cualquier tipo de acto que en condiciones normales podría realizar”⁹.

Las servidumbres son gravámenes que la ley o el propietario de un predio sirviente imponen a otro predio llamado dominante y pueden ser adquiridas por ley, por convención o por prescripción. Es título suficiente para acreditar la servidumbre convencional el documento privado en que conste la autorización del propietario del inmueble llamado a actuar como predio sirviente"

(Exp. N° 1412-98, Resolución del 23107/98, Tercera Sala Civil de Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Lima).

La Servidumbre es un derecho real, que limita el derecho de propiedad, pues afecta la posesión y disfrute de un predio, en beneficio de un inmueble, a los que se les denomina predio sirviente e inmueble dominante respectivamente, tiene la finalidad de prestarle utilidad al inmueble dominante en desmedro del

⁸ VÁSQUEZ RÍOS, Alberto. Los Derechos Reales. Páginas 259.

⁹ MATEO BORGE, Iván. La Servidumbre de Propietario. Marcial Pons, ediciones jurídicas y sociales, S. A. Madrid 2000 Barcelona. Pág. 103.

predio sirviente, las partes pueden establecer las servidumbres en función a la actividad económica de inmueble dominante, siendo esta oponible a terceros, previa inscripción en los registros públicos correspondientes.

1.4. Naturaleza Jurídica.

Las servidumbres son derechos que suponen dos fundos. El énfasis estaba puesto en los fundos -y no en las personas- por lo que el derecho subsistía después de la muerte del titular. Estas son las servidumbres se refiere el artículo 1035 del Código Civil.

La ley o el propietario de un predio pueden imponerle gravámenes en beneficio de otro que den derecho al dueño del predio dominante para practicar ciertos actos de uso del predio sirviente o para impedir al dueño de este el ejercicio de alguno de sus derechos.

El Código define la servidumbre como el gravamen que sufre un predio en beneficio de otro, que da derecho al dueño del segundo predio a usar el primero, o a impedir que el dueño del primer predio ejerza alguno de sus derechos de propiedad. El predio que goza la servidumbre se llama dominante; el que la sufre, sirviente.

1.5. Características.

1.5.1. Es un derecho real.- Es una afectación al predio, no al propietario, es un derecho no de la persona sino del titular del predio dominante, que se transfiere con el inmueble, no es una obligación personal del propietario del predio sirviente; entonces, el dueño del predio sirviente no se puede negar a sufrir la servidumbre, el derecho del dueño del predio dominante no se resuelve en obtener daños y perjuicios, sino que puede exigir vía judicial el goce efectivo de la servidumbre.

Este es un derecho real, es decir, un derecho directo sobre el predio sirviente, como todo derecho real, es *oponible a todos*, a los adquirientes sucesivos del predio, así como a sus acreedores. Confiere el *derecho de persecución*, que permite ejercer la servidumbre pase a quien pase el predio sirviente; y el derecho de preferencia, que evita el concurso de acreedores del propietario de la finca¹⁰.

Por ende, se puede inscribir en los registros públicos para acreditar la publicidad.

1.5.2. Requiere de la existen de dos predios.- Así lo establecía el derecho romano y en la actualidad nuestro Código Civil en su artículo 1035^o, además cuando dos predios se consolidan puede desaparecer la servidumbre.

En ese sentido, no se concibe que la servidumbre sea separada de ambos predios, lo que implica que no puede ser transferida a quien no sea propietario del predio dominante o del sirviente, asimismo, que las servidumbres no subsistan por sí solas, lo que se entiende perfectamente pues, éstas forman parte de dos predios.

De acuerdo con lo expuesto, la servidumbre civil está relacionada al predio, no a las personas, por ello no se pueden separar, pues conforman una unidad que proporciona la utilidad necesaria al bien. En tal sentido, la transferencia de uno de ellos se tiene que dar respetando la condición del predio sirviente, que cuenta con gravamen, y la del predio dominante, que tiene el beneficio de dicha servidumbre¹¹.

¹⁰ MAZAEUD, Henri, León Jean. "Las servidumbres reales" En: IDEM: Lecciones de Derecho Civil. Buenos Aires; Ediciones jurídicas Europa-América, 1960, parte 2º, Vol. IV., Pág. 426.

¹¹ Cien mejores. Elvira Gonzáles Barbadillo

1.5.3. No son enumeradas ni limitadas por ley.- Se pueden crear según las condiciones económicas de la propiedad inmueble. Esto debido a que la servidumbre es un gravamen de un inmueble en beneficio de otro, el beneficio. Esto se debe a que presta una utilidad necesariamente económica, por ende, las relaciones económicas evolucionan constantemente.

1.5.4. Son derechos en principio perpetuos.- Por su naturaleza de correr la suerte de los predios sirviente y dominante, se presume perpetua sino hay pacto en contrario (Art. 1037 del Código Civil)

Criterio que en la actualidad esta siendo superada debido a la actividad económica varía constantemente y por ende el uso de los predios, pues la función principal de una servidumbre es la utilidad puede dejar de ser útil para el predio dominante y esta se extingue.

1.5.5. Son derechos accesorios.- Están unidas a los predios no pudiendo serrarse de ellas, no se puede disponer de ellas, bajo ningún acto jurídico, independientemente de los predios.

Existen otros derechos accesorios como la prenda y la hipoteca. Sin embargo, se diferencian de la servidumbre en que esta no constituye garantía alguna. Además, la prenda y la hipoteca acceden a un derecho personal, o sea la obligación que garantiza; en cambio, la servidumbre accede a un derecho real, al mismo predio¹².

1.5.6. Son derechos indivisibles.- No se pueden adquirir por separado, si los predios pueden dividirse la que beneficiara en parte proporcionales o afectara en partes proporcionales a los predios.

¹² CASTAÑEDA, Jorge Eugenio; Instituciones de Derecho Civil, Tomo I, Lima: S.E; 1952. Pág. 692.

Las servidumbres son derechos accesorios, son “*pradilis inhoerent*”, sean activas o pasivas siguen unidas al fundo dominante o al sirviente, a cualquier poder que estos posean¹³.

1.5.7. No se requiere que los predios pertenezcan a propietarios diferentes.- Debido a que el propietario de dos predios puede gravar con servidumbre uno a favor de otros para poder independizarlo (artículo 1048 del Código Civil).

Esto es lo que se denomina la Servidumbre de Propietario, la que se manifiesta en la parcelación de urbanización privada, sería el establecimiento de caminos públicos, limitación de alturas de las construcciones, etc.

1.5.8. Deben prestar utilidad.- Debe proporcionar una ventaja real al predio dominante. Esta es la razón de su existencia; la servidumbre debe terminar cuando pierde utilidad.

1.5.9. No se presume.- Es una presunción *juris tantum*, al ser gravámenes, se presume que un predio está libre de servidumbres. De conformidad con el principio general, toda propiedad se supone libre mientras no se demuestre que sobre ella pesa la existencia de un gravamen. Por ende, el que afirma la existencia debe probarla de allí la importancia de su inscripción en los registros públicos.

1.6. Clasificación de servidumbres.- Se clasifican en función de diversos criterios:

1.6.1. Servidumbres reales y personales.- En el Derecho Romano las servidumbres se clasificaban en personales y reales. Las servidumbres personales eran derechos que facultaban a una persona para obtener alguna utilidad de una cosa ajena.

¹³ PACECHO JIMENEZ, Isafas. Derecho Minero de Bolivia. Edición Financiada por la fundación Universitaria “Simón I. Patiño” La Paz. Bolivia. 1954. Pág. 411.

Eran inherentes a la persona, por lo que se extinguían con ellas, y podían recaer tanto sobre cosas muebles como inmuebles. El usufructo, uso y habitación constituían servidumbres personales.

Esta distinción entre las servidumbres no responden a que algunas revistan calidad de derechos sobre cosa y que otras carezcan de ella, por cuanto afectan siempre los objetos muebles e inmuebles, pertenecientes a un extraño. La única diferencia radica en el carácter abstracto o concreto del sujeto, que permite en un caso, por la facilidad del lenguaje, llamar así al bien cuyo beneficio se establece la servidumbre, a pesar de que en realidad el titular sea el dueño o poseedor de dicho bien, con prescindencia de su indivisibilidad, según lo hemos observado cuando estudiamos los derechos y cargas inherentes a la posesión. Determina el artículo 2971(Código de Luisiana): *“Servidumbre real es el derecho establecido al poseedor de una heredad sobre otra heredad ajena para utilidad de la primera”*. A su vez declara el artículo 2972: *“Servidumbre personal es la que constituye en utilidad de alguna persona determinada, sin dependencia de la posesión de un inmueble, y que acaba con ella”*¹⁴

Según, Alberto Vázquez Ríos, *“Las servidumbres se clasifican a veces en prediales, territoriales o reales, a fin de diferenciarlas del usufructo, uso y de la habitación en los cuales se ve tradicionalmente servidumbres personales, puesto que son inherentes a los fundos. Sería romper deliberadamente con dichos hábitos de lenguaje y reservar el nombre de servidumbres sencillamente para cargas establecidas sobre un fundo y en provecho de otro fundo”*¹⁵

¹⁴ LAFAILLE, Héctor; Derecho Civil. Tratado de Derechos Reales, Buenos Aires: Compañía Argentina de Editores; 1944. Pág. 359-360.

¹⁵ VÁSQUEZ RÍOS, Alberto. Los Derechos Reales. Páginas 258.

1.6.2. Por sus características:

1.6.2.1. Aparentes; las que están a la vista. Ejemplo: de paso, cuando hay camino, una puerta, una ventana o un acueducto;

1.6.2.2. No aparentes; no ofrecen señal visible de su existencia, no tienen señal exterior de su existencia. Ejemplo: acueducto subterráneo.

Fue el Código francés el que separó esta categoría, que hasta ese momento aparecían confundidas. Que una servidumbre sea aparente o no, no depende de la naturaleza de la servidumbre —como la clasificación anterior— (salvo casos excepcionales¹⁶ como sería v.g. la servidumbre de *altius non tollendi*), sino de una situación de hecho. Así, una servidumbre de acueducto es siempre continua y una de paso, siempre discontinua; mientras que una y otra pueden ser aparentes o no aparentes. En la de paso, por ejemplo, sería aparente si hubiera una tranquera, un empedrado, etcétera.¹⁷

1.6.3. Por su continuidad:

1.6.3.1. Continúas; no requieren hecho del hombre para producirse. Ejemplo: De no construir y la no edificar sino hasta cierta altura.

1.6.3.2. Discontinúas; requieren un actuar del hombre. Ejemplo: paso o transito, acarreo de materiales.

Para determinar si una servidumbre es continua o discontinua, se atiende a las maneras cómo se ejerce. Así, si para ejercerla se necesita un hecho actual

¹⁷ MARIANI DE VIDAÍ, Marina. Derechos Reales. 7ª edición actualizada. Buenos Aires. 2004. Pág. 78.

del hombre, si requiere de la actividad humana es discontinua. Si se ejerce sin la necesidad del hecho actual del hombre, es decir, si se ejerce por si sola, por factores externos a la actividad humana, es continua. El único elemento que hay que tomar en cuenta para saber si una servidumbre es continua o discontinua, es si se necesita o no un hecho actual del hombre.

1.6.4. Por su constitución:

1.6.4.1. Voluntarias; son convencionales, el propietario puede establecer a favor o en contra de su propiedad.

En base a la libertad contractual surge del acuerdo o consentimiento entre los propietarios del predio dominante y sirviente pudiendo establecerse a titulo oneroso o gratuito. Según exista o no contraprestación por parte del propietario del predio dominante.

1.6.4.2. Legales; es la fuente directa de las servidumbres, cuando ella misma impone este derecho. Este es el caso de servidumbre legal de paso para los predios que no tienen salida a los caminos públicos. En esta situación, la servidumbre nace por efecto de la ley, comprendiendo a los predios aledaños que sean necesarios. La servidumbre termina cuando el dueño del bien dominante adquiere otro que le de salida o cuando se abra un camino que le de acceso inmediato a dicho predio.

1.6.4.3. Por voluntad testamentaria; Son aquellos que emanan del causante de haber otorgado este testamento legando, “dos heredades a diferentes personas estableciendo servidumbre a favor de uno de los predios a cargo de otro”.¹⁸

¹⁸ MAX ARIAS-SHEREIBER PEZET, CARDENAS QUIROS, Carlos. Exégesis Del Código Civil Peruano de 1984. Tomo V. Derechos Reales. Gaceta Jurídica. 1998. Pág. 299.

1.6.4.4. Servidumbre emanadas por disposición unilateral del propietario; El propietario de dos predios, dice el artículo 1048 del Código civil” puede gravar uno con servidumbres en beneficio de otro”.

1.6.4.4.1. Servidumbre emanada por disposición del usufructuario; El usufructuario, según el artículo 1041 del Código Civil, puede “constituir servidumbre por el plazo del usufructo, con conocimiento del propietario”.

1.6.4.4.2. Servidumbre emanada del copropietario; El copropietario, según el artículo 1042 del Código Civil “El propietario sujeto a copropietario sólo puede ser gravado con servidumbre si prestan su asentimiento todos los copropietarios. Si hubiera copropietarios incapaces, se requerirá autorización judicial, observándose las reglas del artículo 987 en cuanto sean aplicables.

1.6.4.5. Por prescripción; es una forma de constituir la servidumbre según el artículo 1040 del Código Civil. “Solo las servidumbres aparentes pueden adquirirse por prescripción mediante la posesión continua durante cinco años con el justo título y buena fe o durante diez años sin estos requisitos”.

1.7. Sujetos de las servidumbres.- Dentro de las servidumbres coexisten dos diferentes clases de sujetos, titulares de los bienes dominantes y sirviente.

1.7.1. El titular del predio dominante; es el propietario del mismo, o sujeto activo, beneficiado con la limitación existente. Este sujeto ira

paulatinamente variando, conforme se transmita el dominio del predio dominante, a título particular como universal¹⁹.

1.7.2. El titular del predio sirviente; es el propietario del mismo, o sujeto pasivo que soporta la limitación existente. También, como en el caso del titular activo, esta ira paulatinamente variando, según se produzca las transmisiones del bien, particular o universalmente²⁰.

1.8. Objeto de las servidumbres. Estas se clasifican en :

1.8.1. Servidumbres positivas.- Son aquellas que permiten al propietario del predio dominante el poder realizar determinados actos en el predio sirviente. Por ejemplo: las servidumbres de paso acueducto, entre otras²¹.

1.8.2. Servidumbres negativas.- Son aquellas que impiden algo (imponen un “no hacer”, al propietario o propietarios del predio sirviente en su propia área. La importancia de esta servidumbre radica, pues, en una restricción seria a su derecho de dominio; por ejemplo aquellas prohibiciones de “no edificar”. “no cercar”, “no cavar zanjas”, en su propio predio²².

1.9. Extinción de las servidumbres.

Las causas de extinción de las servidumbres son las siguientes:

- a. Por destrucción total de cualquiera de las dos edificaciones la desaparición de la cosa que las motivo; así, si brota una fuente de agua en el predio dominante, se extingue la servidumbre de acueducto o la de sacar aguas, y también si desaparecen las aguas del predio sirviente.

¹⁹ MAX ARIAS-SHEREIBER PEZET, CARDENAS QUIROS, Carlos. Exégesis Del Código Civil Peruano de 1984. Tomo V. Derechos Reales. Gaceta Jurídica. 1998. Pág. 299.

²⁰ MAX ARIAS-SHEREIBER PEZET, CARDENAS QUIROS, Carlos. Exégesis Del Código Civil Peruano de 1984. Tomo V. Derechos Reales. Gaceta Jurídica. 1998. Pág. 300.

²¹ VÁSQUEZ RÍOS, Alberto. Los Derechos Reales. Paginas 268.

²² VÁSQUEZ RÍOS, Alberto. Los Derechos Reales. Paginas 268.

- b. La llegada del día o el cumplimiento de la condición si se han constituidos sometidas a modalidades.
- c. La resolución, del derecho que las ha constituido, como cuando el constituyente era usufructuario y se extingue el usufructo.
- d. La confusión, o sea la reunión perfecta e irrevocable de ambos predios en manos del mismo dueño. Debe recordarse que cuando los predios no son colindantes la servidumbre seguirá existiendo de hecho; pero si posteriormente vuelve a pasar a propietarios diferentes los predios, revive la servidumbre. La confusión en estos casos es discutida en la doctrina actual, pues se trata aquí de una servidumbre de propietario.
- e. Por la renuncia del dueño del predio dominante, es decir de la parte que obtiene la ventaja de la servidumbre; la renuncia es el apartamiento voluntario de un derecho, y puede ser gratuito u oneroso, pero tiene el efecto de extinguir la servidumbre. La renuncia debe ser expresa, no basta que sea tacita y es aconsejable que se inscriba la extinción de la servidumbre en el Registro, para oponerla a terceros y para liberar definitivamente al predio sirviente²³.
- f. Por haberse dejado de gozar durante 5 años se debe de entender consecutivos.
- g. Una servidumbre puede interrumpirse sin extinguirse, y esto cuando es imposible su ejercicio, cuando la heredad sirviente se inunda y es imposible el transito por ella; pero revivirá desde que deje de existir la imposibilidad.

²³ MAISH VON HUMBOLDT, Lucrecia. Los Derechos Reales. Segunda Edición. Lima Perú 1980. Pág.

CAPITULO II

SERVIDUMBRE MINERA

1. Servidumbre Minera.

1.1. Generalidades.

Al considerar las mina como recursos minerales no renovables y encontrándose la mayoría en el subsuelo, el mandato constitucional que le atribuye la propiedad de los mismos al Estado, y resalta no solo su importancia para el crecimiento económico y social del país sino que también revela el interés general que tiene la comunidad respecto se su manejo y aprovechamiento, lo cual implica su prevaecía sobre el interés particular, esto es, la propiedad privada.²⁴

La circunstancia de coexistir, respecto de un mismo terreno o lugar, el derecho de suelo con las facultades y derechos que confiere la legislación minera sobre las sustancias minerales, oblige al legislador a contemplar los mecanismos adecuados para que el minero pueda efectuar las labores de búsqueda, explotación y beneficios de dichas sustancias. Además, considero conveniente que, con el mismo objeto, las concesiones mineras quedaran obligadas a dar facilidades a otras concesiones mineras. Las facilidades expuestas se obtienen en nuestra legislación mediante la institución de *servidumbre minera* que, como se desprende de lo dicho anteriormente, pus grava tanto a *predios superficiales*, como a otras *concesiones vecinas mineras*.²⁵

La exploración y explotación minera y el beneficio de sus productos requiere necesariamente el asentamiento en los terrenos superficiales en que aquella actividad de realiza. Si bien el minero tiene dominio sobre su concesión, no lo tiene, la casi totalidad de veces, sobre los terrenos superficiales en cuyas entrañas aquellas se encuentran situadas. Por lo que ineludible que el minero haga uso del terreno superficial ajeno para

²⁴ Arango Castro, Camilo Daniel, Gestión Inmobiliaria en los proyectos de Infraestructura. Enfoque al sector minero y petróleo. Editorial Pontífice Universidad Javeriana. Editorial Universo del Rosario. Bogotá, Colombia 2007. Pág. 154.

²⁵ LIRA OVALLE, Samuel, Curso de Derecho de Minería, Incluye Prontuario con escritos y contratos de uso frecuente. Tercera Edición Actualizada. Editorial Jurídica de Chile. Pág. 212.

explorar, explotar y beneficiar las sustancias minerales estará afectando el interés del propietario superficial. Se hace, pues, necesario una manera practica y legal, a la vez, para eliminar cualquier conflicto entre las partes y evitar los entrampamientos en el desarrollo económico de cada cual. Siendo el dominio de los terrenos superficiales distintos a los de la concesión minera y cada uno de estos distintos también a los de la otra concesión es obvio que se haya debido buscar una forma que los propietarios de unas y otros pudieran conciliar sus intereses a fin de no ser alterados los derechos que el dominio natural le confiere. De esta, manera, la necesidad de explorar y explotar concesiones mineras o beneficiar sus productos no sólo pueden importar limitaciones al dominio del terreno superficial en aquellas se encuentran situadas, sino también respecto de las mismas concesiones mineras entre si. Esta forma de interactuar se concilia mediante la prestación de servicios de uno para el otro, denominada servidumbre.²⁶

1.2. Definición:

Las servidumbres son derechos reales que consisten en gravámenes sobre la propiedad territorial en beneficio de la propiedad minera. De acuerdo con los principios generales civiles, hay un predio dominante la cual en el caso es activa, y otro predio que sufre el gravamen que recibe le nombre de sirviente; en este caso la servidumbre pasiva. En el derecho minero el inmueble minero mina es por lo general el predio dominante, en tanto que el fundo territorial es el predio sirviente. Solo por excepción, una mina puede tener el carácter de predio sirviente. No es acertado llamar predios a las minas es inmueble pero no predios²⁷.

Puede definirse como “restricciones legales que gravan, permanentemente o transitoriamente los fundos superficiales y, en su caso, los inmediatos, por

²⁶ GOMEZ NUÑEZ, Sergio. Manual de Derecho Minero. Colecciones Jurídicas. Editorial Jurídica Chilena. Primera Edición 1991. Pág., 234-235.

²⁷ MOLINA R. Juan. Tratado teórico y práctico de Derecho Minero Colombiano. Editorial Iqueima. Bogota. Colombia. Pág. 325-326.

causa de utilidad publica con el fin de favorecer al desarrollo de los trabajadores de exploraciones minera”²⁸

La condición propia y esencial de la servidumbre minera es que este destinada exclusivamente a la explotación y no pueda utilizarse en propósito diferente para lo que fue constituido²⁹.

Es aquel gravamen real, cuyo origen ésta en la Ley, de duración limitada, que se establece sobre terrenos, tanto privados como públicos a favor de la industria minera, hállese ésta en manos de particulares o del Estado, con amplitud suficiente para facilitar el total aprovechamiento de las riquezas naturales³⁰.

Según Eduardo Lanao; “el concepto de servidumbre es utilizado desde los tiempos del Imperio Romano y tiene como elementos el terreno principal (dominante) y uno secundario (o sirviente). El objetivo de la servidumbre es permitir al dueño del terreno dominante acceder al terreno del sirviente. Existen diversos tipos de servidumbre: de aire (que permite la ventilación), de luz (que permite iluminación), de vista (que permite tener una visión del exterior). Por ejemplo, en el caso minero, si uno desea construir una faja transportadora de minerales, deberá constituir una servidumbre de paso para acceder a terrenos de propiedad de otros y así concretar el proyecto y lograr llegar al puerto o planta. La servidumbre puede ser convencional o legal, la primera es aquella que se establece de mutuo acuerdo entre las partes y la otra será impuesta a través de la ley. La elección de una u otra dependerá de la voluntad del dueño de terreno sirviente o secundario o la necesidad de establecer efectivamente una servidumbre. Según la legislación peruana, “la utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos requiere acuerdo previo con el propietario”, y en caso no se logre, se debería recurrir recién a un

²⁸ BASADRE AYULO, Jorge. Citando Marta Sylvia Velarde, Manual de derecho minero Buenos Aires, 1986.p 206.

²⁹ PACECHO JIMENEZ, Isaías. Derecho Minero de Bolivia. Edición Financiada por la fundación Universitaria “Simón I. Patiño” La Paz. Bolivia. 1954. Pág. 413.

³⁰ GONZALES-BERTI, Luís. Compendio de derecho minero Venezolano. Tomo I, Tercera edición actualizada. Publicaciones de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes. Mérida Venezuela.1969. Pág. 234.

procedimiento de servidumbre. Entonces, podemos definir la servidumbre como un “permiso de uso” que otorga la autoridad sobre un terreno sirviente o secundario a favor de una concesión minera, en caso no se haya logrado un acuerdo previo con el propietario del terreno. Ahora bien, de acuerdo con lo señalado líneas arriba, existen dos posibilidades para su constitución: Que se realice de mutuo acuerdo -sin intervención de la autoridad minera- entre el concesionario y el propietario del terreno (servidumbre convencional), o que se imponga a través de un procedimiento legal. Si las partes no llegan a un acuerdo, en la norma se establece que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) definirá la necesidad y magnitud de la servidumbre minera, siendo el Consejo Nacional de Tasaciones (Conata) la entidad encargada de asignar el valor económico del área solicitada³¹ “.

La servidumbre minera siendo un mecanismo idóneo para conseguir el aprovechamiento de los recursos naturales mineros no renovable que cuenta el titular de la concesión minera, pues hace posible el uso y disfrute del terreno superficial para la exploración, explotación y beneficio de un yacimiento; pues toda actividad minera debe ser ejercida con responsabilidad social y respetando el medio ambiente.

La Ley autoriza a los concesionarios a imponer servidumbres, sobre el terreno superficial de terceros que eran necesarias para la utilización racional.

1.3. Naturaleza Jurídica; Además de las normas del Código Civil, existen disposiciones especiales para las servidumbres que utilizan las empresas del Sector Minero. Estas normas están contenidas en el Capítulo IV del Título Duodécimo del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería (Decreto Supremo 114-92-EM). También son pertinentes las normas del Reglamento por Decreto Supremo 017-96-AG y las del Reglamento de Procedimientos Mineros.

³¹ LANAO Eduardo. Área Legal – SNMPE Revista Desde Adentro, Edición num. 29, Enero 2006.

Las normas especiales no definen las servidumbres mineras, razón por la cual debemos recurrir a la definición general. Así, se trata de un gravamen sobre un predio (predio sirviente) que le permite al titular de una concesión el ejercicio de actividades mineras, así como para el transporte de mineral por ductos. En primer lugar hay que decir que en esta servidumbre la existencia de un predio dominante esta en duda, pues en muchos casos el concesionario no es propietario ni titular de ningún predio que no sea el que recibe en servidumbre.

En cuando el mineral que se extrae el subsuelo normalmente es conducido a un predio para su almacenamiento o transformación, ese predio no es el que se beneficia por el uso de la zona de explotación. Empero, la servidumbre minera se beneficia a un bien inmueble que sin ser un predio es un bien: la concesión minera. Ésta es un bien inmueble por expreso mandato del artículo 885 inciso 8) del Código Civil. Por tanto, esta servidumbre beneficia a un bien inmueble, al que llamamos bien dominante.

La servidumbre minera es un gravamen sobre un predio o varios predios sirvientes en beneficio de un inmueble dominante, específicamente una concesión minera para el racional ejercicio de la actividad; sin que este gravamen enerve el derecho de propiedad de los titulares de los predios sirvientes.

1.4. Características de la Servidumbre Minera.

Son las siguientes:

- A. Nacen por expresa disposición de la Ley por razones de utilidad pública, y no podrá dejarse sin efecto por un convenio en contrario de los interesados, que en función al inciso 3 del Art. 37 de la Ley General de Minería, que dispone que los titulares de las concesiones mineras pueden solicitar a la autoridad minera, para establecer servidumbres en terrenos de terceros que sean necesarios para la racional utilización de la concesión.

En cuando a legales son obligatorias, De esta manera, producido el hecho que habilita su constitución, son ineludibles y obligatorias para el predio o concesión sirviente, es decir, para aquellos sobres la cual recaerá el gravamen. Naturalmente que los predios que se irrogan al afectado deberán ser indemnizados, ya que de otra manera se vería alterada la equivalencia de prestaciones a que ambos sirviente y dominante, se encuentran obligados³².

- B. Constituyen un derecho real, conforme declara la Ley General de Minería, debiéndose respetarse, en consecuencia, un derecho patrimonial con todas sus atribuciones. Este beneficio gravan la superficie terrestre en beneficio de otro inmueble que es la concesión.

Se trata de gravámenes de naturaleza real, porque se constituyen sobre un inmueble para beneficio de otro inmueble, la mina, sin tener en cuenta la persona del concesionario y procurando a la explotación una ventaja eminentemente real³³.

- C. Es un derecho temporal, pues duran en tanto dure la explotación de la riqueza minera y una vez caducada o renunciada la concesión o agotado el recurso minero, los terrenos superficiales que son bienes de terceros o los derechos mineros vecinos, vuelven o revierten a sus dueños o concesionarios. La servidumbre regida por el Código Civil se presume perpetua por naturaleza al ser vinculadas a dos predios, se entiende que estos tienen duración ilimitada.

La transitoriedad de las servidumbres mineras, esta establecida por la circunstancia de que un yacimiento minero *es agotable* y, por la muy particular, de que el dominio minero es *condicional*. Si la mina se agota,

³² GOMEZ NUÑEZ, Sergio. Manual de Derecho Minero. Colecciones Jurídicas. Editorial Jurídica Chilena. Primera Edición 1991. Pág.,238-239.

³³ CATALANO, Edmundo Fernando. Curso se Derecho Minero y Régimen Legal del Petróleo y Minerales Nucleares. Tercera Edición Actualizada. Buenos Aires Republica de Argentina. 19... Pág. 205.

o se extingue, o se pierde, por el no cumplimiento de la condición a que queda sujeta la vigencia de su dominio, la servidumbre desaparece³⁴.

D. Son accesorias, más no principales, pero si inseparables de los derechos materia de gravamen, es decir, la concisión minera.

E. Pueden ser APARENTES, o NO APARENTES, según su visibilidad. Aparentes se las obras no presenten signos exteriores de existencia. Las podemos considerar en dos categorías:

- ❖ Servidumbre superficiales.- Tienen por finalidad ejecutar obras de infraestructura minera, sólo en la superficial del área de la concesión, tales como trochas carrozables, tendido de tuberías de agua, canales y canaletas de relaves, tendido de tuberías telefónicas, y de energía eléctrica, puestos, caletas, campos de aterrizaje, estaciones de radio, etc.

- ❖ Servidumbres subterráneas, en orden a que el predio sirviente sea superficial o éste ubicado en una mina de subsuelo.- Tienen por objeto la construcción en concesiones vecinas de las labores requeridas y necesarias para el acceso, la ventilación, desagüe, etc., de las minas que necesitan de tal servicio.

F. Los derechos derivados de la servidumbre minera son transitoria o temporales, porque la mina es un bien agotable y reversible si no se cumple con las normas de amparo minero. Al desaparecer la concesión se extingue la servidumbre. También desaparece la servidumbre cuando ya no le sirve al predio dominante para los fines con que fue constituido.

G. Los derechos otorgado por la servidumbre minera son susceptibles de ampliarse o de restringirse de acuerdo a las necesidades del predio dominante que es la concesión.

³⁴ URIBE HERRERA. Armando. Manual de Derecho de Minería. Editorial Jurídica de Chile. 2ª Edición, corregida y aumentada. Santiago-Chile. 1960. Pág. 282.

Se debe a que esta clase de servidumbres no tiene otro objeto que “facilitar al minero los medios necesarios para efectuar una cómoda explotación de la mina”. Si se aumenta la explotación, hay derecho para rendir la ampliación de la servidumbre, si dicho aumento para que sea cómodo exigiere o requiere tal ampliación; si, en cambio, disminuye la explotación por falta de mineral, restricción del mercado, o cualquier otra causa, se puede exigir o pedir la restitución de la servidumbre, o su extinción. Este derecho corresponde, naturalmente, al dueño del predio sirviente³⁵.

- H. Las servidumbres mineras están limitadas por la racional utilización de las concesiones minera sin que su establecimiento pueda generar creaciones abusivas del concesionario. (Inc. 3 Art. 37 de Ley General de Minería)

1.5.Derechos del dueño del predio dominante y del dueño del predio sirviente.

1.5.1. El propietario del inmueble dominante tiene derecho a:

- A. Usar la servidumbre en beneficio de un inmueble, es decir, el derecho de concesión³⁶; la concesión es un derecho real distinto del predio donde se encuentra (en virtud del segundo párrafo del Art. 9 de la Ley General de Minería).
- B. A ejecutar las acciones legales necesarias, como las posesorias, de acuerdo a su origen o constitución de la ley civil sustantiva;

³⁵ URIBE HERRERA. Armando. Manual de Derecho de Minería. Editorial Jurídica de Chile. 2ª Edición, corregida y aumentada. Santiago-Chile. 1960. Pág. 283.

³⁶ La Concesión Minera tiene la categoría legal de bien inmueble según lo señalado en los incisos 3º y 8º del artículo 885 del Código Civil y en segundo párrafo del artículo 9 del TUO de la Ley General de Minería. Sin embargo, conforme al anterior dispositivo, es un inmueble distinto y separado del predio donde se encuentra ubicada.

- C. Facultad del dueño de los inmueble, gravar uno de ellos en beneficio de otro, se puede gravar una concesión en beneficio de otra.

1.5.2. El propietario del predio sirviente es el que soporta la carga y por ello puede pedir:

- A. Que el uso de la servidumbre varíe, como facultad el Art. 1047 del Código Civil esta disposición es supletoria a la Ley Minera.
- B. Puede Pedir que se le indemnice, si es perjudicado económicamente por el gravamen o imposición de la servidumbre legal.³⁷

El concepto de predio *superficial sirviente*, en materia de servidumbre minera, tiene íntima y estrecha relación con el objeto de esta clase de servidumbre. Hemos dicho que su objeto es “facilitar al minero los medios necesarios para efectuar una cómoda explotación de la mina”. Se comprende que objeto tan amplio, el concepto de predio superficial sirviente, sea también amplio. En efecto, no abarca solamente al fundo superficial que corresponde a la ubicación de la mina o yacimiento minero, sino a todos los terrenos superficiales que el minero necesita gravar para “la cómoda explotación de la mina”, sean mediatos o inmediatos, no importa, ni interesa para estos fines³⁸.

³⁷ GUERRA PEÑALOZA, José; GUERRA SATO, Ana María. Elementos del Derecho minero. Lima: Rodhas; 1996

³⁸ URIBE HERRERA. Armando. Manual de Derecho de Minería. Editorial Jurídica de Chile. 2ª Edición, corregida y aumentada. Santiago-Chile. 1960. Pág. 296-297..

1.6. Servidumbre Minera Evolución Histórica en la legislación peruana.

1.6.1. La Servidumbre Minera en la Época Virreinal.

En la Época del Virreinato del Perú, se dictaron dos compendios que recopilaban normativos que rigieron la industria minera:

- **Las Ordenanzas del Perú.-** Las que fueron recopiladas y coordinada por el licenciado Don Tomas de Ballesteros en 1653, por encargo del Virrey Don Melchor de Navarra y Rocafull.
- **Las Ordenanzas de Nueva España.-** El Consejo Supremo de Indias, el 12 de junio de 1773, el 20 de julio del mismo año, ordena la formación de dichas ordenanzas. El Virrey Teodoro de Croix, excedió el 7 de octubre de 1787, 56 Declaraciones, con los entraron en vigencia las Ordenanzas en el Perú.

Las ordenanzas de minas coloniales engloban dentro del término privilegios a las servidumbres mineras propiamente tales consideradas por ley al minero tomando solo en consideración su calidad de tal.

Las servidumbres que soporta los terrenos superficiales y las deben soportar las pertenencias mineras a favor de otra. Se Clasifican en:

a) De las Servidumbres que gravan los terrenos superficiales.

- **Servidumbres de ocupación de terrenos necesarios para la cómoda explotación de la mina;** Los mineros piden construir casa, ingenios, hornos y toda las demás cosas necearías para el laboreo de las minas y para el beneficio y fundición de los metales aunque estas instalaciones queden fuera de la pertenencia. Igualmente puede construir sus ingenios en lugares donde haya ríos y arroyos, con el fin de aprovechar el agua como fuerza motriz y en beneficio de los

metales. Están obligados a pagar al dueño del suelo el valor del terreno que ocuparen en la superficie, el cual será tasado por dos peritos nombrados por la justicia minera³⁹.

- **Servidumbre de madera y leña sobre terrenos abiertos e incultos que se emplean en el beneficio de minerales y en la construcción de ingenios y edificios;** La Ordenanza 49 de Nuevo Cuaderno otorga al minero el derecho a aprovechar “ de todos los montes y términos comunes, baldíos; más cercanos a dichas minas, y de leña; obligándose al minero a pagar su justo precio que en acuerdo de las partes, será fijado por el juez de minas, el que debe pagar a la persona o concejo dueño del suelo. Las ordenanzas de la Nueva España dispone que los montes y selva próximos a las minas deben servir para pro beberles en distintos pasajes⁴⁰.
- **Servidumbre de aguas;** Se establece el derecho del minero para usar aguas ajenas en el beneficio de los metales, en el lugar y cantidad que más convenga; si las aguas están destinadas al servicio de un pueblo o al brebaje de animales puede usarlas el minero cuidando que no vuelva al río o arroyo de donde ha sido sacada.

b) De las Servidumbres que gravan unas pertenencias mineras a favor de o tras.

- **Servidumbre de transito;** Se prohíbe que cualquier minero eche en mina o pertenencia ajena tierra que saca de su mina; pero se permite que el desmonte se vaya a formar en lugares en no haya propiedad minera constituida⁴¹. El que tuviera mina abierta debe dar entrada por ella a los que se la pidieren para

³⁹ Ordenanza 52 del Nuevo cuaderno.

⁴⁰ Ordenanza 12; título XII, de la Nueva España.

⁴¹ Ordenanza 46 del Nuevo Cuaderno.

sus minas. Como indemnización por este servicio debe pagar el quinto del metal⁴².

- **Servidumbre de socavón iniciados o atravesados en pertenencia ajena y servidumbres de desagüe y explotación de mina por dicho socavón;** cualquier minero puede hacer socavón para la explotación y desagüe de su mina, aunque el socavón comience en pertenencia ajena o la atravese. Pero en estos dos últimos casos debe proceder con autorización de la justicia⁴³.

1.6.2. Las Servidumbres Mineras reconocidas en el Código de Minería del presidente Manuel Odría de 1950.

En el Código de Minería promulgado el 12 de mayo de 1950 quedaron insertadas bajo el rubro de “los derechos del concesionario”, diversas facultades para el establecimiento de las siguientes servidumbres y derechos sobre los terrenos superficiales a favor de las concesiones mineras (artículo 27):

- a) La ocupación y el uso de la superficie. Este derecho inmobiliario faculta la realización de todos los trabajos para el laboreo racional exploratorio y de explotación de la concesión minera del régimen

1.6.3. Las Servidumbre Mineras en el otorgamiento legal del Decreto Ley 18880.

- a) La ocupación y el uso gratuito de la superficie cuando las concesiones eran otorgadas en terrenos eriazos,
- b) La ocupación y el uso gratuito de los terrenos eriazos ubicados fuera del perímetro de la concesión.

⁴² Ordenanza 1, título VI, del Perú.

⁴³ Ordenanzas 1 y 2, título VIII, del Perú.

- c) La imposición de servidumbres necesarias para la **racional utilización** de la concesión minera. Los terrenos eriazos fueron establecidos como propiedad estatal.

1.6.4. Las Servidumbre Mineras en el Decreto Legislativo N° 109.

- a) El derecho a ocupar la superficie permitió el uso y el goce temporal del terreno, pero no transfirió al concesionario el dominio de los terrenos ocupados. El concesionario solo tenía la facultad de usar la cosa inmueble para el fin económico de la concesión o el denuncia. Esta servidumbre de ocupación era extensiva a todo el perímetro de la construcción o fuera de ella para canchas y depósitos de minerales, desmontes, relaves, y escorias, por sistemas de comunicación, habilitación, construcción y otras actividades conexas.
- b) Se permitió la ocupación de terreno franco las labores que tuvieran lugar para el acceso, la ventilación y el desagüe de las concesiones, el transporte de los minerales y la seguridad de los trabajadores; todo esto previa indemnización correspondiente.

El Decreto legislativo 109 le dio facultades al concesionario minero a usar las aguas necesarias para el servicio de personal de trabajadores y para las operaciones de su concesión o denuncia.

1.6.5. Las Servidumbre Mineras en el T.U.O. de la Ley General de Minería.

Las servidumbres de uso y ocupación del suelo, el aprovechamiento de otros bienes superraciales y el uso de las aguas naturales están reguladas actualmente por el artículo 37 del T.U.O. cuyo antecedente es

el numeral 79 del decreto Legislativo N° 109, comentado en el acápite anterior.

Derechos que otorga el Ley General de Minería:

- a.** En las concesiones que se otorguen en terrenos eriazos, al uso minero es gratuito de la superficie correspondiente a la concesión, para el fin económico de la misma, sin necesidad de solicitud adicional alguna.
- b.** A solicitar a la autoridad minera el derecho de uso gratuito para dicho fin, sobre terrenos eriazos fuera de la concesión.
- c.** A solicitar a la autoridad minera, autorización para establecer servidumbres en terrenos de terceros que sean necesarios para la racional utilización de la concesión.
- d.** A solicitar la autorización para establecer usos mineros o servidumbres, en su caso, sobre los terrenos superficiales de otras concesiones, siempre que no se impida o dificulte la actividad de sus titulares.
- e.** A construir en las concesiones vecinas, las labores que sean necesarias al acceso, ventilación y desagüe de sus propias concesiones, transporte de minerales y seguridad de los trabajadores, previa indemnización correspondiente.
- f.** A ejecutar en terreno franco las labores mineras que tengan los mismos objetos señalados en el inciso anterior.
- g.** A usar las aguas que sean necesarias para el servicio domestico del personal trabajadores y operaciones de la concesión.

- h. A aprovechar las sustancias minerales contenidas en las aguas que alumbren de sus labores.
- i. A inspeccionar las labores de concesiones mineras vecinas o colindantes, cuando sospeche interacción o cuando tema inundación, derrumbé o incendio, por el mal estado de los vecinos colindantes, por el desarrollo de los trabajos que efectúen.

1.7. Servidumbre Minera en la Legislación Comparada.

Las legislaciones mineras en los países hispanoamericanos generalmente inspirados en el sistema regalista o dominical, reconoce al Estado y, por consiguiente, este es el único autorizado a transmitir las a los particulares mediante acto concesional. La concesión minera se muestra siempre sujeta a una condición resolutoria al pago del canon territorial o de la producción minera mínima obligatoria, estos últimos reciben el nombre de sistemas de amparo.

1.7.1. Colombia; Código de Minas ley Nº 685.

Para el desarrollo de la minería en general en Colombia, el Ministerio de Minas y Energía (MME), expidió unas normas que regulan la ejecución de las actividades mineras. Estas normas se conocen como el **Código de Minas (Decreto - Ley 2655 de 1988)**. Con la expedición de este código se plantean los siguientes objetivos.

El Código de Minas regula las relaciones entre los organismos y entidades del Estado y de los particulares entre sí, sobre las actividades de prospección, exploración, explotación, beneficio, transporte, aprovechamiento y comercialización de los recursos no renovables que se encuentren en el suelo o subsuelo, así sean de propiedad de la nación o privada.

El Código de minería colombiano considera como un aspecto externo de la minería, a las Servidumbres. Por ello el Capítulo XVIII, es el desarrolla los aspectos externos de la minería, uno de ellos la Servidumbre Minera.

a) El disfrute de Servidumbres; Para el ejercicio eficiente de la industria minera en todas sus fases y etapas, podrán establecerse las servidumbres que sean necesarias sobre los predios ubicados dentro o fuera del área objeto del título minero y otras concesiones sin que ello dificulte la exploración o la explotación de la concesión que los soporte. Cuando, para la construcción, el montaje, la explotación, el acopio y el beneficio, en ejercicio de las servidumbres se requieran usar recursos naturales renovables, será indispensable que dicho uso esté autorizado por la autoridad ambiental, cuando la ley así lo exija. (Artículo 166. del Código de Minería).

Las servidumbres se pueden ejercer para el beneficio o transporte de minerales aún en el caso de ser realizados por personas distintas del beneficiario del título minero. (Artículo 167. del Código de Minería).

b) Época para el establecimiento de las servidumbres. Las servidumbres necesarias para las obras y trabajos de exploración podrán ejercitarse desde el perfeccionamiento del contrato de concesión y las que se requieran para la construcción, montaje, explotación, acopio, beneficio y transformación desde cuando quede aprobado el Programa de Obras y Trabajos y otorgada la Licencia Ambiental, si ésta fuere necesaria. Todo sin perjuicio de lo que se acuerde con el dueño o poseedor del predio sirviente. (Artículo 169. del Código de Minería).

En este artículo, se menciona que la servidumbre se puede establecer con el poseedor, criterio que no es desarrollado en la legislación peruana pues es una prerrogativa que solo la puede ejercer el propietario.

c) Extensión de las servidumbres. Habrá lugar al ejercicio de servidumbres mineras para la construcción, instalación y operación de obras y trabajos de acopio, beneficio, transporte y embarque que única y específicamente se hayan destinado y diseñado para minerales, aunque los dueños y operadores de dichas obras y actividades no sean beneficiarios de títulos mineros. (Artículo 171 del Código de Minería).

d) Duración; Salvo que con el dueño o poseedor del predio sirviente se hubiere acordado otra cosa, el uso y disfrute de las servidumbres tendrá una duración igual a la del título minero, sus prórrogas y de las labores necesarias para realizar las obras y labores de readecuación o sustitución de terrenos. (Artículo 176 del Código de Minería).

e) Ocupación de terrenos; Habrá servidumbre de uso de terrenos. El interesado acordará con el dueño o poseedor el plazo y la correspondiente retribución.

Se entenderá que esta servidumbre comprende el derecho a construir e instalar todas las obras y servicios propios de la exploración, construcción, montaje, extracción, acopio y beneficio de los minerales y del ejercicio de las demás servidumbres. (Artículo 177 del Código de Minería).

f) Usos comunitarios y compartidos; El uso por terceros, de las obras e instalaciones construidas o adquiridas por el minero para el ejercicio de las servidumbres, no las convierte en servicios

públicos, bien que dicho empleo se hubiere acordado con los usuarios o se origine en la mera tolerancia de sus dueños. Si dichos terceros hicieren uso de las obras e instalaciones para fines distintos a las actividades mineras, sus relaciones con el dueño o poseedor de los terrenos se regirán por las disposiciones sobre servidumbres del Código Civil. (Artículo 181 del Código de Minería).

- g) *Rehabilitación de Bienes.*** Sin perjuicio de lo que se hubiere acordado con el dueño o poseedor de los inmuebles sirvientes y de los pagos e indemnizaciones en su favor, el interesado está obligado a hacer la readecuación de los terrenos o a ponerlos en condiciones de ser destinados a su uso normal o a otros usos alternativos. Esta obligación se cumplirá o garantizará en el curso de la liquidación del contrato de concesión. (Artículo 183 del Código de Minería).

La rehabilitación en la legislación peruana, esta incluida dentro del plan de cierre, El plan de cierre es un instrumento de gestión ambiental donde se establecen pautas a ser efectuadas por el titular de la actividad minera (empresa), a fin de rehabilitar las áreas utilizadas por éste. Se busca que la rehabilitación alcance características compatibles con un ambiente saludable, seguro y adecuado para el desarrollo de la vida. La rehabilitación se llevará a cabo mediante la ejecución del plan, el cual se establece de acuerdo a las características particulares de la mina.

- h) *Indemnizaciones y Caución.*** En la fijación de las indemnizaciones y del monto de la caución a que está obligado el minero por causa del establecimiento y uso de las servidumbres, serán de observancia por los interesados, los peritos y las autoridades, las siguientes reglas y criterios:

- Para la estimación del valor comercial del terreno, se tendrán en cuenta sus condiciones objetivas de ubicación, calidad y destino normal y ordinario y no las características y posibles rendimientos del proyecto minero, la potencial abundancia o riqueza del subsuelo del mismo o la capacidad económica de los concesionarios;

- La ocupación parcial del terreno sólo dará lugar al reconocimiento y pago de la indemnización en cuantía proporcional al uso de la parte afectada, a menos que dicha ocupación afecte el valor y el uso de las zonas no afectadas;

- Salvo acuerdo en contrario, si la ocupación de los terrenos fuere transitoria y no mayor de dos años, los pagos por su uso, al dueño o poseedor, se harán por trimestres anticipados; si la ocupación fuere por más tiempo, el pago se hará al contado y en forma anticipada. (Artículo 184 del Código de Minería).

- i) **Servidumbres entre mineros.** Las servidumbres de ocupación de terrenos, ventilación, comunicaciones, tránsito y visita, también se podrán establecer sobre predios ocupados por otros concesionarios de minas siempre que con su ejercicio no interfieran las obras y labores de estos. (Artículo 185 del Código de Minería).

1.7.2. Ecuador; Ley de Minería. Ley Nº 126.

En 1991 se promulgó la ley de minería vigente. En el 2001 se han incorporado modificaciones a este marco legal que, manteniendo los principales criterios de la actual ley, incorporan aspectos como título único, patente creciente,

eliminación de regalías, que son condiciones de mayor competitividad y transparencia, mayor control ambiental durante todas las fases de operación minera y consulta a las comunidades, a fin de asegurar la sostenibilidad social y ambiental de las nuevas inversiones.

La ley Minera de Ecuador desarrolla a la Servidumbres en el Capítulo III.

a) Clases de servidumbres. Desde el momento en que se constituye una concesión minera o se autoriza la instalación de plantas de beneficio, fundición y refinación, los predios están sujetos a las siguientes servidumbres:

- La de ser ocupados en toda la extensión requerida por las instalaciones y construcciones propias de la actividad minera;
- Las de tránsito, acueducto, líneas férreas, aeródromos, andariveles, rampas, cintas transportadoras y todo otro sistema de transporte y comunicación;
- Las establecidas en la Ley Básica de Electrificación para el caso de instalaciones de servicio eléctrico; y,
- Las demás necesarias para el desarrollo de las actividades mineras. (Artículo 97 del Ley Minera).

En la legislación peruana, solo especifica, la utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos, así como para el transporte de hidrocarburos y minerales por ductos, requiere acuerdo previo con el propietario de las tierras o la culminación del procedimiento de servidumbre. (Reglamento del artículo 7º de la ley N° 26505, sustituido por la Ley N° 26570)

b) Servidumbres sobre concesiones colindantes. Para dar o facilitar ventilación, desagüe o acceso a otras concesiones mineras o a plantas de

beneficio, fundición o refinación, podrán constituirse servidumbres sobre otras concesiones colindantes o en áreas libres.

Los gastos que demande la constitución de estas servidumbres serán de cuenta exclusiva del concesionario beneficiado o del titular de la planta.

De encontrarse mineral al tiempo de constituir dichas servidumbres, este será de propiedad de la concesión sirviente, sin obligación de pago o compensación alguna. (Artículo 98 del Ley Minera).

c) Indemnización por perjuicios. Las servidumbres se constituyen previa determinación del monto de la indemnización por todo perjuicio que se causare al dueño del inmueble o al de la concesión sirviente, y no podrá ejercitarse mientras no se consigne previamente el valor de la misma. (Artículo 99 del Ley Minera).

d) Constitución y extinción de servidumbres. La constitución de la servidumbre sobre predios, áreas libres o concesiones, es esencialmente transitoria, su ejercicio y las indemnizaciones que correspondan se establecerán por mutuo acuerdo entre los interesados, que se elevará a escritura pública y se inscribirá en el Registro Minero a cargo del Registrador de la Propiedad. De no existir acuerdo entre las partes se seguirá el procedimiento señalado en el Capítulo III del Título XIV de esta Ley.

Estas servidumbres se extinguen con los derechos mineros y no pueden aprovecharse con fines distintos de aquéllos propios de la respectiva concesión o planta; pueden ampliarse o restringirse según lo requieran las actividades de la concesión o planta. (Artículo 100 de la Ley Minera).

1.7.3. Argentina; Código de Minería, Decreto N° 456.

El Código de Minería (CM) argentino fue sancionado por su Congreso Nacional el 25 de noviembre de 1886, establece los sistemas de dominio respecto a las

substancias minerales y determina como se adquiere, como se conserva y como se pierde el derecho a aprovechar los yacimientos minerales. Por disposición de la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 12) existe un sólo CM para todo el país, correspondiendo su aplicación a las autoridades nacionales o provinciales según donde estuviesen situados los recursos mineros. El CM establece los derechos de fondo y regula los procedimientos adquisitivos y extintivos de esos derechos, mientras que las Provincias establecen las normas procesales formales para el ejercicio de tales derechos ante las autoridades mineras pertinentes.

El CM ha sido objeto de numerosas reformas, las últimas de ellas, de mayor importancia, fueron realizadas por las Leyes. 24.498 (Actualización Minera) y 24.585 (Protección Ambiental) ambas de 1995.

El Código de Minería de la Argentina desarrolla la Servidumbres Mineras en artículos 146 al 155, del *Título Octavo*.

a) Las Servidumbres Mineras.

Verificada la concesión, los fundos superficiales y los inmediatos en su caso, quedan sujetos a las servidumbres siguientes, previa indemnización:

- La de ser ocupados en la extensión conveniente, con habitaciones, oficinas, depósitos, hornos de fundición, máquinas de extracción, máquinas de beneficio para los productos de la mina, con canchas, terreros y escoriales.
- La ocupación del terreno para la apertura de vías de comunicación y transporte, sea por los medios ordinarios, sea por tranvías, ferrocarriles, canales u otros, hasta arribar a las estaciones, embarcaderos, depósitos, caminos públicos o particulares más próximos o más convenientes, y a los abrevaderos, aguadas y pastos.
- El uso de las aguas naturales para las necesidades de la explotación, para la bebida de las personas y animales ocupadas en la faena y para

el movimiento y servicio de las máquinas. Este derecho comprende el de practicar los trabajos necesarios para la provisión y conducción de las aguas.

- El uso de los pastos naturales en terrenos no cercados. (Artículo 146 del Código de Minera).

La legislación peruana no especifica la forma de cómo se desarrollara la servidumbre minera.

b) Uso de Servidumbres por otras minas.

El uso de los caminos abiertos para una o más minas se extenderá a todas las del mismo mineral o asiento, siempre que se paguen en proporción a los beneficios que reciban, los costos de la obra y gastos de conservación. (Artículo 148 del Código de Minera)

Los dueños de minas están recíprocamente obligados a permitir los trabajos, obras y servicios que sean útiles o necesarios a la explotación, como desagües, ventilación, pasaje y otros igualmente convenientes, siempre que no perjudiquen su propia explotación. (Artículo 149 del Código de Minera)

c) Indemnización.

Las servidumbres se constituyen, previa indemnización del valor de las piezas de terreno ocupadas y de los perjuicios consiguientes a la ocupación. (Artículo 152 del Código de Minera)

Cuando los trabajos que han de emprenderse, sean urgentes; o cuando se trate de la continuación de otros ya entablados, cuya paralización cause perjuicio; o cuando hayan transcurrido quince días desde el siguiente al aviso del concesionario o a la reclamación del propietario, o cuando los perjuicios no se han producido, o no puede fijarse fácilmente el valor de la indemnización, podrá aquél pedir la constitución previa de la servidumbre, otorgando fianza suficiente. (Artículo 152 del Código de Minera)

En la legislación peruana no esta establecida la fianza, como garantía para ejercer la servidumbre minera, mientras termina el trámite que grava el predio superficial;

d) Trabajos realizados antes de la constitución de la Servidumbre.

El propietario puede avanzar sus labores debajo de las habitaciones y lugares reservados, previo permiso de la autoridad, otorgado con citación del propietario y mediante la correspondiente fianza. La autoridad no acordará el permiso, cuando la seguridad de las habitaciones y de sus moradores corra peligro; pero el concesionario podrá pedir la adjudicación de las habitaciones y construcciones con el terreno correspondiente. (Artículo 154 del Código de Minera)

El concesionario puede establecer en el ámbito de la pertenencia, los trabajos que crea necesarios o convenientes a la explotación, sin previa autorización. El propietario podrá oponerse a la iniciación o prosecución de esos trabajos, únicamente en los casos siguientes:

1. Cuando con ellos se contravenga, en perjuicio suyo, a alguna disposición de la ley.
2. Cuando se ocupe un terreno, cuya indemnización no haya sido pagada o afianzada.

La oposición no excluye el derecho de ofrecer fianza en los casos permitidos por la ley.

II - De la adquisición del suelo (artículos 156 al 160)

e) Derechos del titular de la concesión.

La concesión de una mina comprende el derecho el derecho de exigir la venta del terreno correspondiente. Mientras tanto, se sujetará a lo dispuesto en el párrafo de las servidumbres. (Artículo 156 del Código de Minera)

El derecho acordado al concesionario en el precedente artículo, se limita a la extensión de una pertenencia ordinaria, cuando el perímetro de la concesión es mayor. Pero tendrá derecho a una nueva adquisición siempre que las necesidades o conveniencias de la mina lo requieran. Con relación al resto del terreno que constituye la pertenencia, regirá lo dispuesto en el inciso final del anterior artículo. (Artículo 157 del Código de Minera)

Si el terreno correspondiente a una concesión, es del Estado o Municipio, la cesión será gratuita. La cesión comprende los derechos consignados en el Artículo 156. La cesión del terreno subsistirá mientras la mina no se declare vacante, o sea abandonada. Si los terrenos estuvieren cultivados, el concesionario pagará la correspondiente indemnización. (Artículo 158 del Código de Minera)

f) La Fianza.

Cuando los terrenos pertenecen a particulares, deberá pagarse previamente su valor y los perjuicios; pero si el minero los tiene ocupados o quisiera ocuparlos, otorgará fianza suficiente mientras se practican las diligencias conducentes al pago. En la valoración se considerará el espacio comprendido dentro de las señales o linderos provisionales que se fijan para determinar las pertenencias. Practicada la mensura y demarcación legal, se harán las restituciones correspondientes, según la mayor o menor extensión que definitivamente se adjudique. (Artículo 159 del Código de Minera).

Mientras que en la legislación peruana mientras no este aprobada la servidumbre, no se podrá iniciar las obras para las que fue solicitada.

1.7.4. Guatemala; Ley de Minería.

El Congreso de la República de Guatemala, decretó la Ley de Minería actualmente vigente contenida en el Decreto 48-97, publicada el 17 de julio de 1997.

En la legislación minera de Guatemala es desarrollada en su Ley Minera, en el capítulo II. Servidumbres Legales.

a) Tipos de Servidumbres

- **Servidumbres legales.** Las servidumbres legales comprenden las de paso, que incluye la construcción de senderos, trochas, caminos, excavaciones y perforaciones; las de agua, acueducto y todas aquellas que señale la legislación ordinaria y que sean necesarias sobre la base de los estudios técnicos correspondientes, incluyendo el derecho de inspección y mantenimiento permanente. (Ley Minera artículo 72)
- **Servidumbres en predios de dominio público.** En el caso de que el titular de derecho minero necesite establecer servidumbres en predios de dominio público, deberá convenir éstas con las autoridades correspondientes. Las dependencias del Estado y entidades autónomas deben coadyuvar en el establecimiento de las servidumbres de que se trate. (Ley Minera artículo 73)

b) Plazo de servidumbres.

Las servidumbres se constituirán por el mismo plazo para el cual se otorgue el derecho minero y sus prórrogas.

En el caso que se extinga la servidumbre por cualquier motivo, el propietario o poseedor del predio sirviente recuperará el pleno dominio del bien afectado y no estará obligado a devolver la compensación recibida. (Ley Minera artículo 74)

c) Derechos que implica la constitución de servidumbres.

El establecimiento de servidumbres a que se refiere el presente capítulo implica para los titulares de las mismas, además de los derechos establecidos en el Código Civil, los siguientes:

- Realizar las obras e instalaciones necesarias destinadas a las operaciones mineras, en los terrenos afectados por la servidumbre.
- Utilizar las áreas de las servidumbres en general para la inspección, mantenimiento, reparación y modificación de las instalaciones correspondientes.
- Delimitar los terrenos para las bocatomas, canales de conducción, vertederos, clasificadores, estanques, cámaras de presión, tuberías, canales de desagüe, excavaciones, perforaciones, caminos de acceso y en general todas las demás obras estrictamente requeridas .
- Descargar las aguas por los cauces existentes en el predio sirviente, siempre que las condiciones de los mismos lo permitan y se cumpla con las leyes de protección ambiental. (Ley Minera artículo 75)

c) Obligaciones que implica la constitución de las servidumbres legales.

Las servidumbres a que se refiere el presente capítulo implican para los propietarios o poseedores de los predios sobre los cuales se constituyan éstas, las siguientes obligaciones:

- Permitir la construcción de las instalaciones que correspondan, así como el paso de los inspectores y de trabajadores que intervengan en el transporte de materiales y equipo necesario para los trabajos de operaciones mineras.
 - La no realización de construcciones, siembras u otros trabajos dentro del área de la servidumbre; se exceptúan los cultivos, siembras y en general, el uso de la tierra que no afecte dichas actividades y se realizarán bajo cuenta y riesgo del propietario, sin perjuicio de lo estipulado en el inciso anterior. (Ley Minera artículo 76)
- d) Indemnización.** El titular de derecho minero que pretenda la constitución de servidumbres legales deberá pagar anticipadamente y en efectivo, al propietario o poseedor del inmueble que deba soportar la servidumbre, la indemnización por los daños y perjuicios que se prevea puedan causarse. El monto de la indemnización será fijado de mutuo acuerdo por el titular del derecho minero y el propietario o poseedor de la finca que soportará la servidumbre. En el caso de no llegarse a un acuerdo en cuanto al monto de la indemnización cualquiera de las partes podrá acudir a un juez de instancia civil para que mediante el trámite de los incidentes o al arbitraje, de conformidad a la Ley de Arbitraje, para que resuelvan en definitiva, resoluciones contra las cuales no cabrá recurso de apelación o de revisión, respectivamente. (Ley Minera artículo 77)

En la legislación nacional para iniciar el le procedimiento de servidumbre en la a etapa de tracto directo entre las partes se inicia mediante carta notarial, en la cual el solicitante de la servidumbre propone al propietario

del predio el tracto directo.⁴⁴El propietario es el único que tiene facultades para gravar el bien.

1.7.5. El Salvador; Ley de Minería y sus Reformas, por decreto N° 544.

Ley de Minería y sus Reformas (Decreto No. 544 de fecha 14 de diciembre de 1995 y Decreto N° 475 del 22 de Julio de 2002, El Salvador.

En la legislación del Salvador desarrolla la servidumbre minera en la Ley Minera por decreto N° 544 en el Capítulo VIII.

a) Tipos de Servidumbres

o Servidumbres Voluntarias

Los Titulares de Licencias o Concesiones mineras podrán convenir con los **propietarios o poseedores** de los terrenos que le sean necesarios para realizar sus actividades mineras, las servidumbres voluntarias que consideren convenientes. (Ley de Minería Art.53)

Criterio que es también tomado en cuenta por la legislación de Guatemala en artículo 77 de la Ley Minera más no en Perú.

o Servidumbres Legales

Además de las Servidumbres Voluntarias, los Titulares gozarán de las Servidumbres Legales de Ocupación, Tránsito o Paso, Desagüe, Ventilación, Transmisión de Energía Eléctrica o de cualquier otra que beneficie directamente o requiera la actividad minera. Las servidumbres mineras se registrarán por las disposiciones de esta Ley y en lo no previsto, por las disposiciones del Código Civil. (Ley de Minería Art.54)

⁴⁴ Artículo 1° del Decreto Supremo N° 015-2003-AG, modificatoria de artículos del Reglamento del Artículo 7° de la Ley N° 26505, sobre procedimiento para el establecimiento de servidumbre legal minera, aprobado por Decreto Supremo N° 017-96-AG.

b) Constitución de servidumbres

La constitución de Servidumbres a que se refiere esta ley es temporal; su ejercicio e indemnizaciones que correspondan se establecerán por mutuo acuerdo entre el titular y el propietario u ocupante del terreno, mediante Escritura Pública, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente y se anotará en el Registro de la Dirección. (Ley de Minería Art.56)

c) Reglas para la fijación de la Indemnización

Para la fijación del monto de la indemnización originada en el ejercicio de las servidumbres a que se refiere este Título, se observarán las siguientes reglas:

a) Se atenderá en forma objetiva el valor comercial actual de uso de los bienes afectados o deteriorados por el ejercicio de la servidumbre y no la importancia económica de los proyectos y obras de minería, ni la calidad y valor de los minerales a extraerse, ni la capacidad económica de la persona obligada a la indemnización;

b) Si la ocupación del inmueble fuere parcial y no causare demérito al predio como un todo o a las partes del mismo no afectadas, la indemnización sólo comprenderá el valor del uso de la parte ocupada;

Si la ocupación del predio fuere transitoria, se estimará el valor de su uso por el tiempo necesario para mantener las obras y realizar los trabajos de minería. Se entiende que hay ocupación transitoria, cuando en el inmueble se instalan y operan obras, equipos, elementos trasladables o móviles que pueden ser retirados sin detrimento del terreno y cuya permanencia no exceda los dos años; se consideran permanentes cuando los mismos no pueden moverse por su misma naturaleza y ubicación sin ser destruidos o sin causar deterioro del terreno en que están ubicados; (Ley de Minería Art.57)

1.7.6. Costa Rica; Código de Minería, Ley No. 6797

El Código de Minería vigente de Costa Rica, ley 6797 fue publicado el 3 de diciembre de 1984, en el año 2002, tuvo una modificación parcial importante. Realmente el Código de Minería fue diseñado especialmente para la minería metálica que estaba en auge en ese momento, vía reglamento y por varios decretos ejecutivos, hasta llegar a la emisión en el 2001 del decreto ejecutivo 29300-MINAE “Reglamento al Código de Minería”, es que se logra unificar los requisitos y procedimientos para solicitudes de permisos de exploración y concesiones de explotación, sean éstos metálicos o no metálicos y cauces de dominio público. Así como la actividad minera del Estado y sus contratistas, de las Municipalidades e Instituciones Autónomas.

a) Servidumbres Mineras.

Las servidumbres podrán consistir, entre otras cosas, en la ocupación de terrenos, en la extensión necesaria. Esta ocupación podrá referirse a depósitos de minerales, desmontes, relaves y escorias; a plantas de extracción y de beneficio de minerales; a canales, tanques, cañerías, habitaciones, construcciones y obras complementarias; a caminos, ferrocarriles, planos inclinados, andariveles y a vías que unan la concesión con los caminos públicos, con estaciones de ferrocarril, con puertos de embarque, con centros de consumo o con establecimientos de beneficios y con otros semejantes. Consistirán en el uso de las aguas pluviales, de las aguas que broten o aparezcan durante las operaciones, de las que provengan desagües o de las que corran por causas naturales o artificiales. Asimismo las servidumbres consistirán en el pastoreo de animales destinados a los trabajos de explotación. La facultad de imponer servidumbres y de expropiar lo será sin perjuicio de la concesión que deba obtenerse, según la ley, para utilizar aguas de dominio público, así como fuerzas hidráulicas y eléctricas. (Código de Minería Artículo 51)

b) Constitución.

Las servidumbres serán constituidas por la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos, previa indemnización de los daños y perjuicios que se causaren a los dueños de los terrenos, a los concesionarios, o a otras personas; de no haber acuerdo entre los interesados. Además, el concesionario deberá indemnizar al dueño por los daños y perjuicios que le cause con el uso y disfrute de la servidumbre. La resolución final podrá ser apelada ante el tribunal de justicia correspondiente. Sin embargo, los trabajos relacionados con la explotación podrán continuar su proceso, a juicio y riesgo del concesionario, mientras se realiza el trámite judicial. Las servidumbres que se establezcan, conforme con el presente título, deberán inscribirse en los registros de la Dirección, para que formen parte de la concesión o del permiso. Código de Minería Artículo 52)

En la legislación peruana a diferencia de la legislación costarricense no se acepta el inicio de la actividad mineras mientras no termine el procedimiento de servidumbre

Si no se produjera acuerdo entre los interesados, para establecer las servidumbres y para fijar el monto de la indemnización que procediere, el concesionario de explotación podrá acogerse a los preceptos del título anterior, o pedir al Poder Ejecutivo que decrete la expropiación de los terrenos necesarios, la que se realizará de conformidad con la legislación vigente, para lo cual el concesionario deberá cubrir los costos. Para los efectos de la expropiación se declararán de utilidad pública los correspondientes terrenos. A toda persona física o jurídica que se viere afectada por el presente artículo, el Estado deberá garantizarle la reubicación en condiciones similares que le permitan asegurar, dignamente, su futuro. Código de Minería Artículo 53)

En Costa Rica se equipara la expropiación con la servidumbre criterio que dista mucho de la legislación peruana, debido a que en el Perú se ha prohibido la expropiación por utilidad pública y muchos menos en beneficio de un tercero según lo establece el artículo 70 de la Constitución Política del Perú.

1.7.7. Bolivia; Ley N° 1777, Código de Minería

La Ley N° 1777, fue publicada el 17 de marzo de 1997, por el Congreso Nacional Boliviano. En la legislación de Bolivia desarrolla la servidumbre minera en su Código de Minería, Ley N° 1777, en su capítulo II.

a) Constitución.

Las servidumbres mineras se constituyen, modifican y extinguen por acuerdo de partes o por disposición de la ley. Los concesionarios mineros, para el desarrollo de sus actividades, pueden constituir en cualquier tiempo toda clase de servidumbres en cualquier área superficial de dominio privado y en concesiones mineras colindantes o vecinas. Los gastos que demande la constitución de las servidumbres serán pagados por el titular de la concesión dominante. (Código de Minería artículo 56)

b) Concesiones Sirvientes.

Las concesiones mineras quedan sometidas a la servidumbre de curso natural de las aguas procedentes de otras concesiones hasta el desagüe común. (Código de Minería artículo 57)

c) Extinción.

Las servidumbres se extinguen juntamente con las concesiones mineras dominantes. También se extinguen o se reducen parcialmente cuando cambia la necesidad de su establecimiento o su titular las destina a uso distinto para el que fueron constituidas. Las servidumbres pueden también ampliarse si las necesidades de la concesión dominante así lo requieren. (Código de Minería artículo 58)

d) De la expropiación (Capítulo III)

El concesionario que no llegue a un acuerdo con el propietario del suelo sobre el uso, aprovechamiento, precio o la extensión del terreno necesario para la realización de sus actividades mineras, podrá expropiar a éste, dentro o fuera del perímetro de su concesión; las superficies que requiera para erigir las construcciones e instalaciones a que se refiere el artículo 34, en sujeción a los procedimientos establecidos en los Capítulos III y IV, Título III del Libro Segundo de este Código. . (Código de Minería artículo 59)

La expropiación minera no requiere, en ningún caso, de declaratoria previa de necesidad y utilidad pública. A tal fin las construcciones, ingenios, plantas, instalaciones y vías de comunicación para la realización de actividades mineras son obras de interés público. . (Código de Minería artículo 60)

El propietario del suelo recuperará total o parcialmente el suelo expropiado cuando todo o parte del mismo se destine a uso distinto de la actividad minera, o cuando no se haya hecho uso de él en el plazo de dos años a partir de la expropiación. (Código de Minería artículo 61)

La legislación minera boliviana, en este artículo demuestra la prioridad de la minería sobre cualquier actividad, al otorgar la capacidad para expropiar sin tener la necesidad de la declaratoria previa de necesidad y utilidad pública.

1.7.8. Uruguay; Ley Nº 15.242, Código de Minería.

La Legislación de Uruguay desarrolla la servidumbre minera, Código de Minería; Ley Nº 15.242; publicada el 8 de enero de 1982, las servidumbres son desarrolladas en el Capítulo VII.

a) Todos los inmuebles quedan sujetos a las siguientes servidumbres mineras:
(Código de Minería Artículo 31)

o **De estudio:**

Que comprende: el libre acceso a los predios para efectuar las labores necesarias para la prospección, la extracción de muestras de sustancias minerales, así como la instalación de carpas para el alojamiento de técnicos, personal auxiliar y equipos, por el tiempo indispensable para realizar los reconocimientos y relevamientos propios de la prospección.

En esta servidumbre se encierra el cateo y la prospección.

De ocupación temporaria o permanente:

Que habilita el reconocimiento del subsuelo por medio de sondeos y perforaciones, comprendiendo el emplazamiento y circulación de máquinas, instalaciones, vehículos, instalación de viviendas provisorias, la toma de agua necesaria para los trabajos y consumo del personal, el tendido de líneas de transmisión eléctrica, de cintas transportadoras, de instalación de depósitos y almacenes, y, en general, las necesarias para la ejecución de la actividad minera.

o **De paso:**

Para el acceso a los lugares de laboreo y campamento instalado. La servidumbre se establecerá por los puntos más favorables para sus fines procurando causar el menor perjuicio al predio sirviente. El ancho de la senda de paso será el indispensable para el tránsito seguro de las personas y vehículos y para el acarreo o transporte de los materiales necesarios para las labores y para el retiro de las sustancias extraídas.

Los caminos abiertos para una mina aprovecharán a las demás que se encuentren en el mismo asiento y en tal caso los costos de conservación se repartirán a prorrata entre los titulares de derechos mineros.

- De tendido de ductos:

Que comprende el tendido de cañerías, el establecimiento de plantas de bombeo y toda la instalación necesaria para el funcionamiento de los ductos.

A los efectos de la indemnización la servidumbre de ductos se considera equivalente a la de ocupación permanente.

Las servidumbres de ocupación temporaria o permanente y las de paso pueden gravar inmuebles distintos a los comprendidos en el área determinada por el título minero.

El ejercicio de las servidumbres mineras da lugar a indemnización por los siguientes conceptos:

- ❖ Por imposibilidad de usar y gozar del inmueble y sus mejoras, total o parcialmente.
- ❖ Por daño causado al inmueble y a sus mejoras.

Por mejoras se entienden las construcciones, cercos e instalaciones en general, y asimismo, plantaciones, praderas mejoradas o artificiales, y otras similares. (Código de Minería Artículo 35)

Las indemnizaciones debidas para las distintas servidumbres se determinaran según las siguientes reglas: (Código de Minería Artículo 36)

Para las servidumbres de paso, de ocupación temporaria o permanente, en cuanto signifiquen la imposibilidad de uso y goce del inmueble o sus mejoras, total o parcialmente: se tomará como criterio el precio de los arrendamientos de inmuebles de análoga calidad en la zona, teniéndose presente las mejoras existentes y la disminución de rentabilidad del resto del predio, sin perjuicio de indemnizar los daños y perjuicios que se causen.

Para la servidumbre de estudio, se tomarán en consideración los daños y perjuicios que se causen por el ejercicio efectivo de la misma.

Las indemnizaciones se abonarán de la siguiente manera:

- Las que deriven de la imposibilidad de uso y goce del inmueble y sus mejoras, por prestaciones periódicas en semestres adelantados, actualizadas según la variación oficial del índice del costo de vida.
- Las que respondan al daño causado al inmueble o a sus mejoras, el quedar consumado dicho daño. (Código de Minería Artículo 37)

b) Procedimiento.

El acto administrativo que declare la existencia de la servidumbre de paso, o de ocupación temporaria o permanente establecerá la cantidad que el beneficiario de la servidumbre deberá abonar, previo a su ejercicio efectivo, a cuenta del resarcimiento definitivo que acuerden las partes o, en su defecto, la autoridad jurisdiccional. La administración fijará la cantidad mencionada, según una estimación prudencial adecuada a la indemnización, que deberá abonarse por semestres y por adelantado, y actualizada de acuerdo a lo establecido en el Artículo 37. (Código de Minería Artículo 38)

Justificado el pago a cuenta del primer semestre ante la Administración, esta autorizará el ejercicio inmediato de la servidumbre declarada.

Si este ejercicio es obstaculizado o no puede verificarse, el beneficiario recurrirá al Juez de Paz del lugar de ubicación del inmueble, quien, comprobado el derecho a la servidumbre declarada, intimará al opositor el cese de la oposición. A estos fines, el Juez podrá disponer el auxilio de la fuerza pública o imponer al opositor, con la calidad de combinación pecuniaria o “*Astreinte*”, el pago de una suma diaria del orden del 1% de la cantidad fijada para cada semestre, hasta que se dé cumplimiento al mandato judicial. (Código de Minería Artículo 39)

Iniciado el ejercicio efectivo de la servidumbre, el acreedor de la indemnización por este concepto, tendrá acción ejecutiva contra el beneficiario de la

servidumbre para el cobro de las cantidades que deba pagar a cuenta, según lo dispuesto por el Artículo 38.

El testimonio del acto administrativo que establezca las cantidades semestrales pagaderas a cuenta constituirá título ejecutivo.

El ejercicio de esta acción ejecutiva no obsta las acciones judiciales que correspondan para determinar el justo monto del resarcimiento. (Código de Minería Artículo 40)

El juicio para la determinación del resarcimiento justo por la privación del uso y goce del inmueble gravado por la servidumbre se ajustará al procedimiento previsto para los incidentes (Artículo 591 a 594 del Código del Procedimiento Civil). El demandado podrá reconvenir al contestar la demanda, corriéndose, en este caso, trasladado al actor.

El fallo será recurrible como las interlocutorias. La sentencia que fije el monto de la indemnización tendrá efecto desde la fecha de la demanda y determinará los pagos complementarios o las restituciones que correspondan con relación a lo abonado a cuenta. (Código de Minería Artículo 41)

Tanto el beneficiario de la servidumbre como el acreedor de la indemnización podrán deducir acción de revisión, conforme al mismo procedimiento judicial, fundados en el cambio de las circunstancias que fueron consideradas, a fin de modificar los montos de la indemnización.

Cuando se acoja la acción de revisión, la sentencia tendrá efecto desde la fecha de la demanda. (Código de Minería Artículo 42)

Las reclamaciones por concepto de indemnización o resarcimiento de daños y perjuicios causados al predio o a sus mejoras, derivados del ejercicio de las servidumbres mineras, o de la ejecución de labores mineras, quedan sometidas al procedimiento del juicio ordinario. (Código de Minería Artículo 43)

Cuando el Estado o las entidades estatales sean los beneficiarios de la servidumbre minera, a falta de acuerdo sobre la indemnización, ésta se fijará

por el procedimiento prescrito para la expropiación. (Código de Minería Artículo 44)

1.7.9. México.- Reglamento de la Ley Minera.

La Legislación de México desarrolla la servidumbre minera en el Reglamento de la Ley Minera, publica el 15 de febrero del 1999; la servidumbre minera fue desarrollada en el Capítulo II.

a) De las Expropiaciones, Ocupaciones Temporales y Constitución de Servidumbres.

Las solicitudes de expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre, deberán contener:

- ❖ Nombre del concesionario o de quien lleve a cabo las obras y trabajos de exploración o de explotación mediante contrato;
- ❖ Nombre del lote y número de título que ampare los derechos del solicitante;
- ❖ Clase de afectación que se solicita, y tratándose de servidumbre la mención de si es superficial o subterránea. En este último supuesto, nombre del lote y número del título de la concesión por afectar, en su caso;
- ❖ Superficie del terreno que se pretende afectar;
- ❖ Datos relativos al punto de partida y sus coordenadas correspondientes, a la línea o líneas auxiliares y al perímetro del terreno objeto de la afectación y la liga al punto de partida de la concesión o asignación minera beneficiaria de la misma;
- ❖ Nombre y domicilio del propietario del terreno o del titular de la concesión objeto de la afectación;

- ❖ Obras y trabajos que se ejecutarán, uso que se dará al terreno y razones que fundamenten la expropiación, ocupación temporal o servidumbre y
- ❖ Duración de la ocupación o servidumbre, que no excederá de la vigencia de la concesión.

A la solicitud se acompañará el avalúo practicado a costa del interesado por la Comisión si se trata de ocupación temporal o servidumbre superficial, así como, en su caso, la documentación que acredite fehacientemente la conformidad del afectado. (Reglamento de la Ley Minera Artículo 55)

La Secretaría resolverá favorablemente la **ocupación temporal o constitución de servidumbre** dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la solicitud, siempre que:

- ❖ Se acredite fehacientemente la conformidad del afectado;
- ❖ El terreno objeto de la afectación esté comprendido dentro del lote minero que ampare la concesión beneficiaria de la misma, y
- ❖ III.- El monto de la indemnización pactada sea cuando menos igual al que corresponda según el avalúo practicado por la Comisión.

Se tendrá por fehacientemente acreditada la conformidad del afectado cuando se haga constar ante fedatario público. En el caso de ocupaciones temporales o constitución de servidumbres sobre tierras ejidales o comunales, se estará a lo dispuesto por la Ley Agraria. (Reglamento de la Ley Minera Artículo 56)

La Secretaría practicará visita para dictaminar sobre la procedencia de la afectación solicitada cuando no se acredite fehacientemente la conformidad del afectado o se trate de expropiaciones, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- ❖ La Secretaría dispondrá de un plazo de 15 días a partir de la recepción de la solicitud para integrar el expediente. Una vez transcurrido dicho plazo, la Secretaría no podrá requerir información adicional al interesado. En caso de no cubrirse los requisitos señalados en el artículo 55 de este Reglamento, se procederá a desecharla, indicando las causas que dan motivo a dicho desistimiento;
- ❖ Integrado el expediente, dentro de los 5 días siguientes, la Secretaría dará a conocer al afectado la solicitud de expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre, para que dentro de un plazo de 30 días, manifieste lo que a su derecho convenga;
- ❖ Si el afectado manifiesta su inconformidad o no contesta dentro del plazo señalado, la Secretaría, dentro de los 5 días siguientes a la manifestación de inconformidad o al vencimiento del mismo, designará un dictaminador y le comunicará su nombramiento y la orden de visita;
- ❖ Dentro del mismo plazo de 5 días notificará al solicitante y al afectado: el nombre del dictaminador, el objeto de la visita, así como el lugar, fecha y hora de su verificación para que concurren por sí o debidamente representados;
- ❖ La notificación al solicitante incluirá el costo de la visita fijándole un plazo de 5 días contado a partir de la fecha de notificación, para que acredite el pago de los derechos derivados de la misma. En caso de no acreditar dicho pago, la Secretaría tendrá por desistido al interesado de su solicitud y notificará de ello al afectado;
- ❖ El dictaminador, una vez que se identifique, practicará la visita en el lugar, fecha y hora señalados, ante las partes o sus representantes debidamente acreditados, así como ante dos testigos designados por el afectado, y en caso de negativa de éste, por el dictaminador;

- ❖ El dictaminador verificará sobre la necesidad de la afectación solicitada, la extensión del terreno por afectar y los daños que puedan causarse a bienes de interés público, afectos a un servicio público o de propiedad privada, ejidal o comunal;
- ❖ Desahogada la visita, el dictaminador levantará acta circunstanciada que deberá contener relación de los hechos y las manifestaciones de las partes, y será firmada por los asistentes a la misma, y si alguno se niega a firmarla se hará constar en ella, sin que tal circunstancia afecte el valor probatorio de dicha acta;
- ❖ El dictaminador deberá rendir a la Secretaría dictamen técnico fundado, dentro de un plazo máximo de 15 días naturales siguientes al desahogo de la visita;
- ❖ La Secretaría, a partir de la recepción del dictamen técnico, procederá al desahogo de las pruebas ofrecidas en un plazo de 15 días, prorrogables a 30 en razón de la naturaleza de las mismas y
- ❖ La Secretaría, con base en el dictamen técnico y el resultado del desahogo de las pruebas, dentro de un plazo de 30 días, contado a partir de tal desahogo, resolverá sobre la procedencia de la ocupación temporal o constitución de servidumbre señalando como monto de la indemnización el correspondiente al avalúo practicado por la Comisión, o bien, someterá a la consideración del Titular del Ejecutivo Federal el decreto de expropiación respectivo.

Tratándose de expropiaciones que afecten bienes ejidales o comunales, la Secretaría turnará el expediente a la Secretaría de la Reforma Agraria. (Reglamento de la Ley Minera Artículo 57)

b) Las indemnizaciones por concepto de expropiación deberán cubrirse en una sola exhibición, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que surta

efectos la notificación del decreto respectivo. Tratándose de expropiaciones ejidales, éstas se sujetarán a la ley de la materia.

Las indemnizaciones por concepto de ocupación temporal o constitución de servidumbre deberán cubrirse anualmente, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución, y posteriormente en cada aniversario de ésta, dentro del plazo señalado.

El monto de las indemnizaciones anuales se actualizará en la fecha de cada aniversario, de acuerdo con la variación del Índice de precios en los doce meses inmediatos anteriores. (Reglamento de la Ley Minera Artículo 58)

c) De los Avalúos con motivo de la Ocupación Temporal o Constitución de Servidumbres. Capítulo III

Para obtener el avalúo a que se refiere el artículo 55, último párrafo, de este Reglamento, el solicitante de la afectación formulará ante la Comisión o sus Delegaciones Regionales la solicitud del servicio evacuatorio respectiva, misma que deberá acompañarse de la documentación siguiente:

- ❖ Copia del proyecto de solicitud de ocupación temporal o constitución de servidumbre;
- ❖ Fotografías que permitan apreciar las características del terreno por afectar, así como plano que precise su localización e indique los caminos de acceso al centro de población más cercano, medidas, colindancias y superficie por afectar;
- ❖ Inventario aproximado y características genéricas de los bienes distintos del terreno existentes en el mismo y
- ❖ Anticipo de los costos y gastos que origine la práctica del avalúo por el equivalente a 50 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Si falta algún dato o documento, la Comisión procederá conforme a lo establecido en el artículo 17 A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La Comisión o sus Delegaciones Regionales notificarán al interesado mediante telegrama haber concluido el avalúo, al igual que el importe de los costos y gastos pendientes de cubrir, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de recepción de la solicitud respectiva, a su entera satisfacción.

Una vez cubierto el importe, el avalúo será entregado por servicio de mensajería al interesado. (Reglamento de la Ley Minera Artículo 59)

d) El monto de la indemnización que consigne el avalúo practicado por la Comisión con motivo de la ocupación temporal o la constitución de servidumbre superficial, deberá estar integrado por los componentes siguientes:

- ❖ Un pago por única vez equivalente al valor comercial de los bienes distintos del terreno objeto de la afectación, que deberá cubrirse en la primera indemnización, y
- ❖ Un pago anual durante la vigencia de la afectación equivalente a la renta del terreno por afectar o a la depreciación de las obras y caminos existentes.

Tratándose de la ocupación temporal de terrenos destinados a presas de jales, depósitos de escorias o graseros, explotación a cielos abiertos y subterráneos que ocasionen o puedan ocasionar hundimiento de la superficie, se cubrirá una compensación anual adicional durante los cinco primeros años de vigencia de la afectación equivalente al 50% de la renta de dicho terreno. (Reglamento de la Ley Minera Artículo 60)

1.7.10. Chile.- Código de Minería.

El Código de Minería de Chile de fecha 26 de septiembre de 1983.

a) De las servidumbres que gravan los predios superficiales (Art. 120-125)

Desde la constitución de la respectiva concesión y con el fin de facilitar la conveniente y cómoda exploración y explotación mineras, los predios superficiales están sujetos a los siguientes gravámenes:

1° El de ser ocupados, en toda la extensión necesaria, por canchas y depósitos de minerales, desmontes, relaves y escorias; por plantas de extracción y de beneficio de minerales; por sistemas de comunicación, y por canales, tanques, cañerías, habitaciones, construcciones y demás obras complementarias;

2° Los establecidos en beneficio de las empresas concesionarias de servicios eléctricos, de acuerdo con la legislación respectiva, y

3° El de tránsito y el de ser ocupados por caminos, ferrocarriles, aeródromos, cañerías, túneles, planos inclinados, andariveles, cintas transportadoras y todo otro sistema que sirva para unir la concesión con caminos públicos, establecimientos de beneficio, estaciones de ferrocarril, puertos, aeródromos y centros de consumo. (Código de Minería Artículo 120)

Las mismas servidumbres que se reconocen en este título para las concesiones mineras podrán imponerse en favor de los establecimientos de beneficio de minerales. (Código de Minería Artículo 121)

b) Indemnización.

Las servidumbres se constituirán previa determinación del monto de la indemnización por todo perjuicio que se cause al dueño de los terrenos o al de la concesión sirviente, en su caso, o a cualquiera otra persona. (Código de Minería Artículo 122)

La constitución de las servidumbres, su ejercicio y las indemnizaciones correspondientes se determinarán por acuerdo de los interesados que conste

en escritura pública, o por resolución judicial. Podrá convenirse o resolverse que la indemnización se pague de una sola vez o en forma periódica.

Para que las servidumbres sean oponibles a terceros, deberán inscribirse en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces, o del de Minas, en su caso. (Código de Minería Artículo 123)

c) Plazo.

Las servidumbres son esencialmente transitorias; no podrán aprovecharse en fines distintos de aquellos propios de la respectiva concesión o del establecimiento y para los cuales hayan sido constituidas, y cesarán cuando termine ese aprovechamiento. Podrán ampliarse o restringirse, según lo requieran las actividades propias de la respectiva concesión o del establecimiento. (Código de Minería Artículo 124)

Mientras se tramita el juicio respectivo, el juez podrá autorizar al solicitante para hacer uso, desde luego, de las servidumbres pedidas, siempre que rinda caución suficiente para responder de las indemnizaciones a que pueda estar obligado. (Código de Minería Artículo 125)

1.8.Procedimiento para la obtención de Servidumbre Minera en el Perú.

Los titulares de las concesiones mineras pueden solicitar a la autoridad minera autorización para establecer servidumbres en terrenos de terceros para la racional utilización de la concesión. La servidumbre se establece previa indemnización justipreciada si fuera el caso.

1.8.1. Trato directo.

La utilización de tierras para el ejercicio de la actividad minera requiere acuerdo previo entre el titular de la concesión minera solicitante de la

servidumbre y el propietario del predio superficial, como paso previo para el establecimiento de la servidumbre legal minera.

La etapa de tracto directo entre las partes se inicia mediante carta notarial, en la cual el solicitante de la servidumbre propone al propietario del predio el tracto directo.⁴⁵

1.8.2. Conciliación.

De no producirse entre las partes en un plazo máximo de treinta (30) días laborables, el solicitante de la servidumbre se dirige a la Dirección General de Minería poniendo en conocimiento el agotamiento de la etapa de tracto directo, acompañando la constancia de recepción de la carta notarial por el propietario del predio.

En tal virtud, la Dirección General de Minería llamará a las partes y les invocará a conciliar con la participación de un Centro de Conciliación, designado en común acuerdo en un plazo no mayor de 10 días laborables. En caso de producirse este acuerdo, la Dirección General de Minería solicitará a la Dirección Regional Agraria de la jurisdicción una terna, de la cual elegirá al Centro de Conciliación para que en un plazo máximo de 30 días laborables, produzca el acuerdo respecto de la servidumbre.

La Conciliación se regulará conforme a la Ley de Conciliación y su Reglamento, y será sufragada por el solicitante de la servidumbre, a través de la Dirección General de Minería.

La Dirección General de Minería deberá instruir al propietario del terreno superficial sobre la legislación minera y de servidumbre legal minera, así

⁴⁵ Artículo 1° del Decreto Supremo N° 015-2003-AG, modificatoria de artículos del Reglamento del Artículo 7° de la Ley N° 26505, sobre procedimiento para el establecimiento de servidumbre legal minera, aprobado por Decreto Supremo N° 017-96-AG.

como sobre los derechos que le asisten, previamente a la innovación a conciliar.⁴⁶

1.8.3. Informe del perito.

Simultáneamente a la innovación a conciliar; la Dirección General de Minería designara un perito minero de nomina oficial que se pronuncie sobre la necesidad y magnitud de la servidumbre a efectos de la actividad minera planteada y solicitara al Consejo Nacional de Tasaciones (CONATA) para que designe un perito profesional agrónomo el que procederá a la tasación del área solicitada, elaborando adicionalmente un informe técnico debidamente sustentado que analice si la servidumbre es posible sin enervar el derecho de propiedad, es decir, sin perjudicar al resto del predio sirviente de tal modo que lo haga inútil o lo afecte de manera sustantiva respecto de los fines para los cuales estaba siendo usado o estuviere destinado.

El plazo máximo para ambas pericias es de 15 días laborables y serán remitidas al Centro de Conciliación y a la Dirección General de Minería para que sirvan de referencia o base en sus respectivos procedimientos.⁴⁷

1.8.4. Culminación de la etapa de conciliación.

El acuerdo al que lleguen las partes o la ausencia del mismo será objeto de certificación por parte del Centro de conciliación, notificándose a la Dirección General de Minería.

⁴⁶ Artículo 1° del Decreto Supremo N° 015-2003-AG, modificatoria de artículos del Reglamento del Artículo 7° de la Ley N° 26505, sobre procedimiento para el establecimiento de servidumbre legal minera, aprobado por Decreto Supremo N° 017-96-AG.

⁴⁷ Artículo 1° del Decreto Supremo N° 015-2003-AG, modificatoria de artículos del Reglamento del Artículo 7° de la Ley N° 26505, sobre procedimiento para el establecimiento de servidumbre legal minera, aprobado por Decreto Supremo N° 017-96-AG.

Culminada la etapa de conciliación sin que se hubiere producido el acuerdo entre las partes, podrá solicitarse a la Dirección General de Minería el inicio del procedimiento administrativo de servidumbre legal adjuntando a la carta notarial inicial, incorporándose entonces al expediente los respectivos informes periciales⁴⁸.

1.8.5. Solicitud.

La solicitud de establecimiento de servidumbre y/o expropiación se presentara a la Dirección General de Minería, indicando ubicación del inmueble y, en su caso, la apreciación del desmedro que sufrirá el presunto bien a afectar. Acompañara una memoria Descriptiva con el detalle de las obras a ejecutarse⁴⁹.

1.8.6. Comparendo.

La Dirección General de Minería citara a las partes al comparendo para el decimoquinto día útil de notificadas, bajo apercibimiento de continuar con el trámite en caso de inconcurrencia del propietario. En dicho acto, el propietario del inmueble deberá acreditar su derecho.

En caso de desacuerdo o de hacerse efectivo el apercibimiento, el Director General de Minería designara un perito, para lo cual ordenara la realización de la inspección ocular con citación de las partes interesadas y del perito⁵⁰.

⁴⁸ Artículo 1° del Decreto Supremo N° 015-2003-AG, modificatoria de artículos del Reglamento del Artículo 7° de la Ley N° 26505, sobre procedimiento para el establecimiento de servidumbre legal minera, aprobado por Decreto Supremo N° 017-96-AG.

⁴⁹ Artículo 130° del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM.

⁵⁰ Artículo 130° del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM.

1.8.7. Inspección ocular.

La inspección ocular se pronunciara dentro del plazo de sesenta días de la fecha de comparendo, a fin de comprobar la necesidad del derecho solicitado⁵¹.

1.8.8. Informe del perito.

Realizada la inspección, el perito deberá emitir su informe dentro del plazo de treinta días, y entregando con el expediente a la Dirección General de Minería.

La pericia deberá pronunciarse necesariamente sobre la indemnización por los daños y perjuicios correspondientes.⁵²

1.8.9. Opinión Técnica.

El Director General de Minería y el Director General de Promoción Agraria del Ministerio de Agricultura, dentro del plazo de 30 días útiles de recibidas las pericias; emitirá cada uno su opinión técnica pronunciándose respecto al cumplimiento del procedimiento indicado en la Ley General de Minería; y en la disposiciones reglamentaria vigentes; señalando, en forma expresa; si la servidumbre es posible sin enervar el derecho de propiedad, teniendo para ello en cuenta los dictámenes periciales, salvo que a su juicio las pericias contengan vicios o defectos, en cuyo caso la Dirección General de Minería ordenará se subsanen,

⁵¹ Artículo 130º del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM

⁵² Artículo 130º y Artículo 131º del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM

debiendo los peritos entregar la información a dicho órgano en un plazo máximo de 15 días laborales⁵³.

1.8.10. Resolución Suprema.

En caso que la servidumbre sea posible, sin enervar el derecho de propiedad; el Director General de Minería prepara el proyecto de Resolución Suprema que fijara la indemnización, junto con la minuta de establecimiento de la servidumbre; elevando todos los actuados dentro del plazo de 30 días útiles, para la expedición de la Resolución Suprema que impondrá la servidumbre, la que será refrendada por los Energía y Minas y Ministerio de Agricultura.

La Resolución Suprema que otorga la servidumbre sólo podrá contradecirse ante el Poder Judicial respecto al monto de indemnización fijada.⁵⁴

1.8.11. Consignaron.

Expedida la Resolución Suprema, el solicitante consignara en el Banco de la Nación a la orden de la Dirección Nacional de Minería el monto de la indemnización, en el plazo máximo de 10 días laborables de notificado con la Resolución, bajo pena de declararse abandonada la solicitud.⁵⁵

⁵³ Artículo 1° del Decreto Supremo N° 015-2003-AG, modificatoria de artículos del Reglamento del Artículo 7° de la Ley N° 26505, sobre procedimiento para el establecimiento de servidumbre legal minera, aprobado por Decreto Supremo N° 017-96-AG.

⁵⁴ Artículo 1° del Decreto Supremo N° 015-2003-AG, modificatoria de artículos del Reglamento del Artículo 7° de la Ley N° 26505, sobre procedimiento para el establecimiento de servidumbre legal minera, aprobado por Decreto Supremo N° 017-96-AG.

⁵⁵ Artículo 1° del Decreto Supremo N° 015-2003-AG, modificatoria de artículos del Reglamento del Artículo 7° de la Ley N° 26505, sobre procedimiento para el establecimiento de servidumbre legal minera, aprobado por Decreto Supremo N° 017-96-AG.

1.8.12. Suscripción de la escritura pública.

Efectuada la consignación, la Dirección General de Minería ordenara la suscripción de la escritura pública dentro de los 10 días laborables siguientes de notificadas a las partes.

La entrega de la indemnización al propietario de la tierra se efectuará contra la firma de la escritura pública.

Si transcurridos los 10 días laborables el propietario no firmase la escritura públicas, este será firmada en rebeldía por el Director General de Minería, instruyendo al Banco de la Nación para entregar al monto consignado al propietario.⁵⁶

1.8.13. Denegación de la Solicitud.

En caso de que la servidumbre enerve el derecho de propiedad, conforme a la opinión técnica de la Dirección General de Minería o de la Dirección General de Promoción Agraria del Ministerio de Agricultura, se denegara el pedido del concesionario minero mediante Resolución Ministerial expedida por el Ministerio de Energía y Minas.

En caso de no ser conocido el dueño del terreno materia de la solicitud; la citación a comparendo se hará por tres veces en el diario oficial el “El Peruano”, y en un periódico de la localidad o del lugar más próximos en donde se ubique el bien, mediante ocho días entre las publicaciones y, además, mediante un cartel que se fijara en el predio.

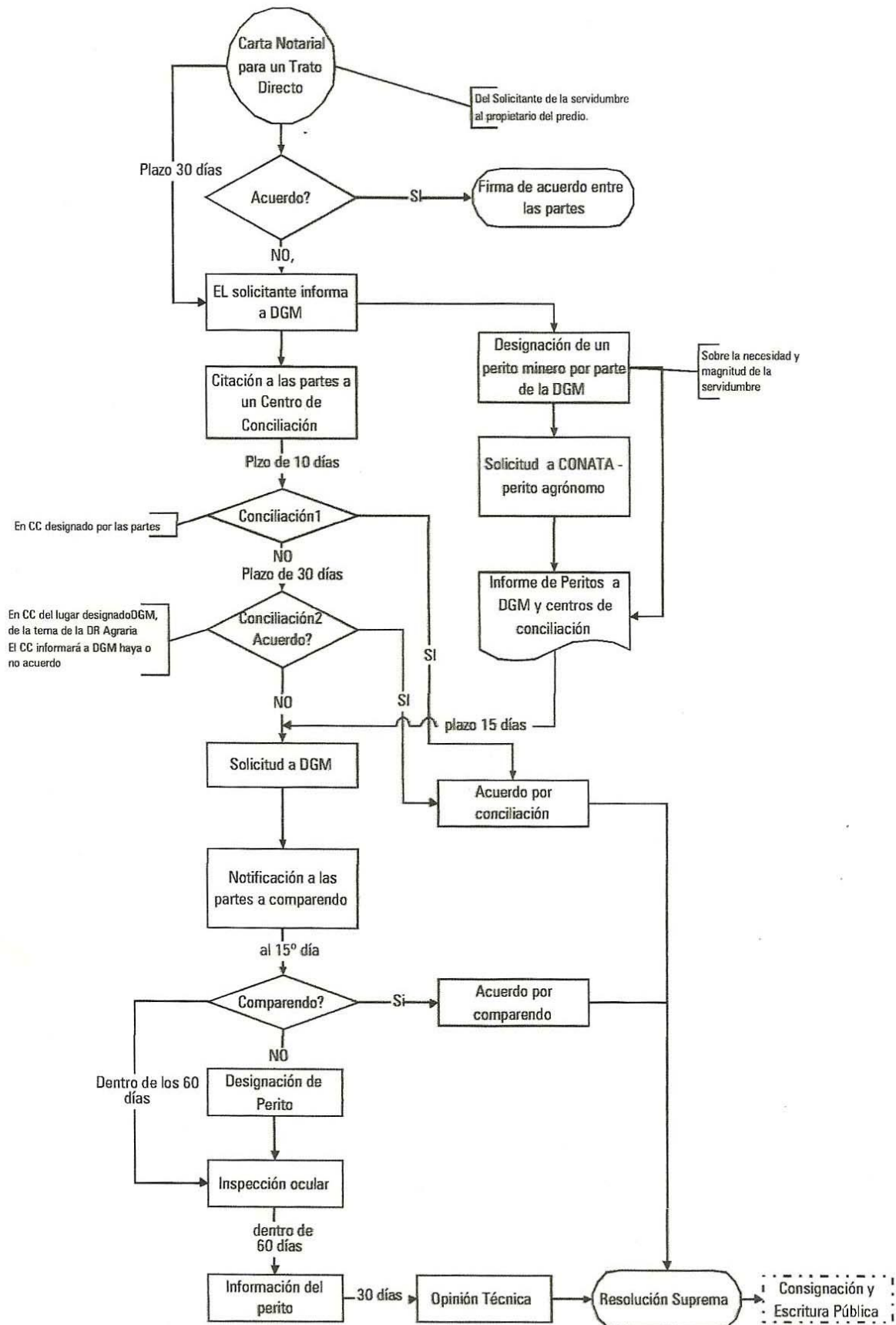
Mientras no este aprobada la servidumbre, no se podrá iniciar las obras para las que fue solicitada.

⁵⁶ Artículo 1° del Decreto Supremo N° 015-2003-AG, modificatoria de artículos del Reglamento del Artículo 7° de la Ley N° 26505, sobre procedimiento para el establecimiento de servidumbre legal minera, aprobado por Decreto Supremo N° 017-96-AG.

Si la autoridad minera comprueba que el bien materia de la expropiación es utilizado para los fines distintos a los específicamente solicitados, pasará sin costo alguno a dominio del Estado para lo cual la Dirección General de Minería expedirá la resolución respectiva, la que inscribirá en la Oficina Nacional de los Registros Públicos y en el INGEMNET.⁵⁷

⁵⁷ Artículo 1° del Decreto Supremo N° 015-2003-AG, modificatoria de artículos del Reglamento del Artículo 7° de la Ley N° 26505, sobre procedimiento para el establecimiento de servidumbre legal minera, aprobado por Decreto Supremo N° 017-96-AG.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER SERVIDUMBRES MINERAS



1.9. Derecho a la solicitud de Servidumbre Minera.

Esta facultad se le otorga al concesionario en los diversos supuestos:

1.9.1. Servidumbre minera sobre terrenos del Estado.- Los concesionarios tienen derecho a usar el terreno superficial eriazo que se encuentre ubicado dentro de los límites de su concesión. El uso es gratuito y automático, significa que no es necesario pedir dicho uso a la autoridad, el título de la concesión autoriza a usar la superficie, el legislador presume que el concesionario tiene que usar terreno necesariamente para el ejercicio de su actividad. El derecho de uso gratuito del terreno superficial eriza adquirido por el concesionario minero el Art. 10 del reglamento de la Ley 26505, Decreto Supremo 017-96-AG del 1/10/96, que establece: “ Los titulares de actividades mineras que mantienen en uso terrenos eriazos de dominio del Estado deberá presentar al Ministerio de Energía y Minas un plano a escala apropiada y una memoria descriptiva del terreno, señalando las áreas superficiales y servicios, dentro de un plazo de 90 días de puesto en vigencia este Reglamento a efecto de que el Sector organice un registro que le permita excluir dichos terrenos del procedimiento de subasta. “ Plazo venció el 28 de febrero de 1997. En conclusión los titulares de derechos mineros que necesiten usar terrenos superficiales eriazos ubicados dentro del perímetro de su concesión tendrán que adquirir dichos terrenos mediante venta o concesión de subasta pública.⁵⁸

La legislación es contradictoria con respecto a la servidumbre minera sobre terrenos del Estado, pues en primer termino concesionario minero tiene derecho a usar el terreno superficial eriazo que se encuentre ubicado dentro de los límites de su concesión; de forma gratuita y

⁵⁸ GARCIA MONTEFUR, Guillermo; FRANCISKOVIC INGUNZA, Militza. Derecho Minero Común. 2º Edición Marzo 2001. Grafica Horizonte. Pág. 93-95.

automática.; pero después para hacerlo requiere solicitarlo en vía subasta pública.

1.9.2. Servidumbre Minera sobre de terrenos de terceros.- La facultad de solicitar la imposición de servidumbres sobre terrenos de terceros, necesarios para la utilización de la concesión, exige en primer lugar un acuerdo con el propietario de las tierras, el que debe constar en documento expedido ante Notario y/o Juez de Paz, puesto a conocimiento de la Dirección General de Minería. En caso de no haber acuerdo con el propietario, luego de transcurridos 30 días de la comunicación cursada por el solicitante al propietario, debe servirse el procedimiento de servidumbre minera.

1.9.3. Servidumbre Minera sobre la superficie de otras concesiones.- El concesionario tiene la facultad de pedir a la autoridad la imposición de servidumbres sobre terrenos superficiales de otras concesiones mineras. Este derecho es absoluto porque el conflicto se establece entre intereses del mismo valor, entre intereses mineros. Por esta razón si la servidumbre a imponerse dificulta o impide las labores de la concesión sirviente la autoridad rechazara de plano la solicitud (Art. 37 inc. 4 TUO Ley General de Minería)

Los concesionarios tienen derecho a imponer servidumbres en el subsuelo de las concesiones vecinas o colindantes (servidumbres de socavón) con el objeto de constituir en las concesiones mineras vecinas o colindantes las labores necesarias para facilitar el acceso a su propia concesión, así como la ventilación, el desagüe, el acarreo de minerales y garantizar la seguridad de los trabajadores. El concesionario dominante asume dos obligaciones fundamentales:

- a) Indemnizar al concesionario sirviente se le causa daño, luego si no causa daño no hay lugar a indemnización. El

concesionario sirviente no tiene derecho a una compensación por el uso del subsuelo, puesto que el subsuelo es propiedad del Estado. Solamente en cuanto se afecte la actividad minera del concesionario sirviente tendrá que indemnizarse.

- b) Si el concesionario dominante al implantar la servidumbre descubre minerales, estos minerales que extrae de la concesión sirviente pertenecen al titular de esta concesión y el titular dominante debe dejar los minerales aludidos en la superficie a disposición del concesionario sirviente libre de costo.

De otro lado, el concesionario sirviente esta facultado para utilizar la servidumbre pero deberá pagar una compensación cuyo monto fijara de acuerdo con el dominante, si no hay acuerdo corresponde a la autoridad minera determinar dicho monto (Art. 37 inc5 TUO Ley General de Minería).⁵⁹

1.10.Servidumbre Minera en la Minería No metálica.

El artículo 6 del Reglamento de Procedimientos Mineros, dispone que no proceda el establecimiento de servidumbres para la actividad mineras no metálicas respecto de tierras de uso agrícola o ganadera. La limitación está basada en la Séptima Disposición Complementaria de Decreto Legislativo 653 y en el artículo 14 del T.U.O. Sin embargo, este último no extiende tal limitación respecto de actividades mineras no metálicas tratándose de pastos naturales, que son precisamente las tierras dedicadas a la ganadería, salvo los casos de ganadería estabulada. En este aspecto al artículo 7va mas allá del artículo 14 del TUO.

⁵⁹ GARCÍA MONTÚFAR, Guillermo; FRANCISKOVIC INGUNZA, Militza. Derecho minero común. 1a ED. Lima: Gráfica Horizonte; 1999.Pág. 97-98.

La legislación no especifica la razón por la que no se permite la servidumbre minera en la minería no metálica.

1.11.Diferencia entre Servidumbre Civil y Minera.

Las primeras se hallan reglamentadas por el Código Civil y las segundas por la Ley General de Minería y las normas especializadas de la materia son dos estatutos distintos que reglan materias diversas y que únicamente se ponen en relación para ilustrar y complementar los casos que en uno y otro se presentan. Cada uno de estos trae su capítulo sobre servidumbres, conviene saber que cada legislación se aplica en su respectivo ramo:

Diferencia, las que podemos sintetizar aquí:

- a) Las servidumbres civiles son generalmente perpetuas, en tanto que las mineras son transitorias, y como la mina se agota en el tiempo más o menos próximos con ella se extingue la servidumbre;
- b) Las servidumbres mineras gravan el mismo predio donde está ubicada la mina y los adyacentes, en tanto las civiles son de un predio a otro predio.
- c) En la servidumbre civil puede adquirirse por o extinguirse por prescripción; las servidumbres mineras no se adquieren ni se pierden por prescripción.
- d) La servidumbre civil de tránsito sólo puede establecerse cuando el predio dominante esté destituido de toda comunicación con el camino público; la servidumbre minera de tránsito pesa sobre todas las fincas o predios que se interpongan entre la mina y el camino público, aunque la mina colinde por otra con una vía pública.

1.12.Servidumbre Minera y Expropiación.

El artículo 7º del TUO faculta al concesionario a solicitar la expropiación de los inmuebles destinados a otro fin económico, que fueren necesarios para la racional utilización de la concesión y se acredite a juicio de la autoridad, la mayor importancia de la actividad minera sobre la actividad afectada. Sin embargo como en el caso de las servidumbres, el derecho a solicitar la expropiación puede convertirse en obligación de expropiación, si la servidumbre impuesta sobre el predio sirviente enerva el derecho de propiedad.

La expropiación es entendida como una venta forzosa o privación de la propiedad de un bien de dominio privado a favor del estado o entidad pública, previa indemnización justipreciada, y por razón de interés general, necesidad y utilidad pública o seguridad Nacional. La constitución de 1933, vigente al momento de la dación del código de 1950, permitía la expropiación “por causa de utilidad pública, aprobada legalmente y previa indemnización justipreciada”. Introducida en el Código de 1950, declara a la industria minera de utilidad pública; Además de la Constitución de 1979 también permitió la expropiación “por causa de utilidad pública, aprobada legalmente y previa indemnización justipreciada”.

El anterior dispositivo ha sido derogado por la actual Constitución. En efecto el Art. 70 de la constitución establece que sólo por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley expresa procede la expropiación de un predio perteneciente a terceros. Por ende, el concesionario minero no puede invocar necesidad pública para iniciar un proceso de expropiación.

En virtud de ello la Resolución N° 1345-95-EM/CM, del 13 de noviembre de 1995 expedida por el Consejo de Minería.

“Que, a partir del 01 de enero de 1994 rige en el Perú una nueva Constitución Política, que en su artículo 70 señala que “El derecho de

propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. A nadie puede privarse de su propiedad sino exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio;..”

1.13. Extinción de las servidumbres Minera.

La servidumbre minera es temporal. Las principales causales de extinción son:

- A. Por fenecimiento del termino convencional por el que naciera el gravamen.
- B. Por remisión expresa o tácita el dueño del predio dominante, pues tratándose de una carga impuesta al predio sirviente en beneficio del predio dominante, el dueño de este último, puede condenar la servidumbre.
- C. Pro falta de uso o “no uso de la servidumbre durante cinco años pues conforme al convenio respectivo o, en todo caso, conforme al Art. N° 1085 del C.C., “la servidumbre se conserva por el uso del predio sirviente”.
- D. Por la consolidación, esto es, cuando el titular de la concesión adquiere el predio sirviente o viceversa.

CAPITULO TERCERO

CASUÍSTICA DE LA SERVIDUMBRE

MINERA

CASUÍSTICA DE LA SERVIDUMBRE MINERA.

- I. Consejo de Minería;** es el órgano jurisdiccional administrativo en materia de minería y asuntos ambientales mineros encargado de conocer y resolver en última instancia.

a. Resolución N° 1345-95-EM/CM.

Este es un proceso en donde el Consejo de Minería declara la nulidad de oficio al proceso de expropiación

Las partes en el proceso de expropiación:

- ❖ Negociación Minera Lisandro Proaño S.R.L. "La Compañía"
- ❖ Comunidad Campesina de Viso. "La Comunidad"

Descripción del Proyecto:

- ❖ **Ubicación;** en el distrito de San Mateo, en la provincia del Hurachirí, departamento de Lima.
- ❖ **Descripción;** La Compañía requiere 4 hectáreas de terreno eriazo para la construcción de los campamentos.

Análisis del Proceso de Expropiación:

- ❖ **Solicitud de expropiación;** con fecha 06 de abril de 1983, La Compañía, solicita la expropiación de un terreno eriazo de 4 hectáreas ubicadas en el paraje Colquipallana, de propiedad de La Comunidad.

- ❖ **Comparendo;** se lleva acabo el 10 de julio de 1983, concluye con el acuerdo de las partes de llevar a cabo la expropiación, comprometiéndose la Comunidad a acreditar la propiedad del área expropiada.
- ❖ **Recurso N° 1067;** de fecha 10 de junio de 1991, La Compañía manifiesta que no habiéndose suscrito minuta y presentado documentos que acrediten la propiedad, solicita el inicio del procedimiento administrativo de expropiación.
- ❖ **Escrito N° 919770,** de fecha 16 de marzo, la Dirección General de Minería, notifica a la Comunidad para que presente su titulo de propiedad.
- ❖ **Recurso N° 929684;** de fecha 20 de julio de 1993, La Compañía solicita que se haga efectivo el apercibiendo y disponer se continúe el trámite en rebeldía del emplazado.
- ❖ **Resolución** de fecha 09 de agosto de 1983 se le otorga a la Comunidad el plazo de 10 días para que presente sus titulo de propiedad bajo apercibimiento.
- ❖ **Resolución** de fecha 05 de octubre de 1994, se le otorga a La Compañía, un plazo de 30 días para acreditar su condición de concesionaria y adecue su solicitud de expropiación a servidumbre si lo considera conveniente bajo apercibimiento de declarar el abandono de su solicitud según el Informe N° 407-94 EM/DGM/QTN de la Oficina Técnica Normativa en el que opina que la Actual constitución Política del Perú, vigente a partir del 01 de enero de 1994 que en su articulo 70 dispone que nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley y estando a que en el TUO de la Ley General de Minería establece en el numeral V de su Titulo Preliminar que la Industria Minera es de utilidad pública consecuentemente no teniendo

la industria minera declaración de necesidad pública característica necesaria para la procedencia de la expropiación, a fin de respetar la jerarquía de las normas debe notificarse a la recurrente para que adecue su solicitud de expropiación a servidumbre.

❖ **El Consejo de Minería Resuelve;** declarando la nulidad de todo lo actuado desde 5 octubre de 1994, y además improcedente la solicitud de expropiación.

- Precisando que cuando se inicio el procedimiento de expropiación por parte de La Compañía, esta vigente la constitución de 1979 la que establecía en su artículo 125 que procedía la expropiación por causa de necesidad pública y utilidad publica o interés nacional derivada por Ley. Pero a partir del 1 de enero de 1993 rige una nueva Constitución Política, que en su artículo 70 señala que *“El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. A nadie se le puede privar de su propiedad sino exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluye compensación por eventual perjuicio”*.
- Que por otro lado la Ley de Inversión Privada en el desarrollo de las actividades económicas en el territorio nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas, Ley N° 26505 en su Primera disposición Complementaria dispone que las causales de necesidad pública que la Ley puede invocar para proceder a la expropiación de un predio se circunscribirán a la ejecución de obras de infraestructura y servicios públicos.
- Que, al no haberse concluido el trámite con la Constitución de 1979, le son aplicables a dicho procedimiento las nuevas disposiciones, desde el momento en que entran en vigencia.

Apreciación Crítica:

En cuanto a las causales o motivos que justifican, la actual Constitución ha sido más restrictiva que las de 1979 y 1933. En efecto, hoy solo se puede expropiar por causa de seguridad nacional o necesidad pública. La Constitución de 1979 autorizaba la expropiación por causa de necesidad y utilidad públicas o de interés social y la de 1933, modificada en 1964 por la Ley N° 15252, por causa de utilidad pública o de interés social.

La necesidad pública alude a lo que es indispensable, lo que el interés público requiere; por ejemplo: la expropiación de predios para construir un hospital.

En cambio, la utilidad pública se basa en otorgar un beneficio o ventaja aun privado para el desarrollo su actividad económica. La obra no es indispensable pero sí conveniente. El interés social es, como ya se dijo anteriormente a propósito del ejercicio de la propiedad, aquello que beneficia a un determinado sector social. Este fue el caso de las expropiaciones para la reforma agraria. La Constitución de 1933, en su texto original, permitía expropiar solo por causa de utilidad pública. Sin embargo, como había consenso en el Congreso en los años sesenta para llevar a cabo la reforma agraria, se modificó la Constitución a través de la Ley N° 15252, agregándose el interés social como causal expropiatorio. Se trataba de responder al interés de un grupo social, el de los campesinos que no eran propietarios de tierras. La Constitución actual, decíamos, es más restrictiva. En efecto, solo se puede expropiar por necesidad pública o por seguridad nacional. Lo primero ya lo vimos. Lo segundo es aquello que responde a la preservación de la nación; por ejemplo, en el caso de un conflicto armado se expropián tierras para la construcción de un cuartel. Por cierto, en la medida que las causales de expropiación son más restringidas, la protección al derecho de propiedad privada es mayor. Con relación a la expropiación es el pago del precio del bien expropiado. La doctrina acepta que en aras del interés público, el Estado prive al particular de su derecho de propiedad, pero rechaza que no le pague el valor del bien. La Constitución de 1933 habla de "previa indemnización justipreciada". Cuando en la década del sesenta se debatió la reforma agraria, para la cual había por cierto que expropiar predios, se tropezó con la dificultad del pago porque el Estado no

contaba con los recursos requeridos. Los propietarios insistían que conforme a la Constitución el pago debía ser previo y en dinero. Ante esta situación se aprobó en el Congreso la modificación del artículo 29 de la Constitución, principalmente en dos puntos: (I) se incluyó el interés social como causal de expropiación, y (II) se autorizó el pago por cuotas o mediante bonos de aceptación obligatoria en las expropiaciones para la reforma agraria y otros fines.

El aprovechamiento de fuentes de energía y expropiaciones por causa de guerra o calamidad pública. La Constitución de 1979 mantuvo lo del interés social y el pago por cuotas o en bonos en los casos ya indicados. Pero ambas cosas fueron suprimidas por la actual Constitución.

Comentarios finales con relación a la expropiación:

Solo por ley cabe expropiar. Antiguamente podía hacerse también por decisión del Poder Ejecutivo, pero ahora esto no es posible. Además, el importe de la indemnización justipreciada debe incluir la compensación del perjuicio que hubiere. El justiprecio comprende, en consecuencia, no solo el valor mismo del bien que podríamos llamar el **daño emergente**, sino también el **lucro cesante**.

La Constitución actual, protege más al propietario que las dos Constituciones anteriores. Además el propietario expropiado puede cuestionar el valor de la propiedad que el Estado estableció en el proceso expropiatorio. No puede discutir la expropiación misma si esta se declaró conforme a ley, pero sí el precio. Por cierto, si la expropiación es arbitraria, el expropiado tiene expedita la acción de amparo en defensa de su derecho de propiedad.⁶⁰

La diferencia fundamental entre expropiación y servidumbre es que la primera extingue la propiedad. Desde el punto de vista de expropiante, la expropiación es el apoderamiento de la propiedad ajena que el Estado, u otra entidad

⁶⁰ GACETA JURIDICA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, La Constitución Comentada, Tomo I, Primera Edición, Diciembre 2005. Pág. 925-925.

pública, lleva a cabo por motivos de utilidad general y abonando justa y previa indemnización. La servidumbre no extingue la propiedad sino su exclusividad; además hay servidumbres que restringen severamente las facultades del propietario, pero esto puede ocurrir no solamente con las servidumbres mineras sino con toda clase de servidumbres. Así, por ejemplo, una servidumbre de paso, prevista en el Código Civil, podría afectar gravemente al predio sirviente es un terreno angosto que por razón del camino y del paso queda inhabilitado para la explotación agrícola. Este hecho no convierte la servidumbre en expropiación. Simplemente hay que tenerlo en cuenta para la valorización⁶¹.

En el caso en particular se presenta un proceso administrativo, que se desarrolla entre vigencia dos Constituciones Políticas, la del 1979 y la del 1993; la misma que cambia los supuestos para imponer la expropiación e excluye el supuesto de utilidad pública. El proceso de expropiación se inicia con fecha 06 de abril de 1983; incluso el comparendo se lleva a cabo el 10 de julio de 1983, concluye con el acuerdo de las partes de además la Comunidad se compromete a acreditar la propiedad del área. Pero por demora excesiva del proceso causó que el ente administrativo sugiera a La Compañía a cambiar el pedido de Expropiación por el de Servidumbre, debido al cambio constitucional. El Consejo de Minería declara la nulidad del procedimiento administrativo desde la Resolución de fecha 05 de octubre de 1994, además de declarar improcedente la solicitud de expropiación.

Esta resolución es un ejemplo de cómo el Consejo de Minería resuelve anulando el procedimiento de expropiación para orientándolo en una servidumbre minera.

II. Sentencias del Tribunal Constitucional; El Tribunal Constitucional ha desarrollado la Servidumbre Minera en diversos casos y de una manera particular.

⁶¹ CATHEDRA, ESPURITU DEL DERECHO. Revista de los Estudiantes de Derecho de la Universidad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Año III, N° 5. Palestra Editores. 1999. Servidumbres Mineras y Expropiación. Jorge Avendaño Valdez. Pág. 18-19.

a. Sentencia EXP. N.º 202-2000-AA/TC

DEMANDANTE : MINERA CORIHUAYCO S.A.
DEMANDANDO : EMPRESA PETRAMAS S.A. Y OTROS.
INSTANCIA : Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional.
MATERIA : Acción de Amparo.

Aspectos Resaltantes de la Sentencia:

Antecedentes:

Minera Corihuayco S.A. interpone acción de amparo contra la empresa Petramas S.A. y sus representantes legales, doña Isabel Reátegui Moreno de Acosta y doña Catalina Ruíz López y contra la Pequeña Empresa de Trabajadores de Materiales Sólidos S.R.L. y su representante legal, don Jorge Zegarra Reátegui, con la finalidad de que dejen de realizar actos que atenten y violen, principalmente, sus derechos a trabajar libremente, a la propiedad y al libre tránsito, y se repongan las cosas al estado anterior a la vulneración y amenaza de violación de los derechos antes citados. Manifiesta que es propietaria de los Denuncios Mineros Corihuaycos N° 04, 05, 06 y 07, de La Consentida N.º I, II, III, IV, VII y X; y Doña Lily N.º I, II, III y V, que conjuntamente totalizan aproximadamente doce mil hectáreas (12,000 ha) de la quebrada Huaycoloro del distrito de San Antonio de Chaclla, provincia de Huarochirí, departamento de Lima. Señala que, a fin de poder llegar a sus denuncios mineros y explotarlos, es necesario transitar por una trocha carrozable denominada "Trocha Vía Real", la misma que tiene el carácter de vía pública y que pasa a través de terrenos que son de propiedad de la Comunidad Campesina de Jicamarca y aparentemente de la empresa Petramas S.A. Indica que don Jorge Zegarra Reátegui, sin derecho ni permiso alguno, ha colocado una tranquera levadiza en medio de la vía, impidiendo el libre tránsito de todo aquel que no tenga autorización de la demandada, en razón de que aduce ser el propietario de los terrenos donde se encuentra el relleno sanitario adyacente al camino. Manifiestan que desde el año mil

novecientos noventa y cuatro la demandante ha venido realizando estudios de exploración minera e iniciado trámites a fin de ampliar los mismos con compañías extranjeras, y por los hechos expuestos se han visto perjudicadas dichas negociaciones; asimismo, agrega que existen diversos informes del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Agricultura que señalan que dicha vía tiene carácter de vía pública.

Petramas S.A. y Pequeña Empresa de Trabajadores de Materiales Sólidos S.R.L. proponen las excepciones de incompetencia, oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda y falta de agotamiento de la vía administrativa, y contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, solicitando que en su oportunidad se declare infundada. Señalan que mil quinientos setenta y cinco hectáreas (1,575 ha) de la quebrada de Huaycoloro fueron vendidas por la Comunidad Campesina de Jicamarca a don Jorge Zegarra Reátegui, y que, a efectos de hacer más productiva la quebrada de Huaycoloro, la Comunidad Campesina de Jicamarca construyó una vía carrozable que no cruza ni conduce a ningún centro poblado, debiendo ser utilizada en forma exclusiva y excluyente por los propietarios de dicho terreno; vale decir, la Comunidad Campesina de Jicamarca y don Jorge Zegarra Reátegui, motivo por el cual han construido una garita de control y una tranquera, a fin de franquear los legítimos derechos de los propietarios. Alegan que, en una actitud dolosa, la demandante pretende confundir al juzgador, por cuanto indica que dentro de los perímetros de la quebrada de Huaycoloro se encuentra su denuncia minero; asimismo, coludiéndose con traficantes de tierras, pretende invadir dicha propiedad, señalando que la vía carrozable es una vía pública, situación que no es exacta ni real.

El Juzgado Mixto de Huarochirí-Matucana, con fecha trece de abril de mil novecientos noventa y nueve, declaró infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, por considerar, entre otras razones, que con el Informe N.º 185-98-MTC, emitido por la Coordinadora de la Dirección de Carreteras del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, de fecha veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y ocho, se establece que todos

los caminos existentes en el territorio de la República tienen el carácter de caminos públicos.

Análisis del caso concreto

El concepto de la servidumbre civil es más amplio que el de la servidumbre minera, por lo que carece de objeto hacer referencia alguna a la segunda, dado que al acreditarse la primera, ello resulta innecesario; en ese sentido, al establecerse una concesión minera en los terrenos de la Comunidad Campesina de Jicamarca, los concesionarios pueden hacer uso de las servidumbres existentes, dado que por definición –como se ha señalado– las servidumbres se establecen en beneficio del predio y no de los propietarios o usufructuarios del mismo, independientemente de las personas.

1. En consecuencia, queda acreditada la afectación del derecho constitucional de la demandante, pues al impedirse que sus trabajadores transiten libremente por la vía que da acceso al denuncio minero, se está restringiendo su derecho a trabajar libremente con sujeción a ley, tal como se señala en el inciso 15) del artículo 2° de nuestra Carta Fundamental.
2. En cuanto a la vulneración al derecho a la propiedad que aduce la demandante, no resulta amparable, ya que ésta no tiene titularidad sobre terreno alguno, sino un derecho real de concesión, cuya protección, como el resto de derechos derivados de la Ley General de Minería, es un derecho de rango legal, mas no constitucional; por lo que ante su eventual conculcación, debe recurrirse a la vía ordinaria.

FALLA

Declarando improcedente la tacha de documentos deducida por la parte demandada. **CONFIRMANDO**, en parte, la recurrida, en el extremo que, revocando la apelada, declaró **INFUNDADAS** las excepciones propuestas, y

REVOCÁNDOLA en el extremo que declaró improcedente la demanda; reformándola, declara **FUNDADA** la acción de amparo, y, en consecuencia, ordena que, en el término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación con la presente sentencia, los demandados retiren la tranquera mencionada en los fundamentos de esta resolución; poniéndose esta sentencia en conocimiento del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial *El Peruano* y la devolución de los actuados.

Apreciación crítica.

En el presente caso se aprecia, el demandante formula una acción de amparo con finalidad de que dejen de realizar actos que atenten y violen principalmente sus derechos a trabajar libremente, derecho a la propiedad y al libre tránsito y se repongan las cosas al estado anterior a la vulneración y amenaza de violación de los derechos antes citados.

Con relación a la servidumbre minera, el demandado obstruye el libre tránsito con una tranquera, en una trocha carrozable obstruyéndole la entrada al titular de la concesión minera, pues le exige que al ser una concesión minera debe realizar el procedimiento administrativo de servidumbre minera.

El Tribunal resuelve que en este caso en particular no es necesaria la servidumbre minera debido a que existe una servidumbre civil que es “más amplia” y además respalda su decisión en el Informe N.º 185-98-MTC, emitido por la Coordinadora de la Dirección de Carreteras del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, de fecha veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y ocho, se establece que todos los caminos existentes en el territorio de la República tienen el carácter de caminos públicos.

Los criterios antes expuestos son discutibles; ***la servidumbre civil es más amplia que la minera***, es una apreciación equivocada pues la servidumbre civil en este caso es una servidumbre de paso, esta es obligatoria mientras sea necesaria para el predio dominante, cesando sólo cuando éste adquiera salida

a la vía pública sin limitar el derecho de propiedad de otro, ya sea porque el propietario de él adquiere otro predio que le dé salida o cuando se abra un camino que le acceso inmediato⁶²; mientras que un régimen de servidumbre minera le otorga al titular de la concesión, el derecho a usar el terreno superficial para la racional utilización de la concesión; el paso, transporte de minerales, cancha de relave, instalación de campamentos, socavones etc.

Se establece que todos los caminos existentes en el territorio de la República tienen el carácter de caminos públicos (Informe N.º 185-98-MTC). Si tómanos este criterio perderán razón de ser las servidumbres de paso pues todos los caminos serían públicos y por ende gratuito.

Entonces a mi entender la sentencia fue declarada fundada correctamente, pero el argumento principal para desestimar la figura legal de servidumbre minera es incorrecto, pues el camino era público antes de la existencia de la concesión minera, además el camino conducía al terreno superficial donde se encuentra la concesión. Por ende, si es un camino público no es una servidumbre civil, ni mucho menos minera.

b. Sentencia EXP. N.º 00228-2008-PHC/TC

DEMANDANTE : SONIA MARIA PATRICIA JARA Y OTRO
DEMANDANDO : JORGE ZEGARRA REATEGUI Y OTROS.
INSTANCIA : Sala Primera del Tribunal Constitucional.
MATERIA : HABEAS CORPUS.

Aspectos Resaltantes de la Sentencia:

Antecedentes:

“La demandante, doña Sonia María Patricia Jara Quevedo, refiere que viene ejerciendo la posesión de 350 hectáreas en la zona de Río Seco, distrito de

⁶² THORNE DE TRAZEGNIES, Carolina. Con derecho a pasar. La Servidumbre de Paso en el Derecho Romano Justiniano y en el Derecho Civil Peruano. Ius et Veritas 22. Pág. 316-317.

Carabayllo, provincia de Lima, desde hace siete años aproximadamente, en virtud de una cesión de uso otorgada por los pobladores del “Anexo Quince” de la referida localidad de Río Seco (quienes ostentan el usufructo de dicho predio desde el año 1997, conforme consta en la partida registral N.º 1194870 de Registro de Propiedad Inmueble), realizando en dicho lugar actividades de crianza y venta de aves de corral. Manifiesta, además, que desde hace siete años se construyó una trocha carrozable para poder llegar al terreno donde viene ejerciendo posesión; sin embargo, señala que con fecha 13 de octubre de 2007, tomó conocimiento de que el mencionado camino se encontraba cerrado por orden de los emplazados, además de que era vigilado por sujetos desconocidos, todo lo cual fue constatado por el personal policial de la zona de Comas-Carabayllo. Refiere, además, que si bien se logró abrir el camino obstruido por la intervención de la policía, con fecha 16 de octubre de 2007 nuevamente se encontraba bloqueado por disposición de los demandados, contando esta vez con un mayor número de sujetos desconocidos que impiden el tránsito de toda persona y vehículo por los caminos que dan acceso al terreno donde viene ejerciendo la posesión, siendo este hecho constatado por la representante del Ministerio Público Patricia Rodríguez, a quien también le negaron el ingreso. Refiere, también, que por motivo del cierre del mencionado camino, sus trabajadores quedaron aislados, sin que se les pueda alcanzar comida o agua.

Por su parte, don Jorge Ernesto Méndez Venegas refiere, en calidad de gerente y representante de la empresa “Cantera Campay”, que dicha empresa viene ejerciendo actividades de extracción y comercialización de materiales de construcción en virtud de la Resolución Jefatural N° 03676-97-RPM expedida por la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Minas, mediante la cual se le otorga la concesión minera sobre el territorio de 600 hectáreas ubicado en el kilómetro 31.5 de la localidad de Río Seco, Quebrada de Campay, distrito de Carabayllo, provincia de Lima. Alega que uno de los caminos que han sido obstruidos por los emplazados es el que conduce al territorio concesionado (mientras que el otro conduce al terreno de su codemandante), por lo que dicha

situación le impide ingresar a su centro de trabajo y realizar sus labores cotidianas, lo que además afecta a sus proveedores y clientes”.

Análisis del caso concreto

12. En el presente caso los demandantes han alegado el desconocimiento de una servidumbre de paso por parte de los demandados, lo que impediría al demandante, don Jorge Ernesto Méndez Venegas, acceder al predio en el que lleva a cabo actividades de extracción de mineral, así como a los favorecidos, empleados de doña Patricia Jara Quevedo, acceder al lugar en el que realizan sus labores de crianza de aves de corral. Sin embargo, en el presente caso no ha podido ser demostrada la existencia de tal servidumbre de paso. Antes bien, los demandados han alegado que son propietarios del predio que comprende tanto el lugar de la concesión minera como el terreno en el que la demandante, doña Patricia Jara Quevedo, lleva a cabo la crianza de aves de corral. Para tal efecto, han presentado escrituras públicas de la transferencia de la propiedad (a fojas 153 y 167) no constando servidumbre de paso alguna, por lo que en el presente caso no es posible emitir pronunciamiento de fondo.

13. A mayor abundamiento sobre la concesión minera del demandante don Jorge Ernesto Méndez Venegas, cabe señalar que si bien es cierto que mediante **Resolución Jefatural N.º 03676-97-RPM** de fecha 20 de mayo de 1997 (a fojas 46), se le concedió a don Jorge Ernesto Méndez Venegas el título de concesión minera sobre 600 hectáreas ubicadas en el kilómetro 31.5 de la localidad de Río Seco, distrito de Carabayllo, provincia de Lima, del tenor de la propia resolución mediante la que se otorga la concesión minera se establecía que el ejercicio de los derechos concedidos se encuentra supeditado al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Título Sexto del TUO de la Ley General de Minería (Decreto Supremo N° 014-92.EM), así como por lo dispuesto por la Ley N° 26505, la misma que se encontraba vigente al momento de interponerse la demanda, disponía en su artículo 7 que la utilización de

tierras para el ejercicio de actividades mineras requiere acuerdo previo con el propietario, o la culminación del procedimiento de servidumbre establecido en su reglamento, ninguno de los cuales ha sido acreditado por el demandante en el presente proceso constitucional.

14. En este sentido, no siendo evidente de los actuados obrantes en el presente proceso de hábeas corpus la existencia de una servidumbre de paso sobre los predios de los demandados, cuya existencia y validez legal deberá ser dilucidada por la justicia ordinaria, la presente demanda deberá ser declarada improcedente en aplicación del artículo 5,1 del Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda de hábeas corpus.

Apreciación Crítica.

El Tribunal constitucional, tiene como fundamento principal *“no siendo evidente de los actuados obrantes en el presente proceso de hábeas corpus la existencia de una servidumbre de paso sobre los predios de los demandados, cuya existencia y validez legal deberá ser dilucidada por la justicia ordinaria, la presente demanda deberá ser declarada improcedente en aplicación del artículo 5,1 del Código Procesal Constitucional”*.

El tribunal resuelve que se declare improcedente la demanda por que no se ha podido demostrar la existencia de una servidumbre civil ni mucho menos minera, contrariamente a lo antes resulto en el Expediente N.º 202-2000-AA/TC, sustenta la apertura a un camino, según el Informe N.º 185-98-MTC,

emitido por la Coordinadora de la Dirección de Carreteras del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, de fecha veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y ocho, se establece que todos los caminos existentes en el territorio de la República tienen el carácter de caminos públicos.

El criterio para desestimar la sentencia, no es el idóneo pues lo que se debió buscar es si el camino es de uso público o no.

III. Servidumbre Minera Convencional.

Para graficar la servidumbre convencional, de mutuo acuerdo; se analizara un acuerdo en particular.

a. El acuerdo suscrito entre la empresa minera Compañía Azure del Perú S.A.C y la Comunidad Campesina de Shicuy.

Las Partes:

- ❖ Compañía Azure del Perú S.A.C; ahora Vena Perú S.A.C. de denominada Compañía minera junior canadiense dedicada a la exploración y explotación de minerales en el Perú.
- ❖ Comunidad Campesina de Shicuy; es propietaria del terreno superficial en el distrito de San José de Quero, provincia de Concepción, departamento de Junín, con aproximadamente seis mil y una hectáreas (6 001 ha)

Descripción del Proyecto:

- ❖ **Ubicación;** Entre los distritos de San José de Quero y Tomas en las provincias de la Concepción y Yauyos, Departamentos Junín y Lima.
- ❖ **Yacimiento Azulcocha:** Con afloramiento minerales de magnesio. Denunciaron en 1946 en un caduco de “Cerro de Pasco Cooper Corporation”. Explotaron en 1950-1956 óxido de magnesio a pequeña escala de tajo abierto, enviaban mineral a fundición de La Oroya en ferrocarril. Con profundización del tajo abierto encontraron mineral de esfalerita, junto con oropimente, rejagor, baritina y otros. En 1961 explotaron zinc a pequeña escala a tajo abierto y labores subterráneas desde el nivel 115. Durante 1970-1866 operaron empresas TOHO ZINC Co. y Sociedad Minera Gran Bretaña S.A., instalando una planta de 750 TMD. Actualmente Veta Perú S.A.C (Ex Compañía de Asure del Perú S.A.C.) es propietario.

❖ Reservas mineral:

DESCRIPCION	TONELADAS METRICA	% Zn
Reservas probadas.	540 000	8,2
Reservas probables.	60 000	7,0
TOTAL RESERVAS	600 000	8,0

❖ Análisis del convenio de servidumbre y/o Uso de terrenos superficiales.

Este convenio forma parte del Expediente del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Unidad Económica Administrativa (UEA) Azulcocha, aprobado Resolución Directoral N° 46-2009-EM-AAM. Como parte del Informe N° 235-EM-AAM/ACS/PR/MAA, específicamente en autorizaciones y permisos.

La Dirección de Asuntos Ambientales Mineros dentro de las observaciones al EIA se encuentra:

OBSERVACIONES

ASPECTO LEGAL

1. **Observación:** *La administrada señala que “cuenta con el permiso de la comunidad campesina de Tomas y de Shicuy para el uso del terreno superficial, el cual consta en documento escrito (anexo N° 2)”. Al respecto, se debe de manifestar a Vena Perú S.A.C. (Ex Compañía Azure del Perú S.A.C.) que no se encontró en el expediente documento alguno que haga referencia al permiso que las comunidades campesinas de Tomas y Shicuy otorgan a la recurrente, para el uso del terreno superficial. Por lo que deberá informar si tiene el acuerdo de uso del terreno superficial, o de no contar con el mismo, cual será la política a seguir para su obtención. Asimismo, para una mejor identificación del o los titulares del terreno superficial, se requiere presentar un plano en el que se superpongan los componentes de la operación minera en un plano de límites de las propiedades. Cabe señalar que para que la autorización de uso sea otorgada válidamente, deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley N° 26505 y su reglamentación.*

Respuesta: La administrada adjuntó a su levantamiento de observaciones, el Testimonio de Escritura Pública de arrendamiento de fecha 24 de marzo de 2008, otorgado por el notario de Lima, Dr. Carlos Augusto Sotomayor Bernos, celebrado entre la Comunidad Campesina de Tomas y la empresa minera VENA PERU S.A.C.

Asimismo, presentó la aclaración del contrato de arrendamiento de fecha 29 de diciembre 2007, que modifica al contrato de fecha 23 de noviembre de 2007, celebrado entre la COMPAÑÍA AZURE DEL PERU S.A.C. y la Comunidad Campesina de Shicuy, a través del cual dicha Comunidad otorgó permiso a la Compañía para realizar actividad minera en las áreas del terreno superficial de la comunidad que se superponen a sus concesiones mineras. Cabe precisar que el objeto de la aclaración, es dejar constancia de la Fusión simple por absorción entre la COMPAÑÍA AZURE DEL PERU y VENA PERU S.A.C., siendo la última quien asume los derechos y obligaciones de la primera.

Por otro lado, del expediente presentado se advierte un plano denominado “Plano de Comunidades”, suscrito por la Ing. Liz Lazo Corrilloclla, que superpone las concesiones mineras con los límites de las propiedades de las comunidades campesinas. En ese sentido, es pertinente informar que es responsabilidad del titular minero que las autorizaciones presentadas en el levantamiento de observaciones hayan sido obtenidas cumpliendo con las formalidades que correspondan, según lo establecido en la Ley N° 26505 (Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas) y su reglamentación. **Antes del inicio de actividades.**

63

- **Objeto:** Servidumbre de uso minero y/o cesión en uso de parte de su terreno superficial. Para que Azure pueda realizar, todas las labores que requiera para explotar, explorar, beneficiar, transportar comercializar los productos mineros, pudiendo

⁶³ Resolución Directoral N° 46-2009-EM-AAM. Como parte del Informe N° 235-EM-AAM/ACS/PR/MAA. Pág. 6-7.

construir presas, canchas de relave campamentos y demás en la superficie del terreno de la comunidad.

- **Plazo;** el plazo es de cinco años, prorrogables automáticamente a sola solicitud de cualquiera de las partes. Además de la potestad de la empresa de resolver el contrato de forma unilateral de forma escrita sin necesidad de expresión de causa, pero sin derecho a reclamar reintegro de pagos e infraestructuras.
- **Compensación;** La Azure se compromete a pagar la suma de nueve mil y 00/1000 nuevos soles (9 000.00) anuales, pagaderos en forma adelantada. Y el mantenimiento de las vías de acceso.
- **Vías de acceso;** la comunidad permitirá el libre uso de las vías de acceso de Azure para llegar al zona minera.
- **Compromisos Adicionales:**
 - **Asure;** realizar un proyecto de reforestación, a cumplir PAMA, trabajo a la comunidad si lo requiere y estas capacitadas.
 - La comunidad; se compromete a aportar las herramientas e insumos necesarios además de el terreno para el proyecto de reforestación que tiene que ejecutar azure. el convenio de servidumbre y/o uso de terrenos superficiales, que suscribe la Comunidad Campesina de Shicuy, se realiza de acuerdo a lo establecido en LEY N° 24656, LEY GENERAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS, Art. 7;

Artículo 7.- *Las tierras de las Comunidades Campesinas son las que señala la Ley de Deslinde y Titulación y son inembargables e imprescriptibles. También son inalienables. Por excepción podrán ser enajenadas, previo*

acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por ley fundada en el interés de la Comunidad, y deberá pagarse el precio en dinero por adelantado.

El territorio comunal puede ser expropiado por causa de necesidad y utilidad públicas, previo pago del justiprecio en dinero. Cuando el Estado expropie tierras de la Comunidad Campesina con fines de irrigación, la adjudicación de las tierras irrigadas se hará preferentemente y en igualdad de condiciones a los miembros de dicha Comunidad.

Por ello se suscribieron las respectivas Asamblea Generales Extraordinarias (las que adjunto en el anexo...) con el fin de tratar la Constitución de Servidumbre a favor de la compañía Azure del Perú SAC, con la asistencia en promedio de asistentes eran 90(noventa) más de los dos tercios del total de comuneros, quórum reglamentario para el inicio de la asamblea.

Apreciación Crítica:

Este contrato de servidumbre minera es el ideal para las relaciones entre el propietario del terreno superficial, la comunidad, y el titular de la concesión la compañía minera. Este tipos acuerdos o convenios son los más usuales en nuestra realidad. Donde las dos partes adquieren obligaciones y beneficios recíprocos, pues la comunidad consigue negociar directamente con el titular de la Concesión sin de dejar de lado las obligaciones asumidas en la Estudio de Impacto Ambiental.

La Compañía consigue el consentimiento previo del propietario del terreno superficial para el ejercicio de las actividades mineras, es un derecho inherente al derecho de propiedad amparado por la Constitución, el Código Civil y la propia legislación minera *y puede ser otorgado libremente mediante las*

diferentes modalidades previstas por el derecho común, tales como el derecho de uso, el arrendamiento, el usufructo o la servidumbre convencional.

Las tierras comunales, una de las formas de propiedad que reconoce nuestra legislación, gozaron de protección especial durante más de 73 años. Desde la constitución de 1920, que se ocupó después de varias décadas de las comunidades (llamadas entonces comunidades de indígenas) se dotó a sus tierras de un tratamiento especial, que derivó en que se las consagrara como inalienables, inembargables e imprescriptibles⁶⁴. La Constitución de 1993 introdujo cambios en los importantes. El artículo 89º de la constitución sólo dice que las tierras comunales, de comunidades campesinas y nativas, son imprescriptibles, es decir que la comunidad no puede perderlas por prescripción, y por ello mismo, ninguna persona pudo obtener por prescripción adquisitiva tierras de la comunidad.

La minería es una actividad extractiva que genera impactos ambientales y sociales de diversas índoles, por ende, no está exenta de retractoros que se oponen a los proyectos mineros a pesar de los acuerdos suscritos por las poblaciones, para lo cual adjuntamos algunas noticias vinculadas:

La Primera, Edición Huancayo, de fecha 26 de mayo del 2009.

Alcalde de Chupaca presentó documento a Ministerio de Energía y Minas. En los próximos días elevarán memoriales a autoridades nacionales y regionales.

Impugnan EIA a minera Azulcocha



Población de acuerdo con consulta popular.

Continúan firmes. El alcalde de Chupaca, Luís Bastidas Vásquez, presentó el recurso de nulidad de la Resolución Directoral Nº 046, emitida por el Ministerio de Energía y Minas, mediante el cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a la Empresa Vena Resources quien explotará la mina Azulcocha

⁶⁴ La constitución de 1920 estableció en su artículo 41º que las tierras comunales eran “imprescriptibles y sólo podrán transferirse mediante título público, en la forma que establezca la ley”.

El sustento que presenta este recurso de nulidad refiere que en la audiencia pública realizada en San José de Quero, se restringió el acceso a los participantes, privándose del derecho de participación, asimismo indican, que no cumplieron con la audiencia en la comunidad de Shicuy, pese que su estudio, consigna en sus plano de tesis de impacto ambiental a la comunidad en mención ubicado en el distrito de San Juan de Jarpa jurisdicción de la Provincia de Chupaca.

Asimismo, precisan con fecha 14 de marzo del 2008, solicitaron la suspensión de las audiencias públicas ante el director de asuntos ambientales mineros, documento que nunca tuvo respuesta y que incomprensiblemente la misma entidad es la que aprueba el estudio ambiental de la citada minera, que a viva fuerza pretende explotar vulnerando los derechos de los ciudadanos de la provincia de Chupaca.

De acuerdo a las normas, por la ubicación del proyecto en terrenos superficiales de la comunidad campesina de Shicuy, donde el único medio y fuente de vida de sus actividades cotidianas de sobrevivencia (agricultura, ganadería, piscigranjas y otros) es el río Cunas.

En tal sentido, la empresa minera no está cumpliendo con los parámetros que establece el reglamento de consulta y participación ciudadana en el procedimiento de aprobación de los estudios ambientales en el sector de Energía y Minas.

IV. Servidumbre Mineral Legal.

- a. Compañía Minera Antamina S.A. servidumbre Minera de paso, para la construcción, operación y mantenimiento de mineroducto destinado al transporte de concentrados de cobre y zinc desde la planta concentradora hasta la planta de secado y filtrado en el Puerto de Huarmey.**

Las Partes:

- ❖ La Compañía Minera Antamina S.A. "La Compañía"
- ❖ Los Titulares de los Terrenos Superficiales.

Descripción del Proyecto:

- ❖ **Ubicación;** en de provincia Huari departamento de Ancash.
- ❖ **Proyecto:**
 - **La Concesión de Transporte y Mineroducto.**

Con fecha 15 de noviembre de 1999, por Resolución Suprema N° 2009-99-EM/DGM, se otorgó a favor de la Compañía la concesión de Transporte minero denominada “mineroducto”, confiriendo el derecho a realizar el transporte masivo de concentrados de cobre y zinc, fundamentalmente, a través de un mineroducto, instalado desde la planta concentradora en la mina ubicada en la provincia de Huari departamento de Ancash, hasta la planta de secado y filtrado que se construirá en las instalaciones portuarias ubicadas en la provincia de Hurney, departamento de Ancash.

El que esta compuesto por tuberías cada una recibe una presión de 70 Bar, pero puede soportar 200 Bar y tiene una vida útil de 30 años; además de una profundidad promedio se 1,30 y 1,50 metros y 15 metros de ancho.

Análisis Servidumbre Minera Legal de Terrenos Superficiales.

❖ **Los titulares de los terrenos superficiales;** La compañía ha celebrado a celebrado más de cien contratos de compraventa de los propietarios de los terrenos requeridos para el mineroducto, los que representan el 97% de el total de los mismos, y, adicionalmente, se ha celebrado 250 contratos de compensación por los daños de cultivos y/o a las propiedades ha causado y eventualmente podría causar la construcción y operación del mineroducto; pero debido a que más del 50% de los terrenos adquiridos no se encuentran inscritos en los registros públicos por ello para dar seguridad jurídica a terceros que aleguen mejor derecho de propiedad se hace necesario solicitar la servidumbre minera de los terrenos superficiales.

Proceso de administrativo de servidumbre minera.

❖ **Escrito o expediente N° 11329844;** de fecha 20 de julio de 2001, La Compañía, solicito la Imposición de una servidumbre minera de uso por veinte (20) años, sobre los una extensión conjunta de 657 668.45 m2, divididos en ciento trece (113) terrenos, ubicados en los distritos de Llata, Huallanca, Aquia, Chiquian, Marca, Colquioc, Pararín, Paramonga

y Huarmey, de las provincias de Unión, Bolognesi, Recuay, Barranca y Huarmey de los departamentos de Huanuco, Ancash y Lima.

Aspectos más saltantes:

- **Necesidad de la servidumbre;** necesita la imposición de una servidumbre minera con el objetivo fundamental de obtener un derecho firme y seguro sobre el área afectada, a la vez de dar seguridad a los Bancos e Instituciones que han firmado el proyecto minero Antamina, que el mineroducto podrá ser operado sin contingencias de titularidad que pudieran entorpecer o paralizar su construcción o uso durante la vida del proyecto.

La necesidad de obtener la servidumbre que se solicita, se justifica además en la medida en que es un mecanismo eficiente para asignar a la concesión de transporte, cualquiera sea su titular, el derecho permanente a servirse de su terreno superficial, para la instalación, funcionamiento y mantenimiento de un mineroducto.

La naturaleza real y legal de la afectación que se solicita además que un eventual nuevo propietario del terreno, sea quien fuere, continúe empleándolo, pero a la vez ofrece la protección necesaria para impedir que dicho uso del terreno pueda perjudicar la labor del transporte minero, así como impedir que eventuales nuevos propietarios puedan desconocer el derecho de uso o las obligaciones impuestas.

- **Fundamentos de derecho:**
 - El numeral 3) del artículo 37 del TUO, los titulares de concesiones mineras están facultados para solicitar a la autoridad minera competente, el establecimiento de servidumbres mineras en terrenos de terceros que sean

necesarios para la racional utilización de la concesión,
previa indemnización justipreciada.

- El artículo primero del Decreto Supremo N° 017-96-AG, Reglamento del artículo 7° de la Ley N° 26505 referido a las servidumbres sobre tierras para el ejercicio de actividades mineras, señala que “para la utilización de tierras... ***para el transporte de minerales por ductos se requiere el acuerdo previo con el propietario de las tierras o la culminación del procedimiento de servidumbre***”.
 - El Código Civil, debemos destacar que las servidumbres constituyen un derecho real, según el artículo 1036 “Las servidumbres son inseparables de ambos predios. Solo pueden transmitirse con ellos ***y subsisten cualquiera sea el propietario***” y el artículo 1048 “***El propietario de dos predios puede gravar uno con servidumbre en beneficio de otro***”.
- ❖ **Informe N° 003 -2002-EM/OTN**, con fecha 08 de enero del 2002, Oficina Técnica Normativa, dispone la publicación por tres veces en diario oficial “El Peruano”, meditando ocho días entre publicaciones y, además, mediante cartel que se fijara en cada uno de los terrenos solicitados en servidumbre, y a persona a personas que acrediten su derecho sobre las áreas solicitadas. Además de admitir la solicitud de servidumbre.
- ❖ **Constancia**; de fecha 28 de octubre de 2002, mediante el cual se acredita la asistencia de persona alguna afectados por la servidumbre.
- ❖ **Informe N° 235-2002-EM-DGM/DPDM**, de fecha 04 de abril del 2003, Evaluación técnica de la diligencia pericial de establecimiento de servidumbre CIA. Minera Antamina S.A.

- **Comprobación Topográfica del Terreno Solicitado para el Establecimiento de Servidumbre;** los peritos mineros efectúan la comprobación de las áreas solicitadas por La Compañía, la que concluye que las diferencias encontradas en la comprobación de las áreas, pueden considerarse dentro de la tolerancia permisible.

- **Pronunciamiento de los Peritos Mineros sobre la Procedencia del Establecimiento de Servidumbre Solicitada;** en merito del contenido del informe pericial, podemos deducir que los supuestos principales de los peritos mineros, para determinar la procedencia de la solicitud de establecimiento de servidumbre, son los siguientes:
 - Que Cia. Minera Antamina S.A. esta realizando la explotación minera del Proyecto Minero Antamina, ubicado en el distrito de San Marcos, provincia de Huari, departamento de Ancash, el mismo que cuenta con la Concesión de Transporte Minero denominado MINERODUCTO, aprobada mediante Resolución Directoral N° 209-99-EM/DGM de fecha 15 de noviembre del año 1999, que le confiere el derecho para realizar transporte de concentrados de cobre y zinc fundamentalmente, a través de un mineroducto(sistema de transporte hidráulico de sólidos) desde la planta concentradora de la mina hasta la plana de secado y filtrado, ubicada en Punta Lobitos (Huarmey).

 - Que, el titulo de Concesión de Transporte Minero otorgado a Cia. Minera Antamina S.A. le da en derecho de contar con áreas de servidumbres, para poder desarrollar sus actividades mineras, si las circunstancias así lo requieren y estén tramitados de acuerdo a ley.

- Que, Cia. Minera Antamina S.A. esta con posesión de los terrenos donde se ubican las áreas de servidumbre y, a la fecha el mineroducto se encuentra totalmente instalado y en funcionamiento.
- Que, en todo el trayecto del mineroducto no existe áreas de patrimonio cultural ni reservas especiales del Estado.
- Que, de la verificación efectuada en la inspección ocular de todo el trayecto del mineroducto, se ha comprobado que no existe desmedro del medio ambiente en el terreno superficial ocasionado por funcionamiento del mineroducto, el mismo que fue instalado con un diseño de tecnología avanzada para garantizar su instalación y el normal funcionamiento de todo el sistema.
- Que, el ancho promedio de las áreas de las servidumbres mineras es de 6.00 metros, en la cual se encuentra tendida como eje central el mineroducto (tubería) de 10 pulgadas de diámetro, enteradas a una profundidad aproximada de 1.20 metros. Estas áreas superficiales son consideradas razonables y adecuadas para dar solución a cualquier desperfecto del mineroducto.

○ **Los Peritos del Consejo Nacional de Tasaciones(CONATA)**

El calculo indemnizatorio comprende: el valor de las áreas afectadas y una compensación monetaria por el eventual lucro cesante (este último corresponde calcular por cada predio)

Las Formulas empleadas para el valor de la servidumbre son las siguientes:

Valor de la Servidumbre (VS)

$$VS = VT + VLC$$

En donde:

VT = Valor de áreas de tierras afectadas

VLC= Valor del lucro cesante

Valuación de las Tierras (VT):

El valor del terreno ha sido calculado multiplicando el área del terreno por el valor comercial del terreno.

$$VT = \text{Área afectada (m}^2\text{)} \times \text{US\$ /m}^2$$

Valuación de Lucro Cesante (VLC):

Los Peritos del CONATA para calcular el VLC previamente estimaron la rentabilidad del terreno mediante los parámetros usualmente para el caso:

$$VLC = R \frac{(1+i)^{n-1}}{i(1+i)^n}$$

En donde:

R = Ingreso Anual o Renta líquida que percibe por el bien.

i = interés legal en %

n = Número de años de servidumbre.

❖ **Informe N° 181-2003-EM-DG/OTN**, de fecha 29 de abril del 2003, se detalla el avance del procedimiento de servidumbre minera.

- ❖ **Minuta**, suscrita por el Ministerio de Energía y Minas, representada por la Directora General de Minería, Ing. Maria Chappuis Cardich, denominada “El Ministerio” y de otra parte, La Compañía Minera S.A.

La minuta se suscribe al amparo de lo dispuesto en el artículo 130 y siguientes del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, Decreto Supremo N° 014-92-EM y Ley N° 26570, referido a las servidumbres sobre tierras para el ejercicio de actividades mineras.

- ❖ El monto de la indemnización por la servidumbre ha sido fijado en CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TRES y 94/100 dólares americanos (US \$ 415 803.94) establecido por los peritos agrónomos del Consejo Nacional de Tasaciones, hasta que dura la actividad minera; sobre los una extensión conjunta de 657 668.45 m², divididos en ciento catorce (114) terrenos, ubicados en los distritos de Llata, Huallanca, Aquia, Chiquian, Marca, Colquioc, Pararín, Paramonga y Huarmey, de las provincias de Unión, Bolognesi, Recuay, Barranca y Huarmey de los departamentos de Huanuco, Ancash y Lima.

- ❖ **La Resolución Suprema N° 022-2003-EM**; de fecha 07 de mayo del 2003; Resuelve:

- Establecer la servidumbre de paso a favor de Compañía Minera Antamina S.A. sobre el terreno de 657 788.17 m² de extensión, consta ciento catorce terrenos, ubicados en los distritos de Llata, Huallanca, Aquia, Chiquian, Marca, Colquioc, Pararín, Paramonga y Huarmey, de las provincias de Unión, Bolognesi, Recuay, Barranca y Huarmey de los departamentos de Huanuco, Ancash y Lima para realizar la construcción, operación y mantenimiento de mineroducto, para el transporte de concentrados de cobre y zinc hasta el puerto de Huarmey.
- Compañía Minera Antamina S.A. por concepto de indemnización deberá consignar la suma de US\$ CUATROCIENTOS QUINCE

MIL OCHOCIENTOS TRES y 94/100 dólares americanos (US \$ 415 803.94) a la orden de la Dirección General de Minería, en el plazo de treinta días calendario de notificada la presente resolución, bajo apercibimiento de declararse abandonada su solicitud de servidumbre.

- Al termino de la servidumbre, Compañía Minera Antamina S.A. los trabajos de remediación del área alteradas, conforme a lo detallado en su Estudio de Impacto Ambiental.

Apreciación Crítica:

En el caso en particular la servidumbre minera administrativa o legal, se desarrolla a través de una concesión de transporte minero, que confiere al titular el derecho a instalar y operar un sistema de transporte masivo continuo de productos minerales entre un centro minero y un puerto o planta de beneficio. La servidumbre gravar a 114 predios superficiales, necesarios para la instalación de un mineroducto. La servidumbre minera según la solicitud es presentada por la Compañía Antamina S.A. tendría la finalidad de darle seguridad jurídica a los convenios suscritos con lo propietarios de los terrenos superficiales donde se ha instalado el mineroducto, debido a que muchos de ellos carecían de títulos de propiedad, es decir, la servidumbre minera afecta a varios predios sirvientes.

Los informes sobre necesidad de la instalación de mineroducto son favorables principalmente porque el titulo de Concesión de Transporte Minero otorga a Cía. Minera Antamina S.A. el derecho de contar con áreas de servidumbres, para poder desarrollar sus actividades mineras.

El procedimiento de servidumbre minera concluye con la Resolución Suprema N° 022-2003-EM; de fecha 07 de mayo del 2003. Pero a pesar de ello se presentan dos reconsideraciones contra el proceso de servidumbres:

- Escrito N° 1415398, del 12 de junio de 2003, presentado por el señor Percy Rodríguez Bromley, en representación de la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Estrella del Norte.
- Escrito N° 1415400, del 12 junio de 2003 presentado por Francisco Javier Gómez Docamo, titular de la concesión minera “Don Augusto”.

Principal fundamento de las solicitudes:

Se ha construido y viene funcionando el mineroducto sin que culmine el proceso de servidumbre que actualmente viene siguiendo la Compañía Minera Antamina, toda vez que, dicho proceso no esta considerado que las instalaciones de aquel mineroducto esta atravesando nuestra concesión minera de lo recurrentes y como consecuencia de ello, nos esta impidiendo e imposibilitando desarrollar nuestra actividad minera consistente en realizar diversas labores tales como remoción de tierras, perforaciones, voladuras entre otras propias de la minería, por temor a dañar, poner en peligro o hacer colapsar las instalaciones del mineroducto, todo lo cual podría producirse si los recurrentes ejercieran legítimamente sus derechos de concesionarios mineros, sin que nadie pueda imputarles luego responsabilidad alguna.

- Resolución Suprema N° 033-2004-EM y Resolución Suprema N° 034-2004-EM; las que son declaradas improcedentes. En el principal fundamento.
 - Que, el artículo 208° de la Ley N° 27444, estipula que el recurso de reconsideración se interpone ante el mismo órgano que dicto el primer acto que es materia de impugnación y deberá sustentarse en nuestra prueba, y que en caso de los actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere, mientras en el numeral 20.7 del artículo 207° de la citada Ley, indica que el termino perentorio para la interposición de los recursos es de 15 días hábiles;

- Que, entonces, el plazo para interponer el referido recurso contra la Resolución Suprema N° 22-2003-EM, habría vencido el 28 de mayo de 2003, por lo que el recurso de reconsideración interpuesto con fecha 12 de junio del 2003, deviene en extemporáneo, ya que excedió el plazo dispuesto en la Ley N° 27444.

Esta servidumbre minera tiene la particularidad de gravar a distintos predios superficiales, para la instalación de una mineroducto, por el fin de otorgarla seguridad jurídica al titular de la concesión, que en muchos casos ya había suscrito acuerdos con los dueños de los terrenos superficiales pero muchos de ellos no podía acreditar su derecho de propiedad.

b. Compañía Minera Coimolache S.A. servidumbre Minera de uso para la construcción del Complejo Industrial.

Esta es la servidumbre minera más reciente se estableció por Resolución Suprema N° 080-2009-EM; de fecha 14 de diciembre del 2009.

Las Partes:

- ❖ La Compañía Minera Coimolache S.A."La Compañía", que esta conformada por Southern Perú (44.245%), Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (40.095) y ESPRO (15.66%)
- ❖ La Comunidad Campesina de Tingo."La Comunidad"

Descripción del Proyecto:

- ❖ **Ubicación;** en el distrito y provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca, a una altitud aproximada a los 4 000 msnm. Se ubica a unos 85 Km de la Ciudad de Cajamarca y 50 Km de la Mina Yanacocha.

- ❖ **Proyecto;** la construcción de Complejo Industrial Minero del Proyecto Tantahuatay (pad de lixiviación, pozas, echaderos, planta de proceso, talleres, laboratorios, campamentos, edificios, etc.) con un área de seis lotes 6 de terreno, que hacen 34 hectáreas.

Análisis Servidumbre Minera Legal de Terrenos Superficiales.

- ❖ **Comunidad de Tingo;** es propietaria de 4 565 hectáreas de las cuales a asignado en lotes que los da en usufructo a sus comuneros.

Proceso de Administrativo de Servidumbre Minera.

- ❖ **Escrito o expediente N° 1810600;** de fecha 8 de agosto de 2008, La Compañía, solicito la Imposición de una servidumbre minera de uso por veinte (20) años, sobre parte del terreno de propiedad de la Comunidad Campesina “El Tingo” (La Comunidad).
- ❖ **Carta Notarial;** con fecha 27 de mayo de 2008, mediante el cual propuesto al Presidente de la Directiva Comunal de la Comunidad Campesina de Tingo celebrar una servidumbre convencional por el uso de diez parcelas que hacen un total de 53 has, sin que en el lapso de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la carta notarial hubiera obtenido respuesta alguna de la comunidad, por lo que se considero culminada la etapa de trato directo.
- ❖ **Resolución N° 620-2008-MEN-DGM/V;** de fecha 16 de octubre de 2008, ordeno que se tenga por agotado el trato directo para el establecimiento de servidumbre y cito a Reunión de Invitación a Conciliación décimo quinto día de recibida la notificación.
- ❖ **Reunión para conciliar,** 12 de noviembre de 2008, la Comunidad, por intermedio del escrito N° 1837661, donde dice que sus representantes no iban a asistir; la reunión se realizo solo con la presencia de los representantes de la Compañía.

- ❖ **Escrito N° 1837661**; de fecha 13 de noviembre de 2008, La Compañía solicitó formalmente el inicio del procedimiento administrativo de servidumbre legal.

- ❖ **Resolución N° 762-2008-MEN-DGM/V**, de fecha 17 de diciembre del 2008:
 - Se inicia el procedimiento administrativo servidumbre legal solicitado por La Comunidad sobre el terreno de La Comunidad con Expediente N° 1810600.

 - Se cite a las partes a comparendo en la Dirección General de Minería, para el décimo quinto día de haber recibido la notificación a las 3: 00 p.m.

 - Se designe el perito minero de la nomina oficial Ing. Gustavo Cenzano Breña para determinar la necesidad y magnitud de la servidumbre solicitada.

 - Se solicite designación de un perito agrónomo.

- ❖ **Comparendo**; con fecha 16 enero del 2009, solo se presentó el representante de La Compañía.

- ❖ **Resolución N° 762-2008-MEN-DGM/V**; de fecha 17 de diciembre de 2008, continué con el trámite.

- ❖ **Auto Directoral N° 042-2009-MEN-DGM/DTM**, expedida por la Dirección Técnica Minera, concluye lo siguiente:
 - El área requerida por La Compañía como servidumbre ésta conformada por 6 lotes de terreno, los cuales son indispensables para la viabilidad del Complejo Minero Metalúrgico Industrial de

su Proyecto Tantahuatay, echaderos de desmonte de Material inadecuado y de material orgánico, pad de lixiviación, pozas de soluciones y eventos mayores, carretera de acarreo, planta de procesos, laboratorio, talleres, campamento, oficinas, etc. No existe otra alternativa para ubicación y desarrollo del proyecto.

- La diligencia se llevo acabo en día 15 de enero de 2009, con la presencia del perito minero, de un representante de La Compañía, así como de un comunero hábil de La Comunidad.
- La Comunidad ha asignado en usufructo 34 has a seis comuneros, correspondiéndoles, según el levantamiento, según el levantamiento topográfico, los siguientes lotes: I) Lote N° 1 a Carlos Chuquilin con 7.99 has; II) Lote N° 2 a Nicolás Chuquilin Muñoz con 6 has; III) Lote N° 3 a Roland William Gallardo Estela con 4.01 has; IV) Lote N° 4 a Sara Luz Estela Pérez con 5.97 has; V) Lote N° 5 a Rolando Gallardo Chuquilin con 4 has; Lote N° 9 a Gloria Cruz Bazán con 6 has. Dichos terrenos son eriazos y de fuerte pendiente, sin riego, mayormente utilizados para el pastoreo, cuya vegetación predominante es el ichu.
- La magnitud de la servidumbre solicitada es de 50 hectáreas considerando que La Comunidad es propietaria de 4 565 has, la afectación de la servidumbre solo sería de 0,8% del área total, por lo que La Comunidad no se vera afectada por la servidumbre.

❖ **Oficio N° 396-2009/VIVIENDA-VMCS**, emitido por el Director Nacional de Construcción, de fecha 24 de marzo de 2009, remitió 6 informes sobre los lotes: N°. 1,2,3,4,5 y 9, en los que se indica los montos de la servidumbre y del daños y perjuicios:

LOTE Nº	COMUNERO	HAS	VALOR USO TERRENO US \$	VALOR DAÑOS Y PERJUICIOS US \$	VALOR TOTAL US \$
1	Carlos Chuquilin	8	8 458.72	30 481.61	38 940.33
2	Nicolás Chuquilin Muñoz	6	6 344.04	15 252.19	21 596.23
3	Roland William Gallardo Estela	4	4 229.36	6 344.01	10 44.37
4	Sara Luz Estela Pérez	6	6 344.04	10 479.99	16 854.03
5	Rolando Gallardo Chuquilin	4	4 229.36	11 612.01	15 841.37
9	Gloria Cruz Bazán	6	6 344.04	8 709.31	15 053.35

❖ **Oficio Nº 364-2009-MEM/DGM**, de fecha 7 de abril de 2009, remitió al Director General de Competitividad Agraria del Ministerio de Agricultura los peritajes minero y agronómico para su pronunciamiento.

❖ **Oficio Nº 1020-2009/VIVIENDA-VMCS-DNC**, de fecha 1908721, presento el denominado: “Informe Técnico sobre la posibilidad que la servidumbre enerve el derecho de propiedad” en el concluye:

- La magnitud de la servidumbre es de 34 hectáreas en lotes bajo asignación a seis comuneros miembros de La Comunidad, la cual posee un remanente de 4 565 has, por lo que la afectación de la servidumbre sería del 0.7447% del área total.
- Los lotes de la servidumbre se encuentran a una altitud entre 3 800 y 4 000 m.s.n.s.m, comprendiendo tierras de naturaleza acida-eriazas y de pastoreo- con pendientes pronunciadas en algunas partes, además, en el contorno de las tierras sirvientes no existen asentamientos humanos, flora y fauna establecidas por el hombre que se pudiera perjudicar sustancialmente.

- La servidumbre solicitada no perjudica al resto del predio sirviente de modo tal que lo haga inútil o lo afecte de manera sustantiva respecto a los fines para los cuales estaba siendo usado o estuviese destinado.

❖ **Informe Técnico N° 008-2009-AG-DGCA-DA/EMG-FGG;** en el cual concluye que:

- El procedimiento de servidumbre minera solicitado por La Compañía se ha llevado a cabo de conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería.
- La servidumbre minera es posible sin enervar el derecho de propiedad de La Comunidad.

❖ **La Resolución Suprema N° 080-2009-EM;** de fecha 14 de diciembre del 2009; Resuelve:

- Imponer de derecho de servidumbre minera de uso para la construcción del Complejo Industrial Minero del Proyecto Tantahuatay, a favor de la Compañía Minera Coimolache S.A por 20 años, sobre el área de 34 hectáreas de extensión de la Propiedad de la Campesina de Tingo.
- Por concepto de indemnización la Compañía Minera Coimolache S.A deberá consignar en el Banco de la Nación, a la Orden de la Dirección General de Minería, la suma de US \$ 118 699.68 (Ciento Dieciocho Mil Seiscientos Noventa y Nueve y 68/100 Dólares Americanos) a favor de la Comunidad Campesina de Tingo, en el plazo de diez días hábiles de notificada la resolución, bajo apercibimiento de declarar el abandono de su solicitud de constitución de servidumbre.

- Al término de la servidumbre, Compañía Minera Coimolache S.A. los trabajos de remediación del área afectada de acuerdo a su Plan de Cierre.

Apreciación Crítica:

A diferencia del proceso de Servidumbre de Antamina, en el presente caso, la servidumbre minera no es para el transporte de mineral, sino, es para la etapa de explotación; para la construcción un complejo industrial minero de la planta de lixiviación, pozas, echaderos, planta de proceso, talleres, laboratorios, campamentos, edificios, etc.

La compañía solicita la imposición de servidumbre minera, pues de las negociaciones con la comunidad campesina de Tingo, para la compra venta de 285.5 hectáreas requeridas para el proyecto Tantahuatay y que hace años fueron asignados en uso a 50 comuneros calificados, según igual número de lotes de extensión variable. La comunidad planteo la conveniencia de obtener la aceptación previa de los 50 comuneros calificados involucrados. Luego de numerosas reuniones de negociación con los comuneros calificados involucrados, se logró la aceptación de 40 de ellos, esto es el 80%.

Los 10 comuneros calificados restantes involucrados en 10 lotes con extensión total de 53 hectáreas, exigen precios equivalentes a \$ 30 000- 50 000 por hectárea; por que la empresa, sin llegar a un arreglo, inicia el trámite de servidumbre minera legal por las 50 hectáreas por un periodo de 20 años.

La imposición de servidumbre minera, es utilizada por la Compañía como último recurso, pues como se aprecia ya había agotado la negociación con los posesionarios de los terrenos superficiales.

La imposición de la esta servidumbre minera genera por ser la más reciente y una de las pocas con estas características, genero las diferentes reacciones que las vamos a comentar a continuación.



EL DIRECTORIO ECOLÓGICO Y NATURAL www.ecoportal.net/content/view/full/85703

La servidumbre minera, la legalización del saqueo. Más de 20 lagunas y bofedales en peligro en Comunidad El Tingo

30-04-09 Por [Andrés A. Caballero H](#)

La Ley de Servidumbre minera, que otorga a una empresa minera el derecho a adquirir las tierras de la comunidad previo pago, no es más que el desalojo formal o una forma de legalizar el saqueo de nuestros recursos naturales contra la voluntad de humildes campesinos que no quieren cambiar sus costumbres y tradiciones de agrícola y forestal por la destructora y contaminadora minería irresponsable

Razones sobran a los campesinos de la comunidad El Tingo, ubicada en la provincia cajamarquina de Hualgayoc, para oponerse al proceso de servidumbre iniciado por la compañía minera Coimolache S.A., si consideran por ejemplo que con la actividad de la Minera Yanacocha, que opera en Cajamarca, desaparecieron cerros completos como "San José", Maqui Maqui", "La Quinoa", "Negro", entre otros, así como las lagunas "San José", "Yanacocha" y cuantiosos manantiales, dejando sin agua a ríos y quebradas que abastecían a las comunidades adyacentes que ahora realizan marchas y protestas reclamando casi todos los días.

Por primera vez se pondrá en práctica en la región de Cajamarca el entreguismo de tierras comunales amparadas en la Ley N° 26570 — promulgada en 1996 bajo el gobierno del ahora sentenciado Alberto Fujimori— que modificó el artículo 7 de la Ley N° 26505 o Ley de Tierras, que establecía la obligatoriedad de llegar a un acuerdo entre el inversionista minero y el propietario de un predio para que el primero pudiera iniciar actividades de explotación minera, permitiendo alternativamente el establecimiento de una servidumbre minera sobre el predio.

Antecedentes

La Comunidad Campesina El Tingo fue creada el 09 de octubre de 1956 a través de Resolución Suprema N° 061 e inscrita en los Registro Públicos el 11 de marzo de 1980 con el Título 1569/80. Por lo tanto, sus tierras no pueden ser vendidas ni alquiladas a terceros, menos aún para explotación minera, sin el consentimiento de los dos tercios de comuneros calificados, según los propios Estatutos de la comunidad.

Sin embargo, la empresa Minera Coimolache que es de propiedad del grupo empresarial Buenaventura también socio de Yanacocha, viene haciendo trabajos aproximadamente desde 1987 en las zonas de Hualgayoc y Chugur. En el 2005 anunciaron la ejecución del proyecto Tantauatay, ubicado en territorio de la comunidad campesina El Tingo. El objetivo es iniciar una operación minera para explotación de oro principalmente.

En los próximos meses, varios comuneros y posesionarios de tierras de la Comunidad Campesina El Tingo serán despojados y expulsados de sus tierras debido a que la compañía Minera Coimolache S.A. ha solicitado al Ministerio de Energía y Minas (MEM) la servidumbre de esas tierras ante la negativa de los campesinos en venderlas. De acuerdo a ley, el MEM notificara al propietario para que acuda a una audiencia de conciliación en Lima, si el propietario no concurre se lo declara rebelde y se nombrara un perito que valore la propiedad; se le deposita al propietario de las tierras el **"justiprecio"** y **en 30 días se inscribirá la propiedad a nombre de la empresa** minera solicitante. Cumplido este trámite la empresa minera puede proceder al desalojo y empezar a operar.

Los comuneros temen que de iniciarse la actividad minera en El Tingo se vería afectada la cantidad de aguas de la cuenca Maygasbamba que abastece a más de 40 caseríos y 38 canales de riego en Bambamarca. Entre los caseríos abastecidos por esta cuenca están Pílancones, Apan Alto, Apan Bajo, Palo Blanco, Frutillo, El Cumbe San José, El Cumbe Chontabamba y la Lucma. Sin embargo, en forma desvergonzada y desconociendo la realidad los funcionarios de la citada minera señalan que la zona es eriaza y sin producción agropecuaria.

Ante tales afirmaciones los comuneros invitaron el pasado 07 de abril a un grupo de periodistas independientes para realizar un recorrido por la zona. **La delegación llegó primero al lugar denominado "Hueco Grande",** ubicado abajo de la laguna Viera Vira, allí se constató la presencia de abundante agua, bofedales por todas partes, donde nace el río Las Águilas y la quebrada Yerba Buena. También se verificó la existencia en la zona de las lagunas EL Volcán, La Misha I, II, III, IV, Las Chatas y Sola, entre otras. Mientras que por otro lado se constató la presencia de las lagunas Los Gentiles, Quiwilas, Pampa Grande, Tres Amigos, Media Luna y Minas Conga, entre otras.

Además, para orgullo de los bingueros, la delegación llegó hasta las propias hidroeléctricas familiares con las que cuentan algunos comuneros. Como se sabe, éstas funcionan a base de agua para mover las turbinas, una muestra más de que existe abundante agua en dicha zona.

Ahora, que tanto se pregonan campañas para contrarrestar el calentamiento global, creemos que es tiempo de cuidar estas fuentes naturales de agua y el gobierno local así como el regional y el nacional son los llamados a protegerlos.

[http://www.ecoportal.net/layout/set/print/content/view/full/85703/\(printversion\)/1](http://www.ecoportal.net/layout/set/print/content/view/full/85703/(printversion)/1)

03.02.10 - PERÚ

Expropiación disfrazada de servidumbre sobre tierras comunitarias

CNDDHH.

*

Adital - Ante la imposición de una servidumbre minera sobre el territorio de la Comunidad Campesina de El Tingo, en Cajamarca, mediante Resolución Suprema n° 080-2009-EM, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos declara ante la opinión pública lo siguiente:

1.- El procedimiento de servidumbre minera, previsto en el artículo 7 de la Ley General de Minería, permite imponer la actividad minera contra la voluntad de las comunidades campesinas. Este procedimiento existe desde el gobierno de Fujimori, pero muy rara vez se ha utilizado.

2.- La servidumbre minera constituye, en realidad, una expropiación disimulada e inconstitucional.

- Se trata de una expropiación, porque 20 años de actividad minera, incluyendo la instalación de fosas de relaves, suponen la destrucción del terreno utilizado, convirtiendo esta parte del territorio comunal en una zona inservible para la agricultura.

- Esta expropiación de hecho no se inscribe en ninguno de los supuestos constitucionales, ya que se efectúa con el fin de facilitar las actividades de una empresa privada (Coymolache, perteneciente a la compañía minera Buenaventura) y no para realizar un servicio público o proteger la seguridad nacional.

3.- Además, en el caso que nos ocupa no se ha respetado la exigencia constitucional de una justa indemnización a la comunidad campesina afectada, ya que la disposición del Gobierno contempla solo 3,500 dólares por hectárea, y no considera el impacto ambiental y social que sufrirá la comunidad campesina como consecuencia de la actividad minera, teniendo en cuenta a este respecto los antecedentes de la empresa Yanacocha, vinculada al mismo grupo empresarial.

4.- La imposición de la servidumbre minera contraviene claramente el Convenio 169 de la OIT, que establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes del desarrollo de actividades extractivas en sus territorios, así como el derecho de los pueblos a elegir libremente su modelo de desarrollo. Supone también un claro incumplimiento de las recomendaciones sobre esta materia que recientemente han dado al Gobierno peruano el Relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, la OIT, el Comité para la Erradicación de la Discriminación Racial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, dentro del Perú, la Defensoría del Pueblo.

5.- Más allá de este caso concreto, que supone una clara vulneración de los derechos de la Comunidad de El Tingo, estamos sumamente preocupados por lo que podría ser el anuncio de una nueva estrategia para doblegar la resistencia de las comunidades que, haciendo uso de sus legítimos derechos, se oponen al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios.

6.- Como hemos señalado reiteradamente, la injusticia es la principal causa de la creciente conflictividad social, y una política como la que parece anunciarse solo contribuirá a desestabilizar aún más el país y a debilitar nuestra democracia. Hacemos un llamado a las autoridades, y en particular al Gobierno, a actuar con prudencia y responsabilidad, y entre tanto, a no aplicar esta cuestionada resolución suprema.

Lima, 3 de febrero de 2010

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

<http://blog.dhperu.org>

* Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú

Al publicar en medio impreso, haga el favor de citar la fuente y enviar copia para: Caixa Postal 131 - CEP 60.001-970 - Fortaleza - Ceará - Brasil

La República.pe

Martes 02 Marzo, 2010

DETALLES DE NOTAS

Comuneros de El Tingo protestan Pobladores de la comunidad campesina El Tingo, del distrito de Hualgayoc, en Cajamarca, marcharán este miércoles hacia la capital de la región en protesta por la entrega de parte de sus tierras al proyecto minero Tantahuatay, de la empresa Coimolache SA, bajo la modalidad de servidumbre minera de uso.

El proceso previo que se cumple antes de emitir la servidumbre de uso no fue de conocimiento comunal. Ellos se enteraron del hecho cuando apareció la Resolución Suprema 080-2009-EM del MINEM, el 15 de diciembre pasado.

Según este documento, cada hectárea fue valorizada en cerca de 3,000 nuevos soles más “daños y perjuicios”.

COMENTARIO:

De las reacciones generadas por la imposición de la servidumbre minera en la Comunidad Campesina de Tingo, resaltan estas noticias:

“ANDRÉS A. CABALLERO H del Directorio Ecológico Natural, según su artículo, la servidumbre minera sirve para legalizar el saqueo, pues la población afectada no esta de acuerdo y ante su negativa van a ser despojados para realizar actividad minera esto amparadas en la Ley N° 26570 —promulgada en 1996 bajo el gobierno del ahora sentenciado Alberto Fujimori— que modificó el artículo 7 de la Ley N° 26505 o Ley de Tierras, que establecía la obligatoriedad de llegar a un acuerdo entre el inversionista minero y el propietario de un predio para que el primero pudiera iniciar actividades de explotación minera, permitiendo alternativamente el establecimiento de una servidumbre minera sobre el predio”.

Este artículo es inexacto, para empezar el término saqueo es innecesario pues si hay una compensación económica por el terreno superracial, Además la comunidad esta de acuerdo con el desarrollo de la activad, al haber suscrito convenios con la Compañía de un total de 235.25 hectáreas de las 285. 25 que requiere para la operación, de las restantes han adquirido un total de 34 hectáreas en servidumbre minera, al no llegar a un acuerdo económico.

Ahora Ley N° 26570, no se puede leer de manera asilada pues como lo demuestra lo que se demuestra del desarrollo de la tesis, la servidumbre minera siempre ha existido en la legislación nacional e internacional incluso desde épocas de la colonia y mas bien con la Constitución de 1993, se elimino la expropiación por utilidad pública con lo que se descarta los fines mineros; desde el punto de vista jurídico la servidumbre no conlleva la perdida del derecho de propiedad sino tan sólo el establecimiento de restricciones o limitaciones a su ejercicio. Algo distinto ocurre con la expropiación, donde si se pierde la propiedad del bien por completo.

“Fray Tito, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, Expropiación disfrazada de servidumbre sobre tierras comunitarias y poco principal argumento la imposición de la servidumbre minera contraviene

claramente el Convenio 169 de la OIT, que establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes del desarrollo de actividades extractivas en sus territorios, así como el derecho de los pueblos a elegir libremente su modelo de desarrollo. Supone también un claro incumplimiento de las recomendaciones sobre esta materia que recientemente han dado al Gobierno peruano el Relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, la OIT, el Comité para la Erradicación de la Discriminación Racial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, dentro del Perú, la Defensoría del Pueblo”.

La servidumbre administrativa, es consecuencia de la falta de acuerdo con menos del 20% de los afectados. Además la Consulta Previa es potestad realizarla o no por el Estado, pero a pesar de ello la compañía nunca detuvo la negociación.

Noticia del Diario la Republica, de fecha martes 02 Marzo, 2010. La protesta de la comunidad no tiene asidero legal debido a que según la Defensoría del Pueblo, el 04 de febrero del 2010, en asamblea de la Comunidad Campesina El Tingo, aprobó el Acuerdo Social con Cía. Minera Coimolache S.A., donde se aprobó la transferencia de los terrenos sobre los cuales se construirá el proyecto minero Tantahuatay. En relación a la zona sobre la cual se estableció una servidumbre minera, se acordó un nuevo precio por el terreno al ofrecido inicialmente por la empresa.

2. Aportes.

A) Adecuación de la normatividad vigente que regula la actividad minera, en especial la servidumbre minera.

La adecuación normativa para el desarrollo de la tesis, consiste en las modificaciones a la legislación para hacer de las servidumbres legales o forzosas mineras una institución eficaz para el desarrollo de la actividad. Pues en los últimos 10 años solo se han otorgado 5 servidumbres legales mineras en el Perú.

- **Definición de servidumbre minera:**

Nuestra legislación no define a la servidumbre minera, lo que puede traer confusiones:

El artículo 130, de la Ley General de Minería, se debería añadir la definición en los siguientes términos:

La servidumbre minera es un gravamen sobre un predio o varios predios sirvientes en beneficio de un inmueble dominante, específicamente una concesión minera para el racional ejercicio de la actividad; sin que este gravamen enerve el derecho de propiedad de los titulares de los predios sirvientes.

- **Necesidad de acreditar el derecho de Propiedad; criterio que se aprecia en la Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, Decreto Supremo Nº 014-92-EM; en el artículo 130:**

Se limita la indemnización solo al propietario, además para poder participar en el proceso de servidumbre, en la etapa de comparendo el propietario debe acreditar su derecho de propiedad.

¿Como se demuestra el derecho de propiedad?

Solo con la inscripción en los registros públicos; con un contrato privado suscrito con el propietario inscrito, siguiendo el tracto sucesivo.

En el Perú para tener acceso a la propiedad rural se debe acreditar la posesión directa, pacífica, continua, pública y la explotación económica del mismo durante un plazo de un año si el predio es del Estado, o de cinco, si es de particulares. Para ello debe aportar dos pruebas, una obligatoria y otra complementaria. Dentro del grupo de pruebas obligatorias puede ser según el Decreto Legislativo Nº 667:

- ❖ Una declaración firmada por todos los colindantes, o por seis vecinos que garanticen la pretensión del posible titular.
- ❖ Una certificación emitida por los comités, fondos u organizaciones representativas de los productores agrarios de la zona.
- ❖ Una certificación redactada por las juntas de usuarios o comisiones de Regantes del respectivo distrito de riego.

Y como prueba complementaria, se deben aportar:

- ❖ Constancia de posesión otorgada por la respectiva agencia agraria.
- ❖ Documentos que acrediten préstamos o adelantos de préstamos por crédito agrario, otorgados por instituciones del sistema financiero nacional a favor del poseedor.
- ❖ Declaración jurada del pago del Impuesto Predial correspondiente a los años de posesión del predio al que se refiere la solicitud de inscripción.
- ❖ Recibos de pago realizados por el poseedor, por concepto de uso de agua con fines agrícolas, de adquisición de insumos, materiales, equipos, maquinarias u otros activos necesarios para iniciar, ampliar o diversificar la campaña agrícola y las actividades económicas del solicitante.
- ❖ Documento público o documento privado, con firmas legalizadas por notario público o juez de paz, en el que consta la transferencia de la posesión plena del predio a favor del solicitante.
- ❖ Contrato de compraventa de la producción agraria, pecuaria o forestal celebrado por el poseedor con empresas del Estado.
- ❖ Constancia de registro del poseedor en el respectivo padrón de regantes de la administración técnica del distrito de riego con respecto al predio, expedida dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud de inscripción.

- ❖ Inspección judicial de tierras en proceso de prueba anticipada, con el objeto de verificar la posesión del predio.
- ❖ Certificado de inscripción de marcas y señales de ganado expedido a nombre del poseedor del predio.
- ❖ Certificado de inscripción del poseedor del predio en el padrón de prestatarios de fondos rotatorios.
- ❖ Certificado expedido a nombre del poseedor del predio de haber sido empadronado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
- ❖ Certificado en que conste que el poseedor fue prestatario del Banco Agrario.
- ❖ Certificado en que conste que el predio estuvo inscrito a nombre del poseedor solicitante en el padrón catastral de la ex Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural.

B) Proyecto de guía ha aprobarse para conseguir la servidumbre minera convencional.

Con esta guía pretendo conseguir la suscripción del convenio o contrato servidumbres mineras entre el titular de la concesión y el propietario o en su defecto el poseedor del terreno superficial.

Esta guía se debería tomar en cuenta en la legislación como prerequisite obligatoria antes de iniciar el procedimiento de servidumbre legal.

GUÍA HA APROBARSE PARA CONSEGUIR LA SERVIDUMBRE MINERA CONVENCIONAL.

1. Proceso de Información y Consulta.

Se debe lograr que la población esta adecuadamente involucrada en el proceso de servidumbre:

- Participación de la población afectada; se debe proporcionar oportunamente información completa del proyecto.
- Divulgación de información; cualquier información relacionada con riesgos, impactos sobre dicha población; a través de personal autorizado por el concesionario. Ellos supone una serie de informaciones que maneja solamente la empresa como son las siguientes:
 - El tipo de explotación que realizara, si será minería metálica o no metálica, y que minerales se piensa aprovechar.
 - El área o áreas que la empresa minera plantea utilizar (dado que pueden estar en distintas partes), tanto para sus instalaciones, como para relaves y otros.
 - Dar conocer cómo se extraerá el mineral, es decir si la mina será a tajo abierto o en socavones.
 - El tiempo que la empresa minera que durará la explotación es otra variable a considerar.
 - La empresa debe proporcionar estudios de impacto ambiental, estudios de factibilidad, entre otros.

- Finalmente, es indispensable conocer la tecnología que usara la empresa minera y determinar el posible nivel de contaminación de la tierra y otros recursos.
- Consulta; la población tendrá la oportunidad de expresar su opinión acerca del proceso; el concesionario deberá considerar las sugerencias hechas por las poblaciones involucrada y responder a las preguntas, dudas y/o expectativas que podrán surgir. Esta debe incluir distintos segmentos de la comunidad.
- Solución de Inquietudes y Quejas; se debe establecer mecanismos y espacios para recibir y facilitar la solución de inquietudes y quejas al desempeño social y ambiental del Proyecto.
- Respeto por las características culturales locales; se debe tener en cuenta a las entidades representativas de las comunidades locales tales como la Asamblea de la Comunidades si se da el caso. Además la información debe ser distribuida en el idioma de los propietarios o posesionarios.

2. Proceso de Verificación e Identificación.

Se debe identificar a los propietarios y posesionarios de los predios para diferenciar si son propietarios privados o comunidades campesinas.

3. Etapa de valoración Comercial.

Esta etapa se debe tener en cuenta:

- Identificar a todas las personas involucradas entre propietarios y posesionarios.
- Proporcionar un inventario de los bienes afectados.

- Proporcionar propietarios y posesionarios, una propuesta, donde se incluya los derechos y obligaciones del concesionario.

4. Proceso de Negociación.

El proceso de negociación garantiza la transparencia del mismo de tal manera que los propietarios y/o posesionarios expresen voluntariamente su aceptación.

El proceso de negociación involucra dos componentes. El primero, que conste en el pago de una compensación económica por el derecho a utilizar los terrenos. El segundo consiste en una indemnización por los daños y perjuicios.

Evidentemente, si la propuesta de la empresa resulta conveniente a los intereses del agricultor o de la comunidad, ésta puede aceptar. Pero como se trata de una negociación es posibles que ambas partes, tanto la comunidad como la propia empresa, busquen modificar los puntos de la oferta, tratando de obtener cada una ellas el mayor beneficio posible.

La comunidad campesina, como cualquier otro propietario, sólo sabrá si le conviene en acuerdo propuesto por la empresa minera si cuenta antes con toda la información, tanto en lo que se refiere al aprovechamiento minero como a la misma utilidad que obtiene del uso actual y futuro de sus propias tierras y, por supuesto, conociendo y analizando en detalle lo que ofrece la empresa minera como compensación.

5. Modelo de Contrato de Servidumbre.

Este contrato llevaría a cabo si es que el proceso de servidumbre minera es exitoso.

SEÑOR NOTARIO

Sírvase extender en su Registro de Escritura Pública, el Contrato de Establecimiento de Servidumbres por Mutuo Acuerdo (el “CONTRATO”), que celebran de un parte, identificado con DNI N°, del distrito de, provincia de, departamento de(el PROPIETARIO), y de la otra parte la, identificado con DNI N°, del distrito de, provincia de, departamento de (La EMPRESA); en los términos y condiciones que consta en las cláusulas siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

El PROPIETARIO manifiesta ser propietario del terreno ubicado en, provincia de, (el PREDIO)

EL PREDIO se encuentra inscrito en.....

El PROPIETARIO destina al PREDIO a.....

La EMPRESA es titular de la concesión minera; inscrita en la partida, de los Registros Públicos Mineros.

SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO.

Por el presente CONTRATO el PROPIETARIO impone a favor de LA EMPRESA una servidumbre de uso minero y/o se otorga una cesión en uso sobre el terreno superficial que se encuentra en posesión del terreno de su propiedad mencionando en la cláusula anterior.

Dicha cesión en uso es con la finalidad que La EMPRESA realice actividades mineras en la zona, como es la exploración y explotación minera de los derechos mineros:

En tal sentido, La EMPRESA podrá realizar, en virtud de este CONTRATO, todas labores que requiere tanto para la explotación, exploración, beneficio, transporte, comercializar los productos mineros, pudiendo construir presas, canchas de relave campamentos y demás en la superficie del terreno de La PROPIETARIA referente a la Cláusula precedente.

TERCERO: PLAZO.

El plazo del presente contrato es de....., acordando automáticamente el plazo antes establecido las veces que sean necesarias en los mismos términos y condiciones, bastara la comunicación escrita y la aceptación por el mismo medio por la otra parte.

Se acuerda que La Empresa, previa comunicación escrita a La PROPIETARIA, sin expresión de causa, puede solicitarle se deje sin efecto el presente contrato, sin derecho a exigir devolución o reintegro de pagos efectuados a La PROPIETARIA. En este caso las mejoras que haya realizado en los terrenos superficiales que constituyan construcciones fijas inamovibles se quedaran a beneficio de La PROPIETARIA.

CUARTO: CONTRAPRESTACION.

En contraprestación por las Servidumbre y demás obligaciones en virtud del CONTRATO, LA EMPRESA se obliga a pagar la cantidades de S/..... (.....y 00/100 NUEVOS SOLES)

QUINTO: La EMPRESA, podrán hacer uso de las vías de acceso a las zonas mineras de la cual es titular y que se encuentran dentro de las áreas del PREDIO.

Respecto a dichas vías de acceso, LA EMPRESA se compromete a mantener en buenas condiciones de operatividad, asumiendo directamente los gastos operación y mantenimiento.

SEXTA: TRIBUTOS Y GASTOS.

Todos los tributos que graven el CONTRATO, así como los gastos notariales y derechos registrales que se generan a raíz de la suscripción del mismo y de su elevación a escritura pública, incluyendo la inscripción registral, serán cubiertos por la empresa.

SETIMA: DE LA INFORMACIÓN.

El PROPIETARIO declara haber sido convenientemente informado y asesorado en diversas ocasiones acerca de sus derechos y de los alcances y efectos del CONTRATO, los cuales han sido entendidos y aceptados libre y voluntariamente.

OCTAVA: CLAUSULAS ADICIONALES:

La EMPRESA, a respetar los estudios de Estudios de Impacto Ambiental y/o PAMA.

LA EMPRESA, se comprometen a dar preferencia de trabajo a LA PROPIETARIA, en caso de requerimiento de servicios, siempre y cuando se encuentren debidamente calificados o capacitados.

Agregue UD, señor Notario, la introducción y conclusión de ley, y en su oportunidad cursar los partes a los Registros Públicos.

Además si el acuerdo es suscrito con una comunidad; debe cumplir con otras formalidades. Algunas de ellas son previas a la firma del acuerdo ante el Notario o Juez de Paz. En forma resumida ellas son las siguientes:

- El acuerdo, debe asentarse en el Libro de Actas de la Asamblea General de la comunidad.
- La Directiva Comunal debe estar inscrita no sólo en el Ministerio de Agricultura sino también en los registros Públicos.
- La comunidad debe estar inscrita como tal, es decir como persona jurídica, en los Registros Públicos;
- El estatuto de la comunidad debe estar actualizado, como dispone la Ley de Tierras, además debe estar inscrito en los Registros Públicos.
- La comunidad debe tener su Padrón de Comuneros días, con las formalidades que exige la Ley General de Comunidades.

CONCLUSIONES.

- La presente Tesis tiene como objetivo, desarrollar la servidumbre minera, para reformular la legislación vigente, planteando propuestas normativas. Además de hacer de la servidumbre minera una herramienta eficaz para el desarrollo de la actividad minera en el Perú.
- La servidumbre civil y minera responde a necesidades económicas, pues ambas son limitaciones de la propiedad predial para el desarrollo de una actividad económica o simplemente para utilizar un predio.
- La actividad minera en el Perú crece de manera vertiginosa y cada vez con inversiones de mayor importancia, por ende se requiere más extensiones de terreno; por lo que la servidumbre minera es una figura idónea en la actual coyuntura económica globalizada que estamos viviendo.
- La adecuada regulación de la servidumbre minera es fundamental para evitar y/o superar conflictos entre el titular de la concesión minera y el propietario o poseedor del terreno superficial. El incluir al posesionario en el proceso de servidumbre minera legal y convencional; evitaría posibles conflictos. En la actualidad se puede imponer la servidumbre minera sin que el posesionario tenga posibilidades de participar en ninguna etapa del proceso.
- El proceso de servidumbre minera legal, omite a titulares de otras concesiones cuando estas soportan el gravamen, pues para la legislación solo los propietarios del terreno superficial están incluido en el procedimiento administrativo.

RECOMENDACIONES.

- ❖ Se debe incluir en la legislación, la guía para conseguir la servidumbre minera convencional; además de exigir al concesionario minero que demuestre mediante un informe detallado los resultados de la aplicación de la guía. Si los resultados son negativos, es decir, no se consigue la servidumbre minera convencional, por consiguiente recién se puede dar inicio a la servidumbre minera legal.
- ❖ En el proceso de servidumbre minera legal, se debe incluir al posesionario cuando no existe propietario o cuando este no allá consigo regularizar su propiedad.
- ❖ En el proceso de servidumbre minera legal, se debe incluir a los titulares de otras concesiones que se vean afectados con el gravamen; pues la legislación no dice nada al respecto.
- ❖ La legislación minera se desarrolló en la década de los 90; cuando se necesitaba incentivar a la economía nacional; siendo la minería una de las actividades que generó mayores divisas para el país; por ende se le otorgó al concesionario minero distintas atribuciones, como contratos de estabilidad tributaria y la facultad de imponer servidumbre minera sin consentimiento del propietario del terreno superficial; criterio que no ha tenido mayor eficacia. Este trabajo de investigación propone modificaciones legislativas que incentiven la actividad minera; como el trato directo entre el titular de la concesión y el propietario o poseedor del terreno superficial. Además incluir en el proceso administrativo al poseedor y al concesionario como titulares del predio o concesión sirviente respectivamente.

BIBLIOGRAFÍA.

1. ALVAREZ CAPEROCHUPI, José Antonio; Curso de derechos reales. Los derechos reales limitados, Madrid: Civitas; 1987
2. ALLENDE, Guillermo L.; Tratado de las Servidumbres, Buenos Aires: Abeledo-Perrot S.A.; 1927.
3. ARANGO CASTRO, Camilo Daniel, Gestión Inmobiliaria en los proyectos de Infraestructura. Enfoque al sector minero y petróleo. Editorial Pontífice Universidad Javeriana. Editorial Universo del Rosario. Bogota, Colombia 2007.
4. ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino; Diseño y Proceso de la Investigación Jurídica. Primera Edición. Editorial Adrus. Arequipa- Perú. 2005.
5. AVENDAÑO VALDEZ, Jorge; Derechos Reales: materiales de enseñanza, Lima: PUCP; 1974.
6. Baldeón Ríos, Juan Francisco; Tesis. La prospección minera. Lima: [s.n.]; 1992.
7. BASADRE AYULO, Jorge; Derecho minero peruano, 1a ED. Lima: P.L. Villanueva; 1974
8. BARRAGÁN, Alfonso M.; Derechos reales, Bogotá: TEMIS; 1971.
9. BELAÚNDE MOREYRA, Martín; León Barandiarán Hart, José. Derecho minero y concesión. 1a ED. Lima: San Marcos; 1998
10. BORREL y SOLER, Antonio M.; Derecho Civil Español. Derechos reales, Barcelona, BOSCH, CASA EDITORIAL, S.A.; 1955.

11. CACIANO Chiri, José; Tesis. Esquema del derecho minero en el Perú colonial (Siglos XVI, XVII y XVIII); Lima: [s.n.]; Lima. 1971.
12. CASTAÑEDA, Jorge Eugenio; Instituciones de Derecho Civil, Tomo I, Lima: S.E; 1952.
13. CATHEDRA, ESPURITU DEL DERECHO. Revista de los Estudiantes de Derecho de la Universidad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Año III, Nº 5. Palestra Editores. 1999.
14. COSSIO y CORRAL, Alfonso de; Instituciones de derecho civil, Madrid: Civitas; 1988
15. CUEVA ZAVALA, Jorge Luís. La Investigación Jurídica. Primera Edición, Marzo del 2008. Trujillo-Perú.
16. DÍEZ PICAZO, Luís; GULLÓN, Antonio, Instituciones de Derecho civil, Madrid: Tecnos; 1998, 2a ED.
17. GACETA JURIDICA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, La Constitución Comentada, Tomo I, Primera Edición, Diciembre 2005.
18. GARCÍA MONTÚFAR, Guillermo; FRANCISKOVIC INGUNZA, Militza. Derecho minero común. 1a ED. Lima: Gráfica Horizonte; 1999.
19. GONZALES-BERTI, Luís. Compendio de derecho minero Venezolano. Tomo I, Tercera edición actualizada. Publicaciones de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes. Mérida Venezuela. 1969.
20. GUERRA PEÑALOZA, José; GUERRA SATO, Ana María. Elementos del Derecho minero. Lima: Rodhas; 1996.
21. ISOLA, Ana Graciela; PALAVECINO, Federico M. Temas actuales de Derecho minero. 1a ED. Buenos Aires: Universidad; 2000.

22. HEDEMAN, J. W.; Derechos Reales, Madrid: Revista de Derecho Privado; 1955
23. IGLESIAS, Juan; Derecho Romano, Barcelona: ARIEL; 1953.
24. GOMEZ NUÑEZ, Sergio. Manual de Derecho Minero. Colecciones Jurídicas. Editorial Jurídica Chilena. Primera Edición 1991.
25. KIPER, Claudio Marcelo; MALIZIA, Roberto, Derechos reales, Buenos Aires: Astrea; 2005, [1a ED.]
26. LIRA OVALLE, Samuel, Curso de Derecho de Minería, Incluye Prontuario con escritos y contratos de uso frecuente. Tercera Edición Actualizada. Editorial Jurídica de Chile.
27. MAZAEUD, Henri, León Jean. “Las servidumbres reales” En: IDEM: Lecciones de Derecho Civil. Buenos Aires; Ediciones jurídicas Europa-América, 1960, parte 2º, Vol. IV.
28. MAISCH VON HUMBOLDT, Lucrecia; Los Derechos reales: concordado con la Constitución de 1979, Lima: Sesator; 1980. 2a ED.
29. MATEO BORGE, Iván; BADOSA COLL, Ferrán; La Servidumbre de Propietario, Madrid: Marcial Pons; 2000, [1a ED.]
30. MAYNZ, Carlos; Curso de Derecho Romano, Barcelona: Jaime Molinas; 1892.
31. LAFAILLE, Héctor; Derecho Civil. Tratado de Derechos Reales, Buenos Aires: Compañía Argentina de Editores; 1944
32. LAFAILLE, Héctor; Derecho Civil. Tratado de Derechos Reales, Buenos Aires: Compañía Argentina de Editores; 1944.

33. OROZCO DIAZ, Héctor Mario, Breves anotaciones sobre derecho minero, Bogotá: Pontificia universidad Javeriana; 1991.
34. PACECHO JIMENEZ, Isaías. Derecho Minero de Bolivia. Edición Financiada por la fundación Universitaria "Simón I. Patiño" La Paz. Bolivia. 1954.
35. RUIZ BOURGEOIS, Julio. Reflexiones sobre la Propiedad Minera. Publicaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de concepción. Concepción Chile, 1962.
36. URIBE HERRERA. Armando. Manual de Derecho de Minería. Editorial Jurídica de Chile. 2ª Edición, corregida y aumentada. Santiago-Chile. 1960.
37. VÁSQUEZ RÍOS, Alberto; Los derechos reales, Lima: San Marcos; 2003. 2a ED.
38. VIDAL RAMOS, Wilder E. Congreso Mundial de Minería - Inversiones Mineras. Lima: s.e; 1997.
39. WOLFF, Martín; Tratado de Derecho Civil, Barcelona: Bosch; 1937.

ANEXOS

**ANEXO N° 1: RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE MINERÍA. RESOLUCIÓN N°
1345-95-EM.**

EXPROPIACION
RESOLUCION N° 1345-95-EM/CM

Lima, 13 de noviembre de 1995

Vistos, el dictamen emitido por la Sra. Vocal Dra. Xennia Forno Castro Pozo y el recurso de revisión interpuesto por Negociación Minera Lizandro Proaño S.R.L. contra la resolución de 23 de junio de 1995 de la Dirección General de Minería, que declara el abandono de la solicitud de expropiación presentada por la recurrente e improcedente la solicitud de continuación del trámite de expropiación de fojas 45, recaída en el trámite de expropiación de 4 ha. de terreno eriazo de propiedad de la Comunidad Campesina de Viso.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 06 de abril de 1983, Negociación Minera Lizandro Proaño S.R.L. solicita la expropiación de un terreno eriazo de 4 hectáreas ubicado en el paraje Colquipallana, distrito de San Mateo, provincia de Huarochirí, departamento de Lima de propiedad de la Comunidad Campesina de Viso, para la construcción de los campamentos para los obreros que trabajan en las minas Constancia y Coricancha, adjunta plano del terreno a expropiar, plano de ubicación del terreno y memoria descriptiva;

Que, citado el comparendo, se lleva a cabo el 10 de Julio de 1983, el que concluye con el acuerdo de las partes de llevar a cabo la expropiación, comprometiéndose la Comunidad Campesina de Viso a acreditar la titularidad de las áreas a expropiarse;

Que, por recurso N° 001067 del 10 de junio de 1991, Negociación Minera Lizandro Proaño S.R.L. manifiesta que no habiéndose suscrito la minuta ni la escritura pública correspondiente por no haber presentado la Comunidad Campesina de Viso sus títulos de propiedad solicita se continúe el trámite de expropiación lo que es calificado por escrito N° 919770 de 16 de marzo de 1993; la Dirección General de Minería notifica mediante exhorto a la Comunidad Campesina de Viso para que presente los títulos de propiedad, con fecha de 20 de abril de 1993, solicitando la misma un plazo de 40 días; con fecha 20 de Julio de 1993, mediante recurso N° 929684 Negociación Minera Lizandro Proaño S.R.L. solicita se haga efectivo el apercibimiento y dispocner se continúe el trámite en rebeldía del emplazado, por resolución del 09 de

EXPROPIACION

RESOLUCION Nº 1345-95-EM/CM

Lima, 13 de noviembre de 1995

Vistos, el dictamen emitido por la Sra. Vocal Dra. Xennia Forno Castro Pozo y el recurso de revisión interpuesto por Negociación Minera Lizandro Proaño S.R.L. contra la resolución de 23 de junio de 1995 de la Dirección General de Minería, que declara el abandono de la solicitud de expropiación presentada por la recurrente e improcedente la solicitud de continuación del trámite de expropiación de fojas 45, recaída en el trámite de expropiación de 4 ha. de terreno eriazo de propiedad de la Comunidad Campesina de Viso.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 06 de abril de 1983, Negociación Minera Lizandro Proaño S.R.L. solicita la expropiación de un terreno eriazo de 4 hectáreas ubicado en el paraje Colquipallana, distrito de San Mateo, provincia de Huarochirí, departamento de Lima de propiedad de la Comunidad Campesina de Viso, para la construcción de los campamentos para los obreros que trabajan en las minas Constancia y Coricancha, adjunta plano del terreno a expropiar, plano de ubicación del terreno y memoria descriptiva;

Que, citado el comparendo, se lleva a cabo el 10 de Julio de 1983, el que concluye con el acuerdo de las partes de llevar a cabo la expropiación, comprometiéndose la Comunidad Campesina de Viso a acreditar la titularidad de las áreas a expropiarse;

Que, por recurso Nº 001067 del 10 de junio de 1991, Negociación Minera Lizandro Proaño S.R.L. manifiesta que no habiéndose suscrito la minuta ni la escritura pública correspondiente por no haber presentado la Comunidad Campesina de Viso sus títulos de propiedad solicita se continúe el trámite de expropiación lo que es calificado por escrito Nº 919770 de 16 de marzo de 1993; la Dirección General de Minería notifica mediante exhorto a la Comunidad Campesina de Viso para que presente los títulos de propiedad, con fecha de 20 de abril de 1993, solicitando la misma un plazo de 40 días; con fecha 20 de Julio de 1993, mediante recurso Nº 929684 Negociación Minera Lizandro Proaño S.R.L. solicita se haga efectivo el apercibimiento y disponer se continúe el trámite en rebeldía del emplazado, por resolución del 09 de

agosto de 1993 se le otorga un plazo extraordinario de 10 días, la comunidad para el cumplimiento de lo ordenado, bajo apercibimiento de disponer una inspección conforme a Ley; y mediante recursos N° 941938 de 07 de diciembre de 1993, N° 953589 de 25 de abril de 1994, N° 965420 de 23 de junio de 1994 y N° 978253 del 21 de setiembre de 1994 Negociación Minera Lizandro Proaño S.R.L. solicita se haga efectivo el apercibimiento decretado;

Que, por resolución de 05 de octubre de 1994 de la Dirección General de Minería se requiere a Negociación Minera Lizandro Proaño S.R.L. para que previo a proveer sus escritos de fechas 07 de diciembre de 1993, 28 de abril de 1994, 22 de junio de 1994, 22 de setiembre de 1994 en el plazo de 30 días acredite su condición de concesionaria y adecúe su solicitud de expropiación al trámite de servidumbre si lo consideran conveniente bajo apercibimiento de declarar en abandono su solicitud de expropiación sustentada en el informe N° 407-94 EM/DGM/QTN de la Oficina Técnica Normativa en el que se opina que la actual Constitución Política del Perú, vigente a partir del 01 de enero de 1994 que en su artículo 70 dispone que a nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por Ley y estando a que en el Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minería que establece en el numeral V de su Título Preliminar que la Industria Minera es de utilidad pública consecuentemente no teniendo la industria minera la declaración de necesidad pública característica necesaria para la procedencia de las expropiaciones, a fin de respetar la jerarquía de las normas debe notificarse a la recurrente para que adecue su solicitud de expropiación a servidumbre;

Que, Negociación Minera Lizandro Proaño S.R.L., el 18 de noviembre de 1994 interpone recurso de revisión contra la resolución de 05 de octubre de 1994, el que es declarado improcedente por resolución del 16 de enero de 1995, sustentada en que la primera parte del artículo 133 del Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minería señala que durante la tramitación de un expediente no se admitirá recurso alguno que lo entorpezca salvo el de revisión contra la resolución que otorgue la servidumbre o expropiación por lo que no siendo el caso, el recurso de revisión deviene en improcedente, emitiéndose posteriormente la resolución materia de la alzada.

Que, al respecto cabe precisar que el artículo 133 del Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minería, se refiere al hecho que durante el trámite de una expropiación o servidumbre no se admite recurso alguno que lo entorpezca, no siendo el caso de un recurso de revisión contra una resolución que está denegando la solicitud de expropiación,

el que debió concederse y tramitarse;

Que, al haberse denegado un recurso de revisión se vició de nulidad lo actuado desde la resolución del 16 de enero de 1995, de conformidad con el artículo 148 inciso 3 del Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minería, debiendo reponerse el trámite al estado de concederse el recurso de revisión, y estando los actuados bajo jurisdicción del Consejo de Minería por celeridad administrativa procede que se emita pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado;

Que, el sustento del recurso de revisión es que ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, según se señala en el artículo 103 de la Constitución por lo que debe aplicarse a su solicitud normas que se expidieran con posterioridad al inicio de su procedimiento de expropiación;

Que, al respecto es necesario precisar, que cuando inició el procedimiento de expropiación por parte de Negociación Minera Lizandro Proaño S.R.L. esta era legalmente posible por cuanto la Constitución de 1979 en su artículo 125 establecía que procedía la expropiación por causa de necesidad y utilidad pública o de interés social declarada conforme a Ley y el Decreto Legislativo N° 109 vigente en ese entonces, en su numeral VI del Título preliminar establecía que la industria minera era de utilidad pública;

Que, el procedimiento de expropiación iniciado en 1983, no se concluyó pese a las reiteradas solicitudes de Negociación Minera Lizandro Proaño S.R.L.;

Que, a partir del 01 de enero de 1994 rige en el Perú una nueva Constitución Política, que en su artículo 70 señala que "El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. A nadie puede privarse de su propiedad sino exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y, previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio";

Que, por otro lado la Ley de Inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas, Ley N° 26505 en su Primera Disposición Complementaria dispone que las causales de necesidad pública que la Ley puede invocar para proceder a la expropiación de un predio se circunscribirán a la ejecución de obras de infraestructura y servicios públicos;

Que, al no haberse concluido el trámite de expropiación iniciado por Negociación Lizandro Proaño S.R.L. durante la vigencia de la Constitución Política del Perú de 1979 y el Decreto Legislativo N° 109,

y habiendo sido modificadas dichas normas por la Constitución Política del Perú de 1994, el Decreto Legislativo N° 708 y la Ley N° 26505, le son aplicables a dicho procedimiento las nuevas disposiciones, desde el momento en que entran en vigencia;

Que, al no haber dispositivo legal que sustente que las solicitudes de expropiación en trámite deben adecuarse al procedimiento de servidumbre la resolución del 05 de octubre de 1994 deviene en nula de conformidad con el artículo 148 inciso 3) del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería;

Que, por las consideraciones expuestas y al amparo de lo dispuesto por el artículo 149 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, el Consejo de Minería debe declarar de oficio la nulidad de actuados desde la resolución del 05 de octubre de 1994 y todo lo actuado posteriormente reponiendo el trámite al estado de declarar improcedente la solicitud de expropiación presentada por Negociación Minera Lizandro Proaño S.R.L. por los fundamentos de la presente resolución;

Estando al dictamen de la vocal informante y con el voto aprobatorio de los miembros del Consejo de Minería;

SE RESUELVE:

Declarar de oficio la nulidad de actuados desde la resolución del 05 de octubre de 1994 y todo lo actuado posteriormente reponiendo el trámite al estado de declarar improcedente la solicitud de expropiación presentada por Negociación Minera Lizandro Proaño S.R.L. por los fundamentos de la presente resolución.

Regístrese, publíquese y archívese.

DRA. INES IZAGUIRRE MEINARDO

Presidenta

ING. JUAN F. ZUTA RUBIO

Vice-Presidente

DR. JESUS PONCE SANCHEZ

Vocal

DRA. XENNIA FORNO CASTRO POZO

Vocal

ING. JOSE CASTILLO MEZA

Vocal

DR. RODOLFO A. CAPCHA ARMAS

Secretario Relator Letrado

ANEXO Nº 2: SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

EXP. N.º 202-2000-AA/TC

LIMA

MINERA CORIHUAYCO S.A.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los veintinueve días del mes de enero de dos mil dos, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Aguirre Roca, Presidente; Rey Terry, Vicepresidente; Nugent, Díaz Valverde, Acosta Sánchez y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular, adjunto, del Magistrado Aguirre Roca, que se adjunta como parte integrante de la misma

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por la empresa Minera Corihuayco S.A. contra la sentencia expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas setecientos dieciocho, su fecha veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Minera Corihuayco S.A. interpone acción de amparo contra la empresa Petramas S.A. y sus representantes legales, doña Isabel Reátegui Moreno de Acosta y doña Catalina Ruíz López y contra la Pequeña Empresa de Trabajadores de Materiales Sólidos S.R.L. y su representante legal, don Jorge Zegarra Reátegui, con la finalidad de que dejen de realizar actos que atenten y violen, principalmente, sus derechos a trabajar libremente, a la propiedad y al libre tránsito, y se repongan las cosas al estado anterior a la vulneración y amenaza de violación de los derechos antes citados.

Manifiesta que es propietaria de los Denuncios Mineros Corihuaycos N.ºs 04, 05, 06 y 07, de La Consentida N.º I, II, III, IV, VII y X; y Doña Lily N.º I, II, III y V, que conjuntamente totalizan aproximadamente doce mil hectáreas (12,000 ha) de la quebrada Huaycoloro del distrito de San Antonio de Chaclla, provincia de Huarochirí, departamento de Lima. Señala que, a fin de poder llegar a sus denuncios mineros y explotarlos, es necesario transitar por una trocha carrozable denominada "Trocha Vía Real", la misma que tiene el carácter de vía pública y que pasa a través de terrenos que son de propiedad de la Comunidad Campesina de Jicamarca y aparentemente de la empresa Petramas S.A. Indica que don Jorge Zegarra Reátegui, sin derecho ni permiso alguno, ha colocado una tranquera levadiza en medio de la vía, impidiendo el libre tránsito de todo aquel que no tenga autorización de la demandada, en razón de que aduce ser el propietario de los terrenos donde se encuentra el relleno sanitario adyacente al camino. Manifiestan que desde el año mil novecientos noventa y cuatro la demandante ha venido realizando estudios de exploración minera e iniciado trámites a fin de ampliar los mismos con compañías extranjeras, y por los hechos expuestos se han visto perjudicadas dichas negociaciones; asimismo, agrega que existen diversos informes del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Agricultura que señalan que dicha vía tiene carácter de vía pública.

Petramas S.A. y Pequeña Empresa de Trabajadores de Materiales Sólidos S.R.L. proponen las excepciones de incompetencia, oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda y falta de agotamiento de la vía administrativa, y contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, solicitando que en su oportunidad se declare infundada. Señalan que mil quinientos setenta y cinco hectáreas (1,575 ha) de la quebrada de Huaycoloro fueron vendidas por la Comunidad Campesina de Jicamarca a don Jorge Zegarra Reátegui, y que, a efectos de hacer más productiva la quebrada de Huaycoloro, la Comunidad Campesina de Jicamarca construyó una vía carrozable que no cruza ni conduce a ningún centro poblado, debiendo ser utilizada en forma exclusiva y excluyente por los propietarios de dicho terreno; vale decir, la Comunidad Campesina de

Jicamarca y don Jorge Zegarra Reátegui, motivo por el cual han construido una garita de control y una tranquera, a fin de franquear los legítimos derechos de los propietarios. Alegan que, en una actitud dolosa, la demandante pretende confundir al juzgador, por cuanto indica que dentro de los perímetros de la quebrada de Huaycoloro se encuentra su denuncia minero; asimismo, coludiéndose con traficantes de tierras, pretende invadir dicha propiedad, señalando que la vía carrozable es una vía pública, situación que no es exacta ni real.

El Juzgado Mixto de Huarochirí-Matucana, con fecha trece de abril de mil novecientos noventa y nueve, declaró infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, por considerar, entre otras razones, que con el Informe N.º 185-98-MTC, emitido por la Coordinadora de la Dirección de Carreteras del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, de fecha veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y ocho, se establece que todos los caminos existentes en el territorio de la República tienen el carácter de caminos públicos.

La recurrida revocó, en parte, la apelada en el extremo que declaró fundada la demanda, y reformándola, la declara improcedente, y la confirma en lo demás que contiene, por considerar que los hechos alegados en el caso concreto suponen un conflicto de derechos legales derivados del mejor derecho de propiedad, litigio que debe ventilarse en la vía pertinente que la ley le franquea.

FUNDAMENTOS

1. Aunque la demanda está referida a la presunta afectación de derechos tutelados tanto por la acción de amparo (derecho al trabajo y derecho de propiedad) como por la de hábeas corpus (derecho al libre tránsito), la sentencia debe pronunciarse sobre todos ellos, ya que al ser la vía del amparo una vía más amplia dentro de los procesos constitucionales, permite evaluar en conjunto los derechos presuntamente afectados por el acto cuestionado.
2. Los demandados han alegado que para que los trabajadores de la empresa demandante pasen por el terreno de su propiedad, debe establecerse una servidumbre minera, conforme al artículo 7º de la Ley N° 26505, modificado por la Ley N° 26570.

Esto nos lleva a determinar, la existencia de una servidumbre en los terrenos de los demandados, no porque ésta constituya un derecho constitucional, sino por el carácter instrumental que dicho derecho legal posee en relación con derechos que sí son constitucionales, como es el caso del derecho al trabajo.

3. En tal sentido, aparece de las escrituras públicas de fecha tres de octubre de mil novecientos noventa y siete y catorce de agosto de mil novecientos noventa y ocho, celebradas entre don Jorge Segundo Zegarra Reátegui (comprador) y la Comunidad Campesina de Jicamarca (vendedor), que el primero "se compromete a respetar y no modificar las servidumbres de paso que existan en el inmueble materia de transferencia (tales como camino carrozable que conduzca a la Comunidad Campesina de Jicamarca)", como se señala en la Cláusula Sexta de cada una de ellas, quedando establecida, en consecuencia, la existencia de una servidumbre de paso.

Así, las servidumbres son preexistentes al contrato de compra-venta, por lo que el comprador no puede limitar su ejercicio, más aún cuando éstas, por definición son un derecho de naturaleza real y no personal.

4. Además, la servidumbre es inseparable del predio dominante y sólo puede transferirse con él, subsistiendo la carga en el predio sirviente, cualquiera que sea el dueño, y teniendo la calidad de perpetuas, salvo las disposiciones que la ley o que el convenio les fije plazo, condiciones éstas que no se han dado en el caso de autos, y que se encuentran reguladas en el Título VI del Libro V, del Código Civil vigente; por lo que el actual propietario se encuentra obligado a

respetar tal gravamen, es decir, a permitir el libre paso de terceros por la trocha carrozable denominada "Trocha Vía Real", sin impedir su uso, toda vez que la limitación a su derecho de propiedad es, en su caso, contemporánea a la adquisición del bien, y en el caso del predio dominante es anterior a la celebración del contrato de compraventa.

La existencia de la vía carrozable y de la tranquera ha sido acreditada en la diligencia de inspección judicial realizada con fecha nueve de noviembre de dos mil uno, con intervención de los Magistrados del Tribunal, señores Nugent, Acosta Sánchez y Revoredo Marsano, designados expresamente por el Pleno del Tribunal Constitucional para tal efecto, quienes en tal diligencia interrogaron a don Pablo Huancause Ochante, trabajador de Petramas S.A., quien manifestó: "que los comuneros de Jicamarca intercambiaban productos en el punto un poco mas allá del sitio donde se encuentra la cruz en Huaycoloro, con comerciantes que venían por el camino de Nievería; lo que dejó de ocurrir hace algún tiempo".

El concepto de la servidumbre civil es más amplio que el de la servidumbre minera, por lo que carece de objeto hacer referencia alguna a la segunda, dado que al acreditarse la primera, ello resulta innecesario; en ese sentido, al establecerse una concesión minera en los terrenos de la Comunidad Campesina de Jicamarca, los concesionarios pueden hacer uso de las servidumbres existentes, dado que por definición –como se ha señalado– las servidumbres se establecen en beneficio del predio y no de los propietarios o usufructuarios del mismo, independientemente de las personas.

5. En consecuencia, queda acreditada la afectación del derecho constitucional de la demandante, pues al impedirse que sus trabajadores transiten libremente por la vía que da acceso al denuncio minero, se está restringiendo su derecho a trabajar libremente con sujeción a ley, tal como se señala en el inciso 15) del artículo 2° de nuestra Carta Fundamental.
6. En cuanto a la vulneración al derecho a la propiedad que aduce la demandante, no resulta amparable, ya que ésta no tiene titularidad sobre terreno alguno, sino un derecho real de concesión, cuya protección, como el resto de derechos derivados de la Ley General de Minería, es un derecho de rango legal, mas no constitucional; por lo que ante su eventual conculcación, debe recurrirse a la vía ordinaria.
7. Respecto a la naturaleza de la trocha carrozable, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones, solicitó al Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, que informe sobre la condición de esa vía, lo cual fue cumplido el quince de junio del año en curso, y ampliado posteriormente, habiendo tachado el representante legal de Petramas S.A.C. dicho informe, por considerar que su contenido es falso; tacha que debe ser declarada improcedente, de acuerdo al inciso 1) del artículo 235° del Código Procesal Civil.

En dicho informe se precisa que se trata de una vía pública, conclusión que no ha sido tomada en cuenta por este Colegiado al expedir esta sentencia, por haberse acreditado en la diligencia de inspección judicial, la existencia de la servidumbre de paso.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica

FALLA

Declarando improcedente la tacha de documentos deducida por la parte demandada. **CONFIRMANDO**, en parte, la recurrida, en el extremo que, revocando la apelada, declaró **INFUNDADAS** las excepciones propuestas, y **REVOCÁNDOLA** en el extremo que declaró improcedente la demanda; reformándola, declara **FUNDADA** la acción de amparo, y, en consecuencia, ordena que, en el término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación con

la presente sentencia, los demandados retiren la tranquera mencionada en los fundamentos de esta resolución; poniéndose esta sentencia en conocimiento del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial *El Peruano* y la devolución de los actuados.

SS

REY TERRY

NUGENT

DÍAZ VALVERDE

ACOSTA SÁNCHEZ

REVOREDO MARSANO

EXP. N° 202-00-AA/TC

VOTO SINGULAR DEL DR. MANUEL AGUIRRE ROCA

No suscribo el fallo, pese a estar parcialmente de acuerdo con sus fundamentos signados 3. y 4., porque si bien considero, precisamente por las razones que en ellos se exponen, que el demandado Ing. Jorge Zegarra Reátegui carece de facultades legales para impedir el tránsito pacífico por la trocha carrozable que motiva la demanda de autos, toda vez que el inmueble de su propiedad, respecto de la servidumbre de paso, tiene naturaleza de "fundo sirviente"; el demandante, a su vez, no ha probado tener derecho a usar dicha servidumbre.

En suma, y aunque resulte paradójico, en autos se da el curioso caso de que el demandado carece de derecho para impedir el uso de la servidumbre o trocha carrozable, debiendo, por tanto, retirar la tranquera respectiva; pero que, de otro lado, el demandante no ha acreditado, a mi juicio, su derecho a usar la correspondiente vía; y, por lo demás, como lo que el demandante pretende es el derecho de usar libremente tal vía, al no haber acreditado el derecho respectivo, aunque el demandado deba retirar la tranquera, la demanda, a mi criterio, no puede declararse fundada.

SR.

AGUIRRE ROCA



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 00228-2008-PHC/TC

LIMA NORTE

SONIA MARIA PATRICIA JARA Y OTRO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 20 días del mes de abril de 2009, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Ernesto Méndez Venegas contra la resolución expedida por la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 378, su fecha 21 de noviembre de 2007, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de octubre de 2007, don Jorge Ernesto Méndez Venegas y doña Sonia María Patricia Jara Quevedo interponen de manera verbal demanda de hábeas corpus y la dirigen contra doña Erika Benitez Torres, don Jorge Zegarra Reátegui y doña Sonia Revilla Peschiera, por haber vulnerado su derecho a la libertad de tránsito

La demandante, doña Sonia María Patricia Jara Quevedo, refiere que viene ejerciendo la posesión de 350 hectáreas en la zona de Río Seco, distrito de Carabayllo, provincia de Lima, desde hace siete años aproximadamente, en virtud de una cesión de uso otorgada por los pobladores del “Anexo Quince” de la referida localidad de Río Seco (quienes ostentan el usufructo de dicho predio desde el año 1997, conforme consta en la partida registral N.º 1194870 de Registro de Propiedad Inmueble), realizando en dicho lugar actividades de crianza y venta de aves de corral. Manifiesta, además, que desde hace siete años se construyó una trocha carrozable para poder llegar al terreno donde viene ejerciendo posesión; sin embargo, señala que con fecha 13 de octubre de 2007, tomó conocimiento de que el mencionado camino se encontraba cerrado por orden de los emplazados, además de que era vigilado por sujetos desconocidos, todo lo cual fue constatado por el personal policial de la zona de Comas-Carabayllo. Refiere, además, que si bien se logró abrir el camino obstruido por la intervención de la policía, con fecha 16 de octubre de 2007 nuevamente se encontraba bloqueado por disposición de los demandados, contando esta vez con un mayor número de sujetos desconocidos que impiden el tránsito de toda persona y vehículo por los caminos que dan acceso al terreno donde viene ejerciendo la posesión, siendo este hecho constatado por la representante del Ministerio Público Patricia Rodríguez, a quien también le negaron el ingreso. Refiere, también, que por motivo del cierre del mencionado camino, sus trabajadores



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 00228-2008-PHC/TC

LIMA NORTE

SONIA MARIA PATRICIA JARA Y OTRO

quedaron aislados, sin que se les pueda alcanzar comida o agua.

Por su parte, don Jorge Ernesto Méndez Venegas refiere, en calidad de gerente y representante de la empresa “Cantera Campay”, que dicha empresa viene ejerciendo actividades de extracción y comercialización de materiales de construcción en virtud de la Resolución Jefatural N° 03676-97-RPM expedida por la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Minas, mediante la cual se le otorga la concesión minera sobre el territorio de 600 hectáreas ubicado en el kilómetro 31.5 de la localidad de Río Seco, Quebrada de Campay, distrito de Carabayllo, provincia de Lima. Alega que uno de los caminos que han sido obstruidos por los emplazados es el que conduce al territorio concesionado (mientras que el otro conduce al terreno de su codemandante), por lo que dicha situación le impide ingresar a su centro de trabajo y realizar sus labores cotidianas, lo que además afecta a sus proveedores y clientes.

Por otro lado, mediante escrito de fecha 18 de octubre de 2007, doña Patricia Jara Quevedo se desistió de la demanda de hábeas corpus formulada. A tal efecto, legalizó su firma ante el Primer Juzgado Penal del Módulo Básico de Justicia de Condevilla (a fojas 241).

Realizada la investigación sumaria, el demandante se ratificó en todos los extremos de su demanda, agregando además que los demandados no han probado ser propietarios del predio en donde se encuentra el camino obstruido. Señala además que la concesión otorgada a la empresa de la cual es gerente es inseparable del predio dominante y sólo puede ser transferida con él subsistiendo la carga en el predio sirviente, por lo que los presuntos propietarios deben de respetar la servidumbre de paso existente. A su turno, los emplazados, mediante escrito de fecha 18 de octubre de 2007, señalaron que el terreno ubicado entre la Quebrada Pampay y Pampas de Pampay, distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí, es de su propiedad, lo cual se encuentra acreditado mediante escritura pública de fecha 30 de diciembre de 2002, inscrita en la partida electrónica N° 01953613 del libro de Personas Jurídicas (mediante la cual consta la transferencia de la propiedad entre la Comunidad Campesina de Jicamarca y doña Sonia Revilla Peschiera), así como por la minuta de compraventa de fecha 16 de enero de 2007 (a través de la cual la emplazada transfiere la propiedad a don Jorge Zegarra Reátegui). Señalan también que el recurrente alega tener la posesión del terreno sobre la base de una Transferencia de Uso y Usufructo otorgado por la Comunidad Campesina de Jicamarca, la cual, según sostienen, es inválida por cuanto fue realizada por don Andrés Rodríguez Arias, quien jamás tuvo representatividad alguna sobre la referida comunidad, tal como se advierte de análisis de la partida registral N° 01953613; además de que la anotación preventiva de la inscripción de usufructo alegada por los recurrentes ha sido tachada mediante título N° 207-0410657 del Libro de Personas Jurídicas de



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 00228-2008-PHC/TC

LIMA NORTE

SONIA MARIA PATRICIA JARA Y OTRO

Lima y Callao. Manifiestan además que el juez competente para conocer los hechos materia de investigación es el órgano jurisdiccional de Huarochirí-Matucana, y no de Carabayllo, como erróneamente lo han afirmado los accionantes. Refieren asimismo que no existe persona alguna que se le haya privado de su libertad, lo cual quedó acreditado ante el órgano jurisdiccional al momento en que éste se hizo presente en el lugar de los hechos, toda vez que se verificó que los trabajadores de los recurrentes se encontraban en la posibilidad de desplazarse libremente.

El Primer Juzgado Especializado en lo Penal del Módulo Básico de Justicia de Condevilla, con fecha 18 de octubre de 2007, declaró fundada en parte la demanda, ordenando que el recurrente pueda transitar por el predio de los emplazados hacia el terreno ubicado en el kilómetro 31.5 de la localidad de Río Seco, por considerar que: a) existe una servidumbre minera amparada mediante la referida Resolución Jefatural N.º 03676-97-RPM a favor del recurrente; b) del estudio de los actuados se advierte que la servidumbre minera mencionada, otorgada mediante la referida Resolución Jefatural N.º 03676-97-RPM, data de fecha 20 de mayo de 1997, por lo que aprecia que es anterior a la escritura pública de fecha 30 de diciembre de 2002 y de la minuta de fecha de fecha 16 de enero de 2007; en tal sentido, los compradores del terreno no pueden limitar el derecho al libre tránsito del recurrente; asimismo, la servidumbre es inseparable del predio dominante y sólo puede transferirse con él subsistiendo la carga en el predio sirviente, con independencia de quien sea el propietario del mismo y teniendo la calidad de perpetua, salvo las disposiciones pertinentes establecidas en la ley o de manera convencional, lo cual no ha ocurrido en el caso de autos.

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por considerar que la Resolución Jefatural N.º 03676-97-RPM aprueba el título de la concesión minera a favor de Jorge Ernesto Méndez Venegas, estableciendo además que los derechos conferidos por el mencionado título estarán sujetos a las obligaciones que establece el título VI del TUO de la Ley General de Minería (aprobado por Decreto Supremo N.º 014-92-EM), así como por lo dispuesto por la Ley N.º 26505 (Ley de inversión privada en el desarrollo de actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas). A tal efecto, el artículo 7 de la referida Ley N.º 26505 establece que la utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos requiere acuerdo previo con el propietario, lo cual no ha sido acreditado por el recurrente; además, que la reglamentación de la servidumbre minera dispuesta por Decreto Supremo N.º 015-03-AG señala que el procedimiento para poder adquirir dicho derecho real se puede realizar ya sea mediante trato directo entre las partes, o a través del trámite administrativo ante la Dirección General de Minería en caso de no existir acuerdo, lo que culmina finalmente con la expedición de la Resolución Suprema que fija la indemnización con la minuta que establece la servidumbre, la misma que tampoco ha sido acreditada en el presente proceso



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 00228-2008-PHC/TC

LIMA NORTE

SONIA MARIA PATRICIA JARA Y OTRO

constitucional. Agrega además que la concesión minera Pampay no cuenta con pronunciamiento judicial en materia de prescripción adquisitiva que otorgue servidumbre respecto de los caminos por los cuales tiene acceso; además de que no se ha acreditado de manera fehaciente la imposibilidad de tránsito al territorio concesionado por la empresa del demandante.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio y cuestiones previas

1. El demandante alega que los emplazados vienen vulnerando su derecho al libre tránsito, por cuanto han cerrado el camino de acceso que conduce a la concesión minera otorgada a la empresa “Cantera Campay” (de la cual es representante), ubicada en el kilómetro 31.5 de la localidad de Río Seco, distrito de Carabayllo, provincia de Lima. Aduce que la vía clausurada constituye una servidumbre de paso respecto del terreno sobre el cual los emplazados alegan detentar la propiedad.
2. Del análisis de los actuados se advierte que la recurrente, doña Patricia Jara Quevedo, mediante escrito de fecha 18 de octubre de 2007 (que obra a fojas 240 de autos), se desistió de la demanda de hábeas corpus formulada. A tal efecto, legalizó su firma ante el Primer Juzgado Penal del Módulo Básico de Justicia de Condevilla (a fojas 241).
3. Al respecto, es preciso señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 del Código Procesal Constitucional, la demanda de hábeas corpus puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin que exista la necesidad de delegar previamente representación alguna. Así, en el presente caso, la demandante, Sonia María Patricia Jara Quevedo, ha señalado en su demanda que a los trabajadores que se encuentran a su cargo se les viene restringiendo su derecho al libre tránsito, por cuanto presuntamente no pueden desplazarse libremente del lugar en donde se encuentran incomunicados, ni tampoco se les puede alcanzar agua o alimentos; en consecuencia, es posible inferir que la recurrente ha interpuesto la presente demanda no sólo a favor de sí misma, sino también de sus trabajadores (en calidad de beneficiarios).
4. Asimismo, es preciso manifestar que si bien este Tribunal ha aceptado la figura del desistimiento en procesos de hábeas corpus (Exps. Nsº 7947-2005-PHC/TC,



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 00228-2008-PHC/TC

LIMA NORTE

SONIA MARIA PATRICIA JARA Y OTRO

7326-2006-PHC/TC, 01203-2007-PH/TC, 5894-2006-PHC/TC, 0634-2007-PHC/TC) es preciso manifestar que el único que puede desistirse de una pretensión es el titular del derecho presuntamente afectado.

5. En tal sentido, el desistimiento postulado por la recurrente, Doña Patricia Jara Quevedo, tiene como efecto que carezca de sentido emitir pronunciamiento alguno respecto de la presunta vulneración de su derecho al libre tránsito. Sin embargo, de conformidad con lo expuesto en el párrafo anterior, la demanda interpuesta por la recurrente también se plantea a favor de los trabajadores de ésta, siendo el caso que el desistimiento realizado por la recurrente no surte efectos respecto de ese extremo de la demanda, al no haber sido realizado por el titular del derecho presuntamente vulnerado (que en el presente caso son los trabajadores, en calidad de beneficiarios, a quienes también presuntamente se les habría vulnerado su derecho al libre tránsito). Por consiguiente, este Tribunal se encuentra habilitado para pronunciarse respecto de la alegada afectación de la libertad de tránsito de los trabajadores de la demandante.

Derecho al libre tránsito y derecho real de servidumbre

6. El artículo 2º, inciso 11), de la Constitución regula el derecho fundamental a la libertad de tránsito. Esta facultad comporta el ejercicio del atributo *ius movendi et ambulandi*. Es decir, supone la posibilidad de desplazarse autodeterminativamente en función de las propias necesidades y aspiraciones personales, a lo largo y ancho del territorio, así como la de ingresar o salir de él, cuando así se desee. Se trata, en suma, de un elemento conformante de la libertad individual. Más aún, deviene en una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona, toda vez que se presenta como el derecho que tiene ésta para poder ingresar, permanecer, circular y salir libremente del territorio nacional. Sin embargo, este derecho, como todos los demás, no es absoluto, sino que tiene que se ejercer según las condiciones que cada titular del mismo posee y de acuerdo con las limitaciones que la propia Constitución y la ley establecen (Cfr. STC Exp. N.º 2876-2005-HC/TC, caso Nilsen Mallqui Laurence, fundamentos 11 y 12).
7. Por otro lado, la facultad de desplazamiento que supone el derecho a la libertad de tránsito también se manifiesta a través del uso de las vías de naturaleza pública o de las vías privadas de uso público. En el primer supuesto, el *ius*



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 00228-2008-PHC/TC

LIMA NORTE

SONIA MARIA PATRICIA JARA Y OTRO

movendi et ambulandi se expresa en el tránsito por parques, calles, avenidas, carreteras, entre otros; en el segundo supuesto, se manifiesta, por ejemplo, en el uso de las servidumbres de paso. Sin embargo, en ambas situaciones, el ejercicio de dicha atribución debe efectuarse respetando el derecho de propiedad. (Cfr. STC Exp. N.º 846-2007-HC/TC, caso Vladimir Condo Salas y otra, fundamento 4; Exp. N.º 2876-2005-HC/TC, caso Nilsen Mallqui Laurence, fundamento 14). En efecto, si bien el derecho a la libertad de tránsito tutela el desplazamiento por servidumbres de paso, es preciso señalar que resulta vital determinar de manera previa la existencia de una servidumbre de paso, por el carácter instrumental que dicho derecho legal posee en relación con derechos de rango constitucional como la propiedad y el libre tránsito (Cfr. STC Exp. N.º 202-2000-AA/TC, caso Minera Corihuayco S.A., fundamento 2; Exp. N.º 3247-2004-HC/TC, caso Gregorio Corrilla Apaclla, fundamento 2)

Servidumbre de paso y justicia constitucional

8. No cabe la menor duda de que, en un contexto dado, la servidumbre de paso constituye una institución legal que hace viable el ejercicio de la libertad de tránsito en sus diversas manifestaciones. De ahí que cualquier restricción arbitraria del uso de la servidumbre suponga también una vulneración del derecho a la libertad de tránsito, y por tanto, pueda ser protegido mediante el hábeas corpus. Sin embargo, no debe olvidarse que la competencia de la justicia constitucional de la libertad está referida únicamente a la protección de derechos fundamentales y no a la solución y/o dilucidación de controversias que atañan asuntos de mera legalidad.
9. En efecto, en más de una ocasión en la que se ha cuestionado el impedimento del tránsito por una servidumbre de paso este Tribunal Constitucional ha estimado la pretensión, sustentándose en que la existencia y validez legal de la servidumbre se hallaba suficientemente acreditada conforme a la ley de la materia (Cfr. Exp. N.º 0202-2000-AA/TC, 3247-2004-PHC/TC, 7960-2006-PHC/TC). Ello no resulta ajeno a la jurisdicción constitucional, en la medida que estando suficientemente acreditada la institución legal que posibilita el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, corresponde al juez constitucional analizar en cada caso si la alegada restricción del derecho invocado es o no inconstitucional.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 00228-2008-PHC/TC

LIMA NORTE

SONIA MARIA PATRICIA JARA Y OTRO

10. Tal situación no se dará cuando la evaluación de la alegada limitación del derecho de libertad de tránsito implique a su vez dilucidar aspectos que son propios de la justicia ordinaria como es la existencia y validez legal de un servidumbre de paso. En tales casos, este Tribunal Constitucional se ha pronunciado declarando la improcedencia de la demanda (Cfr Exps Ns.º 0801-2002-PHC/TC, 2439-2002-AA/TC, 2548-2003-AA, 1301-2007-PHC/TC, 2393-2007-PHC/TC, 00585-2008-PHC/TC).

11. Conforme a lo expuesto, la demanda de hábeas corpus en la que se alegue la vulneración del derecho a la libertad de tránsito a través de una servidumbre de paso, exige previamente la acreditación de la validez legal y existencia de la servidumbre. De lo contrario, en caso de que la alegada vulneración de la libertad de tránsito exija la determinación de aspectos de mera legalidad, que exceden el objeto del proceso de hábeas corpus, la demanda deberá ser declarada improcedente.

Análisis del caso concreto

12. En el presente caso los demandantes han alegado el desconocimiento de una servidumbre de paso por parte de los demandados, lo que impediría al demandante, don Jorge Ernesto Méndez Venegas, acceder al predio en el que lleva a cabo actividades de extracción de mineral, así como a los favorecidos, empleados de doña Patricia Jara Quevedo, acceder al lugar en el que realizan sus labores de crianza de aves de corral. Sin embargo, en el presente caso no ha podido ser demostrada la existencia de tal servidumbre de paso. Antes bien, los demandados han alegado que son propietarios del predio que comprende tanto el lugar de la concesión minera como el terreno en el que la demandante, doña Patricia Jara Quevedo, lleva a cabo la crianza de aves de corral. Para tal efecto, han presentado escrituras públicas de la transferencia de la propiedad (a fojas 153 y 167) no constando servidumbre de paso alguna, por lo que en el presente caso no es posible emitir pronunciamiento de fondo.

13. A mayor abundamiento sobre la concesión minera del demandante don Jorge Ernesto Méndez Venegas, cabe señalar que si bien es cierto que mediante Resolución Jefatural N.º 03676-97-RPM de fecha 20 de mayo de 1997 (a fojas 46), se le concedió a don Jorge Ernesto Méndez Venegas el título de concesión minera sobre 600 hectáreas ubicadas en el kilómetro 31.5 de la localidad de Río



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 00228-2008-PHC/TC

LIMA NORTE

SONIA MARIA PATRICIA JARA Y OTRO

Seco, distrito de Carabaylo, provincia de Lima, del tenor de la propia resolución mediante la que se otorga la concesión minera se establecía que el ejercicio de los derechos concedidos se encuentra supeditado al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Título Sexto del TUO de la Ley General de Minería (Decreto Supremo N° 014-92.EM), así como por lo dispuesto por la Ley N° 26505, la misma que se encontraba vigente al momento de interponerse la demanda, disponía en su artículo 7 que la utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras requiere acuerdo previo con el propietario, o la culminación del procedimiento de servidumbre establecido en su reglamento, ninguno de los cuales ha sido acreditado por el demandante en el presente proceso constitucional.

14. En este sentido, no siendo evidente de los actuados obrantes en el presente proceso de hábeas corpus la existencia de una servidumbre de paso sobre los predios de los demandados, cuya existencia y validez legal deberá ser dilucidada por la justicia ordinaria, la presente demanda deberá ser declarada improcedente en aplicación del artículo 5,1 del Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda de hábeas corpus.

Publíquese y notifíquese.

SS.

**LANDA ARROYO
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ**

Lo que certifico:

Dr. Ernesto Figueroa Bernardini
Secretario Relator

**ANEXO N° 3: EL ACUERDO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA MINERA
COMPAÑÍA AZURE DEL PERÚ S.A.C Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
SHICUY.**

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DGAA
FOLIO: 0000637
Números: 89239

1

SEÑOR NOTARIO PUBLICO:

Sírvase Ud. extender en su Registro de Escrituras Públicas el **CONVENIO SERVIDUMBRE Y/O USO DE TERRENOS SUPERFICIALES**, que suscriben de parte la **COMUNIDAD CAMPESINA DE SHICUY**, del Distrito de San Juan de Ja Provincia de Chupaca, Departamento de Junín, con domicilio en la misma Comuni debidamente representado en este acto por su Presidente Sr. Julián Cipri Quispealaya Inga, con D.N.I. Nro. 19972077, y por el señor Cayetano Quispea Cerrón, con D.N.I. Nro. 19972377, con domicilio en Av. Cornetana s/n Barrio Esperanza, Distrito de San Juan de Jarpa, Provincia de Chupaca, Departamento Junin, a quien en adelante se le denominará simplemente "**LA COMUNIDAD**"; y d otra parte la empresa **COMPAÑIA AZURE DEL PERU S.A.C.**, debidam representada en este acto por la Srta. Jessica Isabel Aguilar Velasquez, con D.N.I. : 41635743, y la Srta. Yeny Elisa Arauco Zúñiga, con D.N.I. Nro. 42507920, con domi en el Jr. Casimiro Espejo Nro. 150, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento Lima, a quienes en adelante se les denominará simplemente "**LOS USUARIOS**" acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

documento q1 prueba propiedad
PRIMERO.- "LA COMUNIDAD", es propietaria del terreno superficial sito en el Dis de San José de Quero, Provincia de Concepción, Departamento de Junin, con una : total aproximada de SEIS MIL Y UNA Hectáreas (6,001), inscrita en el Asiento Nro. 1, de la Ficha Nro. 21327 de los Registros Públicos de Huancayo, el título que mérito a la inscripción registral fue expedido por el Proyecto Especial de Titulación Tierras y Catastro Rural-PETT del Ministerio de Agricultura.

SEGUNDO.- Es materia del presente documento, el convenio por medio de la cual, **COMUNIDAD** impone a favor de "**LOS USUARIOS**" una servidumbre de uso mi y/o se otorga una cesión en uso sobre el terreno superficial que se encuentra en p del terreno de su propiedad mencionado en la cláusula anterior, en la cua encuentran los derechos mineros cuya titularidad es de "**LOS USUARIOS**", de acur al plano que se anexa al presente documento, debidamente suscrito por las pa contratantes.

Dicha cesión en uso es con la finalidad que "**LOS USUARIOS**" realicen actividades mineras en la zona, como es la exploración y explotación minera de derechos mineros: AZULCOCHA XXI, AZULCOCHA XXII, AZULCOCHA X AZULCOCHA XXIV, AZULCOCHA XXV, AZULCOCHA XXVI, AZULCOCHA X AZULCOCHA XXVIII, AZULCOCHA XXIX, AZULCOCHA XXX, AZULCOCHA X AZULCOCHA XXXII, SAN LUIS PRIMERO.

En tal sentido, AZURE podrá realizar, en virtud de este contrato, todas labores que requiere tanto para explorar, explotar, beneficiar, transporta comercializar los productos mineros, pudiendo construir presas, canchas de rela campamentos y demás en la superficie del terreno de la comunidad referida e cláusula precedente.

[Signature]

[Signature]

000 063

TERCERO.- El plazo del presente contrato es de CINCO (05) AÑOS, acordada prorrogar automáticamente el plazo antes establecido las veces que sean necesarias en los mismos términos y condiciones, para lo cual bastará la solicitud escrita de "LOS USUARIOS".

Se acuerda que "LOS USUARIOS", previa comunicación escrita a "LA COMUNIDAD", sin expresión de causa, puede solicitarle se deje sin ningún efecto el presente contrato, sin derecho a exigir devolución o reintegro de pagos efectuados en "LA COMUNIDAD". En este caso las mejoras que haya realizado en los terrenos superficiales que constituyan construcciones fijas inamovibles, se quedarán a beneficio de "LA COMUNIDAD".

CUARTO.- En compensación por la imposición de la servidumbre y por el uso del terreno superficial, a que se refiere el presente convenio "LOS USUARIOS" pagará una suma de NUEVE MIL y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 9 000.00) anuales, pagadero en forma adelantada.

QUINTO.- "LOS USUARIOS", podrán hacer uso de las vías de acceso a las zonas mineras de la cual es titular y que se encuentran dentro de las áreas del terreno superficial de propiedad de la comunidad.

Respecto a dichas vías de acceso, "LOS USUARIOS" se comprometen a mantener en buenas condiciones de operabilidad, asumiendo directamente los gastos de operación y mantenimiento, y contratar preferentemente a los miembros de "LA COMUNIDAD".

SEXTO.- Las partes acuerdan que todos los gastos que origine la celebración y formalización de este acto, serán asumidos por "LOS USUARIOS".

SÉPTIMO.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes con motivo de la ejecución del presente acuerdo, ambas partes señalan como respectivos domicilios los indicados en la introducción del presente documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito de fecha cierta.

CLAUSULAS ADICIONALES

PRIMERA CLAUSULA ADICIONAL.- "LOS USUARIOS", se comprometen a realizar un proyecto de forestación en los terrenos de propiedad de "LA COMUNIDAD", para lo cual "LOS USUARIOS" deberán aportar las herramientas e insumos necesarios y "LA COMUNIDAD" se compromete a disponer de una parte de sus terrenos para tal efecto así como de la mano de obra necesaria.

SEGUNDA CLAUSULA ADICIONAL.- "LOS USUARIOS" se comprometen a realizar los estudios de impacto ambiental (PAMA) que comprende a seres vivos y no vivos, ante las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, sin perjuicio del CANON MINERO que le corresponde a la zona donde se encuentra asentada, de acuerdo a ley.

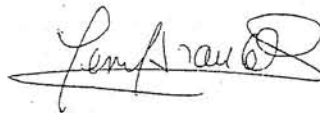
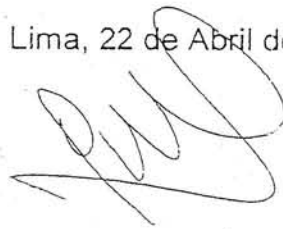


MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	
DGAA	
FOLIO:	00000609
Números	
Letras	

TERCERA CLAUSULA ADICIONAL.- "LOS USUARIOS" se comprometen a otorgar preferencia de trabajo a los miembros de "LA COMUNIDAD", en caso de requerir servicios, siempre y cuando se encuentren debidamente calificados o capacitados.

Agregue Ud. señor Notario, la introducción y conclusión de ley, y en su oportunidad cursar los partes a los Registros Públicos.

Lima, 22 de Abril de 2005.



Notario Público
D. C. 10.000
Lima, 22 de Abril de 2005



ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En el distrito de Tomas, Provincia de Yauyos, Departamento de Lima, siendo las diez de la mañana, del día 02 del mes de Setiembre del dos mil cinco, en el local comunal Tupac Amará, ubicado en la plaza principal s/n. Tomas, bajo la presidencia del Sr. Fredy Bonilla Inga y actuando como secretario Sr. Dilermer A. Hinostroza Dionisio, según la relación de asistentes que se menciona a continuación y verificándose que los asistentes suman 96 (noventa y seis) más de los dos tercios (2/3) del total de comuneros, reuniendo el quórum reglamentario se procedió a dar inicio a la Asamblea General Extraordinaria, siendo la agenda:

- 1.- Ratificación de convenio de constitución de Servidumbre a favor de Compañía Azure del Perú S.A.C.
- 2.- Otorgamiento de facultades.

Haciendo uso de la palabra, el Presidente de la Asamblea indica que como es de conocimiento de los miembros de la Comunidad se ha suscrito un convenio de Constitución de Servidumbre de cinco años sobre los terrenos de propiedad de la Comunidad, con la Compañía Azure del Perú S.A.C., según Escritura Pública otorgada ante el Notario Público de Lima Dr. Jaime Alejandro Murguía Cavero.

Después de una serie de intervenciones de los comuneros, se acordó por unanimidad ratificar el convenio de Constitución de Servidumbre sobre los terrenos de propiedad de la Comunidad a favor de Compañía Azure del Perú S.A.C., a que se refiere la Escritura Pública mencionada anteriormente. Del mismo modo, se acordó por unanimidad que el señor Presidente de la Comunidad Sr. Fredy Bonilla Inga, en nombre y representación de la Comunidad Campesina de Tomas, suscriba los documentos necesarios para la formalización del otorgamiento de Constitución de Servidumbre, ya indicada, así como de las renovaciones de dicho convenio, pudiendo pactar todos los demás términos y condiciones del mismo.

No habiendo otro punto que tratar, se levantó la sesión siendo las doce y cuarenta y cinco minutos, previa lectura y aprobación de la presente acta. A continuación firman los presentes:

Comunidad Campesina
Tomas - Yauyos

Dionisio
Valeriano Z. Dionisio Juan de Dios
VICE PRESIDENTE



Comunidad Campesina
Tomas - Yauyos

Hinostroza
Dilermer A. Hinostroza Dionisio
SECRETARIO



Comunidad Campesina
Tomas - Yauyos

Bonilla
Fredy C. Bonilla Inga
PRESIDENTE



Shuryca

Leandro D. RECIBI CONFORME

000 055

**ANEXO N° 4: SERVIDUMBRE MINERAL LEGAL; COMPAÑÍA MINERA
ANTAMINA S.A.**

COMPANHIA MINERA ANTAMINA S.A.

Av. La Floresta 497 - 4° Piso

Urb. Chacarilla - Lima 41 - Perú

☎ : (51-1) 217-3000

Fax: (51-1) 217-3095



Sumilla: Solicita el establecimiento de una servidumbre minera

A LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA

COMPANHIA MINERA ANTAMINA S.A., identificada con R.U.C. No.20330262428, con domicilio legal en Av. La Floresta No. 497, piso 4, Edificio Parque Las Lomas, Chacarilla del Estanque, San Borja, Lima, inscrita en la ficha No. 040345, Asiento 01 del Libro de Sociedades Contractuales y de otras Personas Jurídicas del Registro Minero, debidamente representada por su Presidente - Gerente General el señor Augusto Baertl Montori, identificado con Libreta Electoral No. 07830436, según poderes inscritos en el Asiento 54 de la Ficha 040345 del mismo registro, atentamente decimos:

Al amparo de lo previsto por el Capítulo IV del Título Duodécimo del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (TUO), aprobado por D.S. N° 014-92-EM y en los artículos 43° y 44° del Reglamento de Procedimiento Mineros, aprobado por D.S. N° 018-92-EM y como titulares de la concesión de transporte minero denominada MINERODUCTO, otorgada por Resolución Suprema No. 209-99-EM/DGM, solicitamos el establecimiento de una servidumbre minera sobre los terrenos identificados y descritos en el Anexo I del presente documento, con la finalidad de que en virtud de la concesión de transporte otorgada, se nos permita la construcción, operación, mantenimiento y vigilancia de un Mineroducto cuyo propósito será el transporte de concentrados de minerales, fundamentalmente de cobre y zinc desde la zona de la mina del proyecto Antamina hasta el puerto de Huarmey, de acuerdo con las características que se detallan en la memoria descriptiva que forma parte de la presente solicitud como anexo II.

Nuestra solicitud se sustenta en los fundamentos de hecho y de derecho que pasamos a detallar a continuación:

I ANTECEDENTES.-

- Con fecha 6 de Setiembre de 1996, la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. - Centromín - suscribió con Compañía Minera Antamina S.A., en adelante CMA, con la intervención de Río Algom e Inmet Mining Corporation, un contrato de transferencia de las concesiones mineras detalladas en el anexo I del referido contrato, el cual fue elevado a escritura pública ante el Notario Público de Lima, Doctor Aníbal Corvetto Romero.
- Posteriormente, mediante Resolución Directoral No. 169-98-EM/DGM de fecha 15 de julio de 1998, la Dirección General de Minería aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del "PROYECTO ANTAMINA", así como sus "addendums" 1 y 2, los cuales incluyen el análisis de los impactos ambientales de la construcción de la ruta sur para el transporte de minerales y el uso de la carretera que atraviesa el Parque Nacional del Huascarán.





No obstante haberse aprobado lo anterior, CMA solicitó la modificación de su plan de desarrollo para incluir en el mismo el uso de un mineroducto para el transporte de concentrados, evitando de esta manera el uso regular de la carretera que atraviesa el Parque Nacional del Huascarán, tal como había sido previsto en los "addendums" 1 y 2 antes mencionados.

Como consecuencia de lo expuesto, CMA preparó el "addendum" No. 3 al Estudio de Impacto Ambiental, el mismo que fue aprobado con fecha 12 de marzo de 1999, mediante Resolución Directoral No. 065-99-EM/DGM de la Dirección General de Minería.

De otro lado, con fecha 24 de setiembre de 1998, el Estado Peruano, representado por el Ministro de Energía y Minas, y CMA, con intervención del Banco Central de Reserva del Perú, celebraron, un Contrato de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión, en cuya virtud, el Estado se compromete a **"otorgar al titular, las concesiones, autorizaciones, permisos, servidumbres, expropiaciones, derechos de agua, derechos de paso, derechos de vía y demás facilidades, siempre y cuando cumpla con los requisitos señalados en la Ley. Asimismo le otorgará todos los derechos previstos en el artículo 37° del Texto Unico Ordenado"**.

II PETITORIO

Con arreglo a lo expuesto y a lo que pasamos a referir a continuación, como titulares de la concesión de transporte minero denominada MINERODUCTO, solicitamos el establecimiento de una servidumbre minera sobre los terrenos que se indican y detallan en el anexo I que se adjunta, de acuerdo a las medidas y características que se señalan en el mismo documento y por los fundamentos de hecho y de derecho que se exponen en las líneas siguientes.

Igualmente, y en atención a lo que se refiere en el numeral 2 de los fundamentos de hecho, solicitamos que la presente solicitud sea tramitada como una petición de servidumbre sobre terrenos de propietario desconocido.

III FUNDAMENTOS DE HECHO.-

1. CONCESION DE TRANSPORTE Y MINERODUCTO

- 1.1 Con fecha 15 de noviembre de 1999, por Resolución Suprema No 209-99-EM/DGM, se otorgó en favor de CMA la concesión de transporte minero denominada "Mineroducto", confiriendo a CMA como su titular, el derecho a realizar el transporte masivo de concentrados de cobre y zinc, fundamentalmente, a través de un Mineroducto, instalado desde la planta concentradora en la mina ubicada en la provincia de Huari, departamento de Ancash, hasta la planta de secado y filtrado que se construirá en las instalaciones portuarias ubicadas en la provincia de Huarney, departamento de Ancash.

- 1.2 El Mineroducto ha sido diseñado con la tecnología más avanzada para garantizar el normal funcionamiento del sistema y minimizar riesgos ambientales. La ruta del mismo ha sido planeada evitando pasar por áreas de importancia cultural y ambiental, sin embargo e inevitablemente, la ruta a emplearse implica el paso necesario por terrenos de propiedad de diversas entidades y personas naturales y jurídicas con las cuales resultaba conveniente llegar a un acuerdo, a efectos de evitar cualquier conflicto que pudiera entorpecer la construcción, operación y mantenimiento del Mineroducto.

2. TERRENOS SUPERFICIALES

- 2.1 Habiéndose determinado la necesidad de obtener, por lo menos, un derecho de uso sobre los terrenos requeridos para el "Mineroducto" y, previamente al otorgamiento de la concesión de transporte minero, CMA mediante recurso No. 1255675 del 01 de octubre de 1999, presentó a la Dirección General de Minería su plan de adquisición de tierras, detallando los procedimientos de adquisición de los terrenos superficiales que se verían afectados con la instalación del "Mineroducto" lo cual, fue considerado aceptable, según los términos de la Resolución Suprema No. 209-99-EM/DGM que aprobó el otorgamiento de la Concesión de Transporte Minero.
- 2.2 En ejecución del referido plan y desde 1999, CMA realizó y continúa realizando una extensa campaña de información, dirigida principalmente a los poseedores y propietarios de los predios donde se ubica la concesión de transporte y donde se viene instalando el Mineroducto, comunicándoles las previsiones que se están tomando para evitar daños ambientales en la zona donde se desarrollarán sus actividades, la necesidad de la construcción del "Mineroducto" para respetar la intangibilidad del Parque Nacional del Huascarán y las razones por las cuales ello no debe generar un impacto negativo en el ambiente ni en el uso de los terrenos requeridos para dicho "Mineroducto", salvo casos excepcionales debidamente determinados.
- 2.3 De esta manera, y a efectos de minimizar las molestias que la construcción, operación y el mantenimiento del "Mineroducto" pudiera causarles a los propietarios y poseedores de la referida zona, CMA ha celebrado más de cien contratos de compraventa de los terrenos requeridos para el Mineroducto, lo cual representa más del 97 % del total de los mismos, y, adicionalmente, se han celebrado más de 250 contratos de compensación por los daños a los cultivos y/o a las propiedades que ha causado y el que eventualmente podría causar la construcción y operación del Mineroducto. Ello, a cambio de un precio razonable que incluye no sólo el valor de la superficie sino de los cultivos en ella existentes y hasta la producción futura.
- 2.4 Sin embargo y no obstante lo exitoso del programa de adquisición de tierras, pese a los esfuerzos desplegados para asegurar que las negociaciones y adquisiciones de los terrenos requeridos para el Mineroducto se efectúen con los verdaderos propietarios (y que todas las personas que tengan esta calidad se encuentren incluidas), no es posible establecer con absoluta certeza que ello haya ocurrido en relación con todos los terrenos involucrados.



En efecto, la referida situación se produce por dos motivos, ⁽¹⁾ el primero debido a que más del 50% de los terrenos adquiridos no se encuentran inscritos en los Registros Públicos y el segundo, ⁽²⁾ que los linderos y medidas perimétricas de los mismos están referidas a terrenos de mucho mayor tamaño y que a su vez han sido delimitados en función a linderos y medidas perimétricas de otras propiedades que podrían no estar tituladas o que aún estándolo, su delimitación y medidas perimétricas resultan referenciales por haber sido obtenidas sobre la base de otros predios no inscritos o no delimitados debidamente.

- 2.5 En atención a lo antes señalado, CMA se encuentra en una situación de contingencia con respecto a la operación de la Concesión de Transporte Minero y al proyecto minero Antamina en general, pues todos los derechos y propiedades adquiridas podrían eventualmente ser cuestionadas por terceros que, alegando un mejor derecho, podrían pretender paralizar las obras que se vienen llevando a cabo, con los riesgos de tiempo e imagen que eventuales problemas judiciales generarían.

Por lo expuesto, y para dar total seguridad a los terceros que eventualmente puedan considerar afectado su derecho de propiedad, la presente solicitud debe tramitarse en la forma y con los requisitos previstos para el caso en que se desconoce la identidad del propietario. Es decir, el procedimiento previsto en el artículo 132 del Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minería.

3. NECESIDAD DE LA SERVIDUMBRE

- 3.1 Como consecuencia de lo indicado líneas arriba y habiéndose determinado la imposibilidad de la independización exacta del área que se requiere afectar en servidumbre y de la inscripción de la misma, CMA "necesita" la imposición de una servidumbre minera con el objetivo fundamental de obtener un derecho firme y seguro sobre el área afectada, a la vez de dar total seguridad a los Bancos e Instituciones que han financiado el proyecto minero Antamina, que el Mineroducto podrá ser operado sin contingencias de titularidad que pudieran entorpecer o paralizar su construcción o uso durante la vida del proyecto.
- 3.2 La necesidad de obtener la servidumbre que se solicita, se justifica además en la medida en que es un mecanismo eficiente para asignar a la concesión de transporte, cualquiera sea su titular, el derecho permanente a servirse de su terreno superficial, para la instalación, funcionamiento y mantenimiento de un mineroducto.
- 3.3 La naturaleza real y legal de la afectación que se solicita permitiría además que un eventual nuevo propietario del terreno, sea quien fuere, continúe empleándolo, pero a la vez ofrece la protección necesaria para impedir que dicho uso del terreno pueda perjudicar la labor del transporte minero, así como impedir que eventuales nuevos propietarios puedan desconocer el derecho de uso o las obligaciones impuestas.



- 3.4 Asimismo, debemos señalar que con excepción de los casos en que CMA deba construir Estaciones de Válvulas u otras facilidades, el uso que se dará al terreno sobre el cual se requiere la servidumbre (instalación subterránea del "Mineroducto") **es perfectamente compatible y no enerva otros usos del terreno superficial. Con arreglo a ello, el o los propietarios que se vean afectados con la imposición de la servidumbre, podrán, en la medida de lo posible, continuar haciendo uso del terreno, siempre que ello no afecte al "Mineroducto".**
- 3.5 Como se ha señalado y con las restricciones establecidas y necesarias para la operación eficiente del sistema, la intención de CMA es permitir que los propietarios de los terrenos superficiales, los sigan utilizando para los fines que venían siendo usados, pero se requiere de una servidumbre que permita hacer obligatorio frente a ellos y oponible al estado y terceros las restricciones mínimas que deben observar para el óptimo funcionamiento y construcción del "Mineroducto", como por ejemplo la restricción a la construcción de edificaciones con cimientos, viviendas o plantar árboles con raíces profundas.
- 3.6 En ese sentido, la necesidad de la servidumbre surge como consecuencia de los efectos de oponibilidad y persecutoriedad que un gravamen de naturaleza real otorgan. Así, solo en virtud de la servidumbre, el concesionario de transporte tendría un derecho real inseparable del predio, el mismo que subsistirá cualquiera sea su propietario.
- 4. APRECIACION DE LOS DESMEDROS**
- 4.1 La ruta seleccionada tiene la ventaja de ofrecer un menor impacto negativo en el ambiente, mayor seguridad, menos impactos sociales y mayor facilidad para el acceso, construcción, funcionamiento y mantenimiento del "Mineroducto".
- 4.2 Cada tubería recibirá una presión de 70 Bar, pero puede soportar una presión de 200 Bar y tiene una vida útil de 30 años. Sin perjuicio de ello y de la garantía de fábrica de la misma, CMA ha efectuado las revisiones y pruebas del caso antes de ser enterrada a una profundidad promedio de 1,30 y 1,50 metros.
- La tierra agrícola que inicialmente se removió de las zanjaz se fue depositando a un lado de ellas, dentro de un corredor de 15 metros de ancho, lo cual ha permitido no afectar su capacidad agrícola. Asimismo se han tomado las precauciones del caso, tratando de remover sólo lo necesario dentro del corredor mencionado.
- 4.3 Por otro lado, en los lugares donde el "Mineroducto" cruza carreteras o vías públicas, se han abierto zanjaz de mayor profundidad, donde el tubo va enterrado bajo un sistema de protección especial. CMA ha firmado un Convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a efectos de obtener las autorizaciones correspondientes.



- 4.4 En el supuesto de cruce de ríos y quebradas, el cruce se ha efectuado por debajo de los mismos a una profundidad entre 1,30 hasta 6,00 metros del lecho, contando para tal fin con la autorización de la autoridad de aguas correspondiente.
- 4.5 En caso de canales de irrigación, a efectos de no ocasionar mayores molestias por la interrupción del flujo de agua o el desperdicio de la misma, se han utilizado mangas de prolipoleno y/o empalmes con tubos de PVC.
- 4.6 Como habrán podido apreciar, CMA ha preparado, cumpliendo y hasta superando los standards establecidos por el Banco Mundial, un exhaustivo programa de trabajo con medidas y recomendaciones para evitar desmedros en el ambiente y en los terrenos superficiales, de este modo el diseño del "Mineroducto" está sometido a diferentes normas de seguridad nacional e internacional, de tal manera que el sistema tiene una alta capacidad de resistir sismos, huaycos y otros fenómenos naturales.

IV FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

- 1. De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 3) del artículo 37° del TUO, los titulares de concesiones mineras están facultados para solicitar a la autoridad minera competente, el establecimiento de servidumbres mineras en terrenos de terceros que sean necesarios para la racional utilización de la concesión, previa indemnización justipreciada.

Al respecto y como habrán podido apreciar en los fundamentos de hecho, el titular de la concesión de transporte minero requiere y "necesita" para la racional utilización de su Mineroducto (construcción, funcionamiento y mantenimiento), de una servidumbre que permita hacer oponible el derecho otorgado frente a cualquier tercero que pretenda hacer valer algún otro tipo de derecho sobre el área afectada.

Adicionalmente, se requiere un derecho válidamente otorgado y plenamente oponible que pueda ser considerado como una parte integrante de la concesión de transporte minero y que conjuntamente con ella resulte en una carga que siga el destino del terreno superficial, aún ante un eventual cambio de propietario, el mismo que deberá respetar los derechos otorgados a los titulares de la concesión de transporte.

- 2. El artículo primero del Decreto Supremo No. 017-96-AG, Reglamento del artículo 7° de la Ley No. 26505 referido a las servidumbres sobre tierras para el ejercicio de actividades mineras, señala que ***"para la utilización de tierras ... para el transporte de minerales por ductos se requiere el acuerdo previo con el propietario de las tierras o la culminación del procedimiento de servidumbre"***.

Como se ha referido precedentemente, CMA ha adquirido la mayor parte de los terrenos que se requiere afectar para la construcción, operación y mantenimiento del Mineroducto, los cuales solicita afectar en servidumbre en beneficio de la concesión de transporte minero. En dicha situación, y en el normal de los casos, estaría en la posibilidad o aptitud legal de poder realizar la labor del transporte de minerales por



ductos, en el área adquirida, sin necesidad de obtener un derecho de servidumbre legalmente impuesto.

Sin embargo, y tal como se refiere en los numerales 2.4 y 2.5 de los fundamentos de hecho, haber adquirido u obtenido algún derecho sobre los terrenos mencionados no asegura plenamente, en el caso especial de CMA, que dichas actividades puedan ser llevadas a cabo sin contingencias de titularidad que pudieran eventualmente paralizar la construcción o incluso la operación del Mineroducto por los problemas que ya hemos mencionado anteriormente.

Consiguientemente, resulta indispensable para la seguridad que tanto CMA, nuestros inversionistas, como el propio Estado requieren para ver finalmente cumplidos los objetivos de inversión y producción comprometidos, que sea otorgada una servidumbre minera legalmente impuesta, que a su vez, pueda eliminar o al menos diluir la situación de contingencia en la que nos encontramos.

3. En adición a lo expuesto, debemos destacar que las servidumbres constituyen un derecho real, precisamente, por ser establecidas sobre inmuebles, con prescindencia de su propietario. Prueba de ello la encontramos en el artículo 1036 del Código Civil que textualmente señala ***"Las servidumbres son inseparables de ambos predios. Sólo pueden transmitirse con ellos y subsisten cualquiera sea el propietario"***.

En tal sentido, toda vez que para el mismo Código Civil, las servidumbres pueden establecerse y subsisten, cualquiera sea el propietario, y que además el artículo 1048 del mismo dispone que ***"El propietario de dos predios puede gravar uno con servidumbre en beneficio del otro"***, consideramos perfectamente válido y procedente el establecimiento de una servidumbre sobre los terrenos de nuestra propiedad, en beneficio de la Concesión de Transporte Minero cuya titularidad nos corresponde, no sólo por ser legalmente posible, sino también por que resulta indispensable para el efectivo desarrollo del proyecto minero Antamina.

V CONSIDERACIONES FINALES.-

Finalmente, pedimos se sirvan tomar en cuenta lo siguiente, y otorgar la servidumbre minera solicitada en los términos expuestos:

- 1 CMA ha demostrado su voluntad de protección al medio ambiente.
- 2 Toda vez que ha sido otorgada una concesión de transporte minero, resulta necesario e indispensable para su racional utilización, el otorgamiento de una servidumbre minera sobre los terrenos superficiales que se ubiquen en el área concedida.
- 3 A efectos de generar la mayor seguridad para el Estado, CMA y sus inversionistas, de la total ejecución y desarrollo del proyecto minero Antamina, resulta indispensable el establecimiento de una servidumbre minera legalmente impuesta.
- 4 De acuerdo a los términos contenidos en la presente solicitud y en la memoria descriptiva del "Mineroducto", no debería existir un desmedro significativo sobre los terrenos superficiales afectados con la servidumbre, y en todo caso que estos existan



CMA esta dispuesta a compensar por ellos de acuerdo a lo que se establezca o acuerde en su oportunidad, así como a cumplir las obligaciones de restitución que correspondan.

- 5 CMA tiene la intención de permitir, luego de concluidos los trabajos de construcción del "Mineroducto" y salvo ciertos casos excepcionales y temporales, que los terrenos superficiales gravados con la servidumbre que se solicita, sigan siendo utilizados por sus propietarios actuales siempre y cuando se respeten ciertas limitaciones de seguridad para ellos y para el "Mineroducto".

POR LO TANTO:

Pedimos se sirvan acceder a lo solicitado y proceder con el trámite de servidumbre conforme a ley.

OTROSI DECIMOS:

Que adjuntamos a la presente solicitud, los siguientes anexos:

- I Descripción del terreno, con la indicación de su ubicación, extensión, valor y plano topográfico del mismo.
- II Memoria descriptiva de las obras a ejecutarse para la construcción del "Mineroducto".

Lima, 13 de julio de 2001

A. B. P.

Francisco J. Tong B.

FRANCISCO J. TONG B.
ABOGADO
Reg. CAL. 27293

MEMORIA DESCRIPTIVA N° 1

LOCALIZACION : Sector : Vinchos
 Distrito : Llata
 Provincia : Huamalíes
 Departamento : Huánuco

VALORIZACION DE SERVIDUMBRE : S/. 63.24 Nuevos Soles

INDEMNIZACION POR AFECTAR EL TERRENO: S/. 562.50 Nuevos Soles

AREA TOTAL : 1,020.00 m²

UBICACIÓN Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS:

Por el Norte: Con una línea recta que mide 6.00 metros lineales y que colinda con propiedad de terceros. Dicha línea se inicia en el punto con coordenadas UTM N: 8936988.322 y E: 277909.648 y sigue el sentido Este hasta llegar al punto con coordenadas UTM N: 8936988.322 y E: 277915.648.

Por el Este : Con una línea sinuosa de 170.00 metros lineales y que colinda con propiedad del vendedor. Dicha línea se inicia en el punto con coordenadas UTM N: 8936988.322 y E: 277915.648 y sigue el sentido Sur hasta llegar al punto con coordenadas UTM N: 8936827.118 y E: 277937.513.

Por el Sur: Con una línea recta que mide 6.00 metros lineales y que colinda con propiedad de terceros. Dicha línea se inicia en el punto con coordenadas UTM N: 8936827.118 y E: 277937.513 y sigue el Oeste hasta llegar al punto con coordenadas UTM N: 8936818.253 y E: 277937.084.

Por el Oeste: Con una línea sinuosa de 170.00 metros lineales y que colinda con propiedad del vendedor. Dicha línea se inicia en el punto con coordenadas UTM N: 8936818.253 y E: 277937.084 y sigue el sentido Norte hasta llegar al punto con coordenadas UTM N: 8936988.322 y E: 277909.648.

Este terreno será utilizado para la construcción, operación y mantenimiento de la tubería conocida como "mineroducto", la misma que tendrá por objeto el transporte de concentrados de cobre y zinc desde la planta concentradora de la unidad minera de: COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. ubicada en la provincia de Huari, departamento de Ancash, hasta la planta de secado y filtrado que se edificará en las instalaciones portuarias ubicadas en la provincia de Huarmey. El "mineroducto" será construido, operado y mantenido de acuerdo con las especificaciones técnicas detalladas en el Anexo 2 adjunto a la presente memoria descriptiva.

a favor de Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú, así como la modificación del citado Contrato derivada de la Cesión que se aprueba en el presente artículo.

Artículo 2°.- Autorízase a PERUPETRO S.A. a suscribir con las empresas Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú, y Barrett Resources (Peru) Corporation, Sucursal del Perú, con la intervención del Banco Central de Reserva del Perú, la cesión y modificación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en la Cuenca Marañón - Lote 39, que se aprueba en el artículo precedente.

Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Energía y Minas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de mayo del año dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas
y encargado de la Cartera de Energía y Minas

08527

Establecen disposiciones para la fijación de los Factores de Distribución Horaria del Precio de Potencia a que se refiere el artículo 113° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas

DECRETO SUPREMO N° 015-2003-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 113° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-EM, establece que el Ministerio fijará los

Factores de Distribución Horaria del Precio de Potencia, referido a los Ingresos Adicionales por Potencia Generada en el Sistema, cuya vigencia no podrá ser inferior a cuatro (4) años, y dispone que la fijación de los nuevos valores se efectuará con una anticipación no menor de un (1) año a su entrada en vigencia;

Que, de otro lado, resulta conveniente dejar sin efecto la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Supremo N° 004-99-EM, conforme a la cual el período de vigencia de la primera fijación de los Factores referidos en el considerando que antecede será de ocho (8) años, toda vez que cuanto mayor sea el período a considerar, menor será la precisión de la evolución del parque generador, en términos del ingreso y retiro de unidades generadoras y cargas en el sistema y, en consecuencia, los Factores de Distribución Horaria del Precio de Potencia así como los Ingresos Adicionales por Potencia Generada en el Sistema que se asignarían a las unidades generadoras podrían no ser coherentes con el parque existente;

De conformidad con el inciso 8) del artículo 118° de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1°.- Por excepción, la primera fijación de los Factores de Distribución Horaria del Precio de Potencia a que se refiere el artículo 113° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, se efectuará con una anticipación no menor de seis (6) meses a su entrada en vigencia.

Artículo 2°.- Déjase sin efecto la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Supremo N° 004-99-EM.

Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Energía y Minas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de mayo del año dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas
Encargado de la cartera de Energía y Minas

08528

Establecen servidumbre de paso para construcción, operación y mantenimiento de mineroducto y transporte de concentrados de cobre y zinc al puerto de Huarney

RESOLUCIÓN SUPREMA N° 022-2003-EM

Lima, 3 de mayo de 2003

VISTO; el expediente sobre establecimiento de servidumbre de paso, solicitado por Compañía Minera Antamina S.A., inscrita en la Ficha N° 040345, Asiento 01 del Libro de Sociedades Contractuales y de Otras Personas Jurídicas del Registro Público de Minería, debidamente representada por su Presidente - Gerente Gene-

ral, señor Augusto Baertl Montori, con poder inscrito en el Asiento 24 de la misma Ficha y Registro antes señalado, para la construcción, operación, mantenimiento del mineroducto, para el transporte de concentrados de cobre y zinc hasta el puerto de Huarney.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el inc. 3) del artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, es atribución de los titulares de concesiones mineras solicitar a la autoridad minera autorización para establecer servidumbre sobre los terrenos de terceros que sean necesarios para la racional utilización de la concesión;

Que, la extensión del área solicitada en servidumbre ha sido determinada en el Informe de la Inspección Ocular en 657,798.17 m², que constan de ciento catorce terrenos siguientes:

	M2	Sector	Distrito	Provincia	Dpto.	Valor en US\$
1	1,019.45		Llata	La Unión	Huánuco	177.84
2	3,766.29		Llata	La Unión	Huánuco	657.02
3	5,761.98	Yanashalla Norte	Huallanca	Bolognesi	Ancash	1 005.16
4	8,626.47	Yanashalla Norte	Huallanca	Bolognesi	Ancash	1 504.87
5	1,184.99	Yanashalla Sur	Huallanca	Bolognesi	Ancash	149.39
6	677.86	Yanashalla Sur	Aquí	Bolognesi	Ancash	85.46
7	7,550.80	Cajunragna	Aquí	Bolognesi	Ancash	1 317.21
8	9,699.45	Pachapaqui	Aquí	Bolognesi	Ancash	1 222.80
9	2,034.75	Mojón de Flor de Nieve	Aquí	Bolognesi	Ancash	354.96
10	29,981.40	Casa Blanca	Chiquián	Bolognesi	Ancash	3 779.70
11	342.00	San José de Apac	Raquia	Bolognesi	Ancash	257.79
12	21.01	San José de Apac	Raquia	Bolognesi	Ancash	16.20
13	39.00	San José de Apac	Raquia	Bolognesi	Ancash	29.40
14	35.96	San José de Apac	Raquia	Bolognesi	Ancash	27.10

	M2	Sector	Distrito	Provincia	Dpto.	Valor en US\$
15	214.01	San José de Apac	Raquia	Bolognesi	Ancash	161.31
16	314.22	San José de Apac	Raquia	Bolognesi	Ancash	236.85
17	286.51	San José de Apac	Raquia	Bolognesi	Ancash	215.96
18	270.54	San José de Apac	Raquia	Bolognesi	Ancash	203.93
19	378.08	Jacac	Marca	Recuay	Ancash	284.99
20	199.09	Jacac	Marca	Recuay	Ancash	150.07
21	192.91	Jacac	Marca	Recuay	Ancash	145.41
22	209.77	Jacac	Marca	Recuay	Ancash	158.11
23	219.15	Jacac	Marca	Recuay	Ancash	165.19
24	208.01	Jacac	Marca	Recuay	Ancash	156.79
25	453.63	Jacac	Marca	Recuay	Ancash	341.94
26	381.29	Jacac	Marca	Recuay	Ancash	287.41
27	225.47	Jacac	Marca	Recuay	Ancash	101.77
28	41.98	Jacac	Marca	Recuay	Ancash	18.95
29	89.34	Puente Chucchis	Marca	Recuay	Ancash	40.33
30	9,467.19	Puente Chucchis	Marca	Recuay	Ancash	7 136.25
31	370.30	Puente Huertas	Marca	Recuay	Ancash	279.12
32	159.59	Puente Huertas	Marca	Recuay	Ancash	72.04
33	1,835.35	Pomay	Raquia	Bolognesi	Ancash	1 383.45
34	1,237.74	Pomay	Raquia	Bolognesi	Ancash	932.99
35	223.50	Pomay	Raquia	Bolognesi	Ancash	168.47
36	94.64	Hornillos	Colquioc	Bolognesi	Ancash	68.70
37	720.97	Hornillos	Colquioc	Bolognesi	Ancash	523.20
38	385.95	Hornillos	Colquioc	Bolognesi	Ancash	405.90
39	10,150.10	Hornillos	Colquioc	Bolognesi	Ancash	7 367.42
40	1,323.08	Hornillos	Colquioc	Bolognesi	Ancash	960.36
41	1,239.50	Hornillos	Colquioc	Bolognesi	Ancash	1 303.58
42	842.62	Hornillos	Colquioc	Bolognesi	Ancash	611.62
43	789.16	Hornillos	Colquioc	Bolognesi	Ancash	829.96
44	649.70	Hornillos	Colquioc	Bolognesi	Ancash	683.29
45	499.09	Hornillos	Colquioc	Bolognesi	Ancash	362.29
46	203.83	Hornillos	Colquioc	Bolognesi	Ancash	107.19
47	809.21	Hornillos	Colquioc	Bolognesi	Ancash	851.00
48	396.18	Hornillos	Colquioc	Bolognesi	Ancash	416.64
49	1,438.25	Hornillos	Colquioc	Bolognesi	Ancash	1 043.97
50	41.66	Hornillos	Colquioc	Bolognesi	Ancash	21.91
51	636.03	Shihuay	Colquioc	Bolognesi	Ancash	461.66
52	593.82	Shihuay	Colquioc	Bolognesi	Ancash	430.99
53	689.32	Shihuay	Colquioc	Bolognesi	Ancash	500.38
54	826.33	Shihuay	Colquioc	Bolognesi	Ancash	434.52
55	419.76	Shihuay	Colquioc	Bolognesi	Ancash	220.71
56	562.49	Shihuay	Colquioc	Bolognesi	Ancash	295.79
57	1,092.52	Shihuay	Colquioc	Bolognesi	Ancash	574.51
58	3,290.63	Pocor	Pararin	Recuay	Ancash	2 388.48
59	10,705.40	Huachuquish	Pararin	Recuay	Ancash	7 750.17
60	241,948.93	Lupin, Quebrada Río Seco	Paramonga	Barranca	Lima	48 389.82
61	1,679.73	Km. 225 CPN	Paramonga	Barranca	Lima	335.90
62	1,217.42	Gramadal	Huarmey	Huarmey	Ancash	243.50
63	70,055.62	Las Zorras	Huarmey	Huarmey	Ancash	14 011.10
64	111,145.61	C.P.N	Huarmey	Huarmey	Ancash	22 229.10
65	13,460.79	Tres Cruces, Guanabano	Colquioc	Bolognesi	Ancash	9 770.54
66	503.37	Palillo	Colquioc	Bolognesi	Ancash	365.39
67	260.23	Manas	Paramonga	Barranca	Lima	186.81
68	1,145.17	Manas	Paramonga	Barranca	Lima	831.21
69	748.46	Manas	Paramonga	Barranca	Lima	543.27
70	772.79	Manas	Paramonga	Barranca	Lima	560.93
71	1,108.95	Manas	Paramonga	Barranca	Lima	804.93
72	819.80	Manas	Paramonga	Barranca	Lima	431.06
73	820.11	Manas	Paramonga	Barranca	Lima	431.25
74	2,177.24	Manas	Paramonga	Barranca	Lima	1 579.90
75	1,109.91	Anta	Paramonga	Barranca	Lima	805.62
76	485.07	Anta	Paramonga	Barranca	Lima	352.17
77	233.22	Anta	Paramonga	Barranca	Lima	169.28
78	125.99	Anta	Paramonga	Barranca	Lima	66.25
79	1,600.29	Anta	Paramonga	Barranca	Lima	1 191.37
80	401.09	Anta	Paramonga	Barranca	Lima	298.60
81	436.77	Anta	Paramonga	Barranca	Lima	325.15
82	344.91	Anta	Paramonga	Barranca	Lima	256.80
83	346.46	Anta	Paramonga	Barranca	Lima	512.90
84	490.14	Anta	Paramonga	Barranca	Lima	876.00
85	353.20	Anta	Paramonga	Barranca	Lima	263.00
86	335.19	Anta	Paramonga	Barranca	Lima	264.45
87	287.85	Anta	Paramonga	Barranca	Lima	214.25
88	263.98	Anta	Paramonga	Barranca	Lima	196.80
89	533.70	Anta	Paramonga	Barranca	Lima	397.40
90	347.66	Anta	Paramonga	Barranca	Lima	259.20
91	443.19	Anta	Paramonga	Barranca	Lima	177.30
92	748.19	Monte Grande	Paramonga	Barranca	Lima	149.60
93	1,157.50	Monte Grande	Paramonga	Barranca	Lima	861.50
94	1,151.27	Monte Grande	Paramonga	Barranca	Lima	882.20
95	2,129.74	Monte Grande	Paramonga	Barranca	Lima	1 585.50
96	591.09	Monte Grande	Paramonga	Barranca	Lima	440.30
97	525.51	Monte Grande	Paramonga	Barranca	Lima	390.80
98	1,787.96	Monte Grande	Paramonga	Barranca	Lima	1 331.05

	M2	Sector	Distrito	Provincia	Dpto.	Valor en US\$
99	896.94	Monte Grande	Paramonga	Barranca	Lima	667.90
100	1,961.11	Monte Grande	Paramonga	Barranca	Lima	1 460.30
101	1,799.73	Monte Grande	Paramonga	Barranca	Lima	1 339.90
102	2,073.05	Cutatambo	Paramonga	Barranca	Lima	1 543.30
103	1,900.57	Cutatambo	Paramonga	Barranca	Lima	1 414.70
104	94.07	Cutatambo	Paramonga	Barranca	Lima	70.20
105	23.92	Cutatambo	Paramonga	Barranca	Lima	18.00
106	4,835.82	Cutatambo	Paramonga	Barranca	Lima	3 599.90
107	12,178.16	Huarcanga	Paramonga	Barranca	Lima	9 066.40
108	481.12	Huarcanga	Paramonga	Barranca	Lima	358.20
109	241,948.93	Gramadal	Huarmey	Huarmey	Ancash	48 389.80
110	7,384.52	Las Zorras	Huarmey	Huarmey	Ancash	1 476.90
111	5,503.66	Las Zorras	Huarmey	Huarmey	Ancash	1 100.70
112	8,442.00	Las Zorras	Huarmey	Huarmey	Ancash	123 132.50
113	7,079.39	Las Zorras	Huarmey	Huarmey	Ancash	103 257.67
114	10,202.51	Las Zorras	Huarmey	Huarmey	Ancash	2 040.50
Total	657,798.17					415,803.94

estableciéndose el monto indemnizatorio en: CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TRES Y 94/100 DOLARES AMERICANOS (US \$. 415,803.94) por el derecho de servidumbre, por el tiempo que dure la actividad minera;

Que, se ha cumplido con el procedimiento contemplado en los artículos 130° y siguientes del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, Decreto Supremo N° 014-92-EM y artículos 2° y 4° del Reglamento del artículo 7° de la Ley N° 26505, sustituido por la Ley N° 26570, aprobado por Decreto Supremo N° 017-96-AG, referido a las servidumbres sobre tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos;

Que, estando al Informe Legal de la Dirección General de Minería y de conformidad con lo establecido en el artículo 4° del Reglamento del artículo 7° de la Ley N° 26505, sustituido por la Ley N° 26570, aprobado por Decreto Supremo N° 017-96-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Establecer la servidumbre de paso a favor de Compañía Minera Antamina S.A. sobre el área de 657,798.17 m² de extensión, que consta de ciento catorce terrenos, detallados en el segundo considerando, para realizar la construcción, operación y mantenimiento del mineroducto, para el transporte de concentrados de cobre y zinc hasta el puerto de Huarmey.

Artículo 2°.- Compañía Minera Antamina S.A. por concepto de indemnización deberá consignar la suma de CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TRES Y 94/100 DOLARES AMERICANOS (US \$. 415,803.94) a la orden de la Dirección General de Minería, en el plazo de treinta días calendario de notificada la presente resolución, bajo apercibimiento de declararse abandonada su solicitud de servidumbre.

Artículo 3°.- Al término de la servidumbre Compañía Minera Antamina S.A. efectuará los trabajos de revalorización de las áreas alteradas, conforme a lo detallado en su Estudio de Impacto Ambiental.

Artículo 4°.- La presente resolución suprema será re-frendada por los Ministros de Energía y Minas y Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Energía y Minas

ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura

08534

INTERIOR

Dan por concluida designación de Subprefecto de la provincia de Chanchamayo, departamento de Junín

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0662-2003-IN-1501

Lima, 6 de mayo del 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0313-2002-IN-1501 del 27.FEB.2002, se designó al señor FREDY GALINDO HUAMÁN como Subprefecto de la provincia de Chanchamayo del departamento de Junín;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25° del Decreto Legislativo N° 370 - Ley Orgánica del Ministerio del Interior, Decreto Legislativo N° 560 - Ley del Poder Ejecutivo, artículo 1° inciso 11) de la Ley N° 27594 de fecha 13 de diciembre del 2001 e inciso b) del artículo 2° del Decreto Supremo N° 036-83-JUS del 22 de julio de 1983; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida a partir de la fecha, la designación en el cargo de Subprefecto de la provincia de Chanchamayo del departamento de Junín, del señor FREDY GALINDO HUAMÁN, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO M. SANABRIA ORTIZ
Ministro del Interior

08541

Designan Director de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0663-2003-IN-0901

Lima, 6 de mayo del 2003

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo público de confianza de Director de Sistema Administrativo IV Categoría F-5, Director de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones del Ministerio del Interior;

Que, es necesario que dicho cargo sea cubierto a fin de garantizar el normal funcionamiento de la indicada Oficina;

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 77° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM de 17 de enero de 1990, Art. 5° del Decreto Legislativo N° 370 - Ley Orgánica del Ministerio del Interior y Art. 3° de la Ley N° 27594, que regula la participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar a partir de la fecha de suscripción de la presente Resolución, al Ing. PEDRO ABELARDO GALINDO CASTRO, en el cargo público de confianza de Director de Sistema Administrativo IV, Categoría

**ANEXO N ° 5: SERVIDUMBRE MINERAL LEGAL; COMPAÑÍA MINERA
COIMOLACHE S.A.**



PROYECTO: TANTAHUATAY
REFERENCIA: SOLICITA SERVIDUMBRE MINERA

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS:

S.D.G.

COMPAÑÍA MINERA COIMOLACHE S.A., con R.U.C. No. 2014068640, con domicilio en el Jr. Luis N. Sáenz 447 - Jesús María, Lima, debidamente representada por el señor Amado Rolando Yataco Medina, con DNI No. 08734305, según poder inscrito en el Asiento C00004 de la Partida No. 11477429 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, señalando el mismo domicilio arriba indicado, atentamente decimos:

Que, al amparo del artículo 7° de la Ley N° 26505, sustituido por la ley N° 26570 y de conformidad con el segundo párrafo del artículo 3° de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 017-96-AG y modificado por el artículo 1° del Decreto Supremo N° 015-2003-AG, informamos y solicitamos a usted lo siguiente:

Que, con fecha 26 de mayo de 2008, recibida el 27 del mismo mes y año, mi representada hizo llegar al Presidente de Directiva Comunal de la Comunidad Campesina El Tingo, con domicilio en el distrito y provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca, una Carta Notarial por la cual proponía la celebración de una Servidumbre Minera Convencional con la Comunidad Campesina El Tingo por el uso de 10 (diez) lotes de terrenos, con un total de 53.00 (cincuenta y tres) hectáreas, ubicados en el ámbito de terrenos de propiedad de la referida Comunidad, en el lapso de 30 (treinta) días hábiles siguientes a partir de la fecha de recepción de la mencionada carta notarial.

Que, habiendo transcurrido en exceso el plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles, solicitamos a usted el establecimiento de una servidumbre minera por 20 (veinte) años sobre los referidos 10 (diez) lotes con un total de 53 (cincuenta y tres) hectáreas según plano que se adjuntó a la carta notarial y adjuntamos a la presente solicitud.

**CIA MINERA COIMOLACHE S.A.****PROYECTO TANTAHUATAY**

De conformidad en el TUPA del Ministerio de Energía y Minas, consignamos lo siguiente:

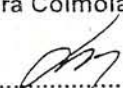
- a) Solicitud de acuerdo a formato, consignando el número de RUC de Compañía Minera Coimolache S.A.
- b) Nombre y Domicilio del afectado: COMUNIDAD CAMPESINA EL TINGO, con domicilio en la localidad de El Tingo, distrito y provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca.
- c) Memoria Descriptiva y plano de la Servidumbre Minera solicitada, que incluye:
 - Naturaleza y duración de la servidumbre.
 - Justificación técnica y económica de la servidumbre propuesta.
 - Descripción y valor del predio afectado y determinación del lucro cesante y del desmedro a ocasionar.
- d) Documentos adicionales:
 - Descripción del Proyecto Tantahuatay.
 - Poder que autoriza al suscrito a solicitar servidumbres.
 - Resolución Directoral N° 00654-2005-INACC/J, de 09 de febrero de 2005 que aprueba la nueva conformación de nuestra Unidad Económica Administrativa Coimolache N° 2, constituida por 30 concesiones mineras sobre las que se encuentran los lotes de terreno involucrados en la presente solicitud. Se incluye Plano de la UEA.
- e) Carta Notarial que acredita que mi representada ha formulado a la propietaria del predio una propuesta de acuerdo previo.

POR LO EXPUESTO:

Solicitamos a su digno Despacho, tener presente lo expuesto para los fines de ley.

Lima, 08 de agosto de 2008

Cía. Minera Coimolache S.A.


.....
Ing° AMADO YATACO
Gerente General

Jr. Luis N. Sáenz 447 - 449 Jesús María
Telf. 461 9911 Fax. 463 3377



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Viceministerio
de Minas

Dirección
General de Minería

000555

Lima,

31 JUL. 2009

OFICIO N° 776 -2009-MEM/DGM

Señor Ing.

OSCAR SEBASTIANI VARGAS

Dirección General de Competitividad Agraria

Ministerio de Agricultura

Presente.-

Asunto : Informe adicional sobre peritaje agronómico en procedimiento de servidumbre minera solicitada por COMPAÑÍA MINERA COIMOLACHE S.A.

Referencia : Oficio N° 364-2009-MEM/DGM del 7 de abril de 2009.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Oficio N° 364-2009-MEM/DGM, de fecha 7 de abril de 2009, el que en copia se adjunta, mediante el cual solicitamos el pronunciamiento de su despacho sobre la servidumbre minera de uso por 20 años, solicitada por Compañía Minera Coimolache S.A. sobre terrenos de propiedad de la Comunidad Campesina El Tingo, con domicilio en el distrito y provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca.

Al respecto le remito copia del Oficio N° 1020-2009/VIVIENDA-VMCS-DNC, del Director Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ingresado con N° 1908721 con fecha 24 de julio de 2008, mediante el cual remite un informe adicional del peritaje agronómico remitido a su despacho mediante el oficio de la referencia.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresar a usted los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

COPIA
Original Firmado
Ing. VÍCTOR MANUEL VARGAS VARGAS
Director General de Minería

CORREO CERTIFICADO

COD REMISION: 315603 REFERENCIA: 1810600
DOCUMENTO: DNM - OFICIO N° 776-2009-MEM-
INTERESADO: MINISTERIO DE AGRICULTURA
REPRESENTANTE: OSCAR SEBASTIANI VARGAS
DIRECCION DEST: JR YAUYOS N° 258
UBIGEO: LIMA LIMA LIMA Departamento Lima / NBARRENECHEA

ENVIO 03/08/2009 15:42

03 AGO. 2009

MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINAS



PERÚ

Ministerio
de Agricultura

Despacho
Viceministerial

Dirección General de
Competitividad Agraria

000502

INFORME TECNICO LEGAL N° 008 -2009-AG-DGCA-DA/EMG-FBB

MINAG - DVM
DGCA-DA

02

A : **VICTOR MANUEL NORIEGA TOLEDO**
Director General
Dirección General de Competitividad Agraria

Asunto : Establecimiento de Servidumbre solicitada por la Compañía Minera Coimolache S.A.

Referencia : a) Oficio N° 364-2009-MEM/DGM
b) Oficio N° 696-2009-MEM/DGM
c) Carta, de fecha 25 de junio de 2009
d) Oficio N° 776-2009-MEM/DGM

Fecha : Lima, 18 de agosto de 2009

Tenemos el agrado de dirigimos a usted, con relación al asunto del rubro para informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Con el Oficio de la referencia a), la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas - MINEM, remite los peritajes minero y agronómico en relación a la solicitud efectuada por la Compañía Minera Coimolache S.A., respecto a la imposición de una servidumbre minera de uso por 20 años, sobre terrenos de propiedad de la Comunidad Campesina El Tingo, ubicada en el distrito y provincia de Hualgayoc, departamento y región de Cajamarca, para el desarrollo del proyecto minero denominado "Tantahuatay", solicitud que es reiterada con documento de la referencia b).

Con Carta de la referencia c) la Compañía Minera Coimolache, adjunta información que ha considerado importante anexar.

La Dirección General de Minería del MEM, con Oficio de la referencia d), remite el Informe adicional sobre peritaje agronómico.

II. ANALISIS

Intervención del Ministerio de Agricultura a través de la Dirección General de Competitividad Agraria

1. La Ley N° 26505 ¹ – Ley de Inversión privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras de Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas, establece en su Art. 7° que, la utilización de tierras para el

¹ De conformidad con el Artículo 3 de la Ley N° 29376, publicada el 11 de junio de, se da fuerza de ley y restituye su el texto de la presente Ley, sus modificatorias y demás normas complementarias; asimismo, se restituye su Reglamento.



PERÚ

Ministerio
de AgriculturaDespacho
ViceministerialDirección General de
Competitividad Agraria

000563

ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos requiere acuerdo previo con el propietario o la culminación del procedimiento de servidumbre legal

MINAG-DVM
DGCA-DA

03

2. Con Decreto Supremo N° 017-96-AG, se aprobó el Reglamento del Art. 7° de la Ley N° 26505, referido a las servidumbres sobre tierras para el ejercicio de actividades minera o de hidrocarburos, el cual señala el procedimiento para el establecimiento de dicha servidumbre, el que se regirá por lo dispuesto en el TUO de la ley General de Minería (Decreto Supremo 014-92-EM), el Reglamento de Procedimientos Mineros (Decreto Supremo N° 018-92-EM), y por la disposición especial prevista en su artículo 4°.

Dicha disposición especial establece, que tanto el Director General de Minería y el **Director General de Promoción Agraria del Ministerio de Agricultura**, dentro del plazo de treinta (30) días útiles, emitirán **opinión técnica** pronunciándose respecto al cumplimiento del procedimiento estipulado en la legislación de la materia, señalando en forma expresa si la servidumbre es posible sin enervar el derecho de propiedad.

3. Al respecto, mediante Decreto Legislativo N° 997, de fecha 12 de marzo de 2008 se aprobó la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y mediante Decreto Supremo N° 031-2008-AG se estableció su Reglamento de Organización y Funciones (ROF), como un instrumento de gestión que desarrolla la nueva estructura orgánica del Ministerio, de la cual la Dirección General de Promoción Agraria, no forma parte.
4. En este contexto, fue necesario definir previamente el órgano que tendrá a cargo emitir dicha opinión técnica, razón por la cual, el 12 de julio de 2009, se publicó la Resolución Ministerial N° 0517-2009-AG, la cual dispone que la Dirección General de Competitividad Agraria es la competente para emitir opinión técnica que correspondía efectuar a la ex Dirección de Promoción Agraria.

Por las consideraciones expuestas, a la fecha procedemos a emitir la opinión que corresponda, previo análisis del expediente y de los documentos presentados.

Cumplimiento del Procedimiento de Servidumbre Minera

5. El derecho de propiedad, reconocido por el artículo 2°, inciso 16 de la Constitución Política del Estado, constituye un derecho fundamental cuyo ámbito de protección garantiza a su titular las facultades de uso, disfrute y disposición del bien.
6. Es un derecho inviolable, a nadie puede privarse de su propiedad, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio²; es decir, constitucionalmente el único beneficiario de una expropiación es el Estado Peruano³.

² Art. 70° Constitución Política del Estado.

³ Actualmente el Estado ya no expropia bienes para dárselos a particulares, se eliminó la causal de expropiación referida al interés social. Las causales existentes referidas a la necesidad pública y seguridad nacional no autorizan la expropiación para fines mineros.



PERÚ

Ministerio
de AgriculturaDespacho
ViceministerialDirección General de
Competitividad Agraria

000564

MINAG - DVM

DGA-DA

04

7. Siendo la expropiación una posibilidad hoy negada en aplicación de las normas de rango legal y constitucional, es la servidumbre minera la única alternativa en caso de no existir acuerdo entre el propietario de bien inmueble y el titular minero, como así lo señala el Art. 7° de la Ley N° 26505 – Ley de Inversión privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras de Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas, al precisar que *"la utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos requiere acuerdo previo con el propietario o la culminación del procedimiento de servidumbre legal"*.
8. Según la legislación de la materia, la servidumbre legal minera responde a la necesidad de explotación de los recursos naturales de propiedad del Estado y que éste cede a los particulares a través de la concesión minera, estableciéndose legalmente que si el concesionario necesita usar parte de un bien ajeno para explotar el derecho minero, se le puede imponer una servidumbre al propietario de dicho predio; habiéndose previsto para este fin un procedimiento administrativo.
9. De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 017-96-AG, Reglamento del Art. 7° de la Ley N° 26505 y el Decreto Supremo N° 014-92-EM, TUO de la Ley General de Minería y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 018-92-EM, el procedimiento de servidumbre minera debe entenderse con el propietario del inmueble a afectar y se inicia previo agotamiento de las etapas de i) Trato directo y ii) Conciliación.
10. Conforme aparece de la Ficha Registral N° 127621 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° II Sede Chiclayo, la Comunidad Campesina "El Tingo" es la propietaria de las 34⁴ Has materia de servidumbre, ubicadas en la zona denominada El Hueco, Sector C - Tantahuatay, de las 5136.515 Ha que posee.
- Es del caso precisar que la inscripción registral, se caracteriza entre otros, por los principios de publicidad y seguridad jurídica, cualquier otro derecho debe ser invocado validamente.
- Se ha verificado del expediente que el procedimiento ha sido entendido con la Comunidad Campesina "El Tingo" por ser la propietaria del terreno materia de servidumbre.
11. Se aprecia en autos que mediante Resolución N° 620-2008-MEM-DGM/V, de fecha 16 de octubre de 2008, la Dirección General de Minería dispuso se tenga por agotado el trato directo y por consiguiente citó a las partes a reunión en la sede del MEM, resolución que fue debidamente notificada, de conformidad con el Art. 3° de Decreto Supremo N° 017-96-AG.
12. Al respecto cabe resaltar que el Presidente de la Comunidad Campesina El tingo, mediante Escrito N° 1835991, de fecha 10 de noviembre de 2008, dirigido al MEM comunicó que los comuneros han decidido no asistir a la reunión de conciliación, conforme se detalla en el Informe N° 593-2009-MEM-DGM/DNM, pese a ello la diligencia se llevó a cabo, según consta del Acta de fecha 12 de noviembre de 2008, a la que concurrió los representantes de la Compañía Minera Coimolache.

⁴ Inicialmente se solicitó 53 Ha; sin embargo, ha sido reducido a 34 Ha, debido a acuerdos llegados con los algunos miembros de la Comunidad Campesina.



PERÚ

Ministerio
de AgriculturaDespacho
ViceministerialDirección General de
Competitividad Agraria

MINAG - DVM

DGCA-DA

05

Es del caso precisar, que según el Art. 62° y 63° del Decreto Supremo N° 008-91-TR - Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas, *el Presidente de la Directiva Comunal es el representante legal de la Comunidad y como tal está facultado para ejecutar todos los actos de carácter administrativo, económico y judicial, que comprometan a la Comunidad, siendo su principal función el de ejercer la representación institucional de la Comunidad.*

13. No existiendo acuerdo entre las partes, la Compañía Minera Coimolache mediante escrito de fecha 08 de agosto de 2009, solicitó el inicio del procedimiento administrativo de servidumbre legal, adjuntando para tal efecto copia de la carta notarial que cursó a la Comunidad Campesina "El Tingo" y demás requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del MEM, por lo que de conformidad con el Art. 130 de del TUO de la Ley General de Minería, la Dirección de Minería expidió la Resolución N° 762-2008-MEM-DGM/V, mediante la cual: i) Inicia el procedimiento de servidumbre legal; ii) Cita a las partes a comparendo, bajo apercibimiento de continuar el trámite en caso de inconcurrencia de los representantes de la Comunidad Campesina El Tingo; iii) Se designa al perito minero, para determinar la extensión y magnitud de la servidumbres y se solicita la designación de un perito agrónomo.

Esta Resolución fue notificada a la Comunidad Campesina "El Tingo", habiendo sido recepcionada por su presidente el 22 de diciembre de 2008, conforme así aparece del Informe N° 593-2009-MEM-DGM/DNM.

14. Revisado el expediente, así como de las demás instrumentales obrantes en él, se observa que se ha cumplido con el procedimiento señalado en el Capítulo IV del TUO de la Ley General de Minería y su reglamento, en lo que corresponde⁵, habida cuenta que: i) Al décimo quinto día de notificada la comunidad Campesina "El Tingo", es decir el 16 de enero de 2009 se llevó a cabo la diligencia de Comparendo, con la inasistencia de la Comunidad Campesina; ii) Mediante Resolución N° 057-2009-MEM-DGM/V, de fecha 29 de enero de 2009, se hizo efectivo el apercibimiento, y se ordenó se continúe el trámite de servidumbre con la inconcurrencia de la Comunidad Campesina; iii) Tanto el perito minero como el agrónomo emitieron los dictámenes correspondientes, de conformidad con la normas sobre la materia.

15. Cabe señalar que durante las etapas del procedimiento se verifica que la Comunidad Campesina El Tingo, ha sido notificada validamente, por lo que han tenido pleno conocimiento del proceso iniciado y expedito su derecho para apersonarse en cualquier etapa del mismo.

Por otro lado, los señores Sara Luz Estela Pérez y Ronald Gallardo Estela, comuneros de la Comunidad Campesina, se apersonaron al procedimiento, lo que dio mérito al Informe N° 593-2009-MEM-DGM/DNM, de fecha 28 de mayo de 2009.

La Servidumbre solicitada es posible sin enervar el derecho de propiedad

16. Los terrenos de la Comunidad campesina "El Tingo" se encuentran en una altitud superior a los 3,800 m.s.n.m. y se caracterizan por estar cubiertos principalmente con pastos naturales, donde el pastoreo constituye el uso principal de la

⁵ Conforme tenemos anotado, la expropiación para fines mineros fue eliminada, por lo que toda mención a ella, debe entenderse como no puesta (derogación tácita).

**PERÚ****Ministerio
de Agricultura****Despacho
Viceministerial****Dirección General de
Competitividad Agraria****MINAG - DVM****DGCA-DA**

06

vegetación y por lo tanto el uso de la tierra consiste en mantener dicha vegetación. Los pastos que prosperan se constituyen como el recurso renovable más importante de la zona; predominan especies como el ichu (*Stipa ichu*) y otras duras (*Calamagrostis*, *festuca* y *poa*), que son de baja palatabilidad para especies introducidas y que pueden soportar una actividad ganadera de pastoreo muy limitada dadas las condiciones climáticas propias de la zona.

17. Asimismo se puede señalar que en el área comprendida en el proyecto existen pequeñas extensiones donde se desarrollan actividades agrícolas en forma temporal, las cuales están limitadas por el régimen de precipitaciones.
18. En el área comprendida en la solicitud de servidumbre no existen asentamientos humanos que pudiesen ser afectados por el desarrollo de la actividad minera.
19. De acuerdo a la normatividad vigente la Compañía Minera Coimolache deberá contar con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado antes de iniciar la actividad minera; el mismo que tendrá como objetivo garantizar la salud, seguridad de las personas, el ecosistema en su conjunto mediante y la propiedad. En el mencionado estudio se especificarán las medidas que la empresa debe adoptar para prevenir, minimizar o controlar impactos negativos que la explotación minera podría traer consigo.
20. La normatividad vigente exige asimismo la presentación de un Plan de Cierre de Minas donde quedarán establecidas las medidas que tendrá que implementar la empresa, para prevenir, minimizar y evitar los riesgos derivados de la explotación minera al cese de las operaciones. Las medidas contempladas en el plan tendrán por finalidad lograr los mismos objetivos planteados en el estudio de impacto ambiental; es decir, garantizar la salud, seguridad de las personas, el ecosistema y la propiedad en su conjunto.
21. Según el Informe Pericial Minero (fs. 06) el área de terreno solicitada es estratégica al formar parte de la necesaria para el desarrollo de la infraestructura del proyecto minero Tantahuatay. Asimismo se señala, que ésta es coherente con la magnitud del yacimiento y sus instalaciones, siendo indispensable para la construcción y desarrollo del proyecto (fs. 10). Se indica además, que desde el punto de vista técnico, económico y ambiental y social, constituye la mejor alternativa (fs.11), argumentos éstos que son sustentados con: i) El Post Proceso de Enlace Geodésico base para el levantamiento topográfico (fs. 19 a 39), ii) La Diligencia Pericial de Servidumbre (fs. 40 al 56), iii) Los planos que corren de fs. 65 a 74; iv) Plano del Proyecto Minero Tantahuatay (fs. 75 a 77); y, v) De las tomas fotográficas que corren de fs. 79 a 82.
22. Teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en los párrafos anteriores se concluye que la servidumbre solicitada no enervará el derecho de propiedad, en la medida que la actividad minera a desarrollar solo involucra un área mínima (34 Has = 0.66%) del total de la propiedad (5136.515 = 100%) de la Comunidad Campesina "El Tingo", permitiendo la coexistencia del resto del predio, argumento que es corroborado con el Informe Pericial Agronómico y su Informe Ampliatorio. Señalando asimismo que en ella se desarrollan actividades agropecuarias en forma muy limitada, dado los factores adversos del medio ambiente.



PERÚ

Ministerio
de Agricultura

Despacho
Viceministerial

Dirección General de
Competitividad Agraria

000507

MINAG - DVM

07

23. Por otro lado las medidas que deberá implementar la Compañía Coimolache S.A. durante la explotación minera y al cierre de operaciones asegurarán que no se perjudique en modo alguno la salud, seguridad de las personas, el ecosistema y la propiedad en su conjunto, cuyo cumplimiento deber ser cautelado en forma estricta por las autoridades competentes.

III. CONCLUSIONES

1. Por las consideraciones expuestas, el procedimiento de servidumbre minera solicitada por la Compañía Coimolache S.A. se ha llevado a cabo de conformidad con lo dispuesto en el TUO de la Ley General de Minería y sus disposiciones reglamentarias.
2. Asimismo, dado los argumentos expuestos en el presente Informe, la servidumbre minera solicitada sobre 34 Has de la Comunidad Campesina "El Tingo", es posible sin enervar el derecho de propiedad de dicha Comunidad.

Es todo lo que tenemos que informar para los fines pertinentes.

Atentamente,

FAUSTO BUITRON BUITRON

Ingeniero Agrónomo

Dirección de Promoción de la Competitividad

ENMA MELENDEZ GARCIA

Abogada

Dirección de Agronegocios

Visto el informe que antecede y con la conformidad de esta Dirección que lo hace suyo.

VICTOR MANUEL NORIEGA TOLEDO

Director General

Dirección General de Competitividad Agraria

según el Modelo N° 01A que forma parte de la Directiva. En aquellos casos que el Presupuesto sea aprobado por Acuerdo de Directorio, éste deberá contener el desagregado que señalan los artículos 1° y 2° del Modelo N° 01A que forma parte de la presente Directiva.

e) Forman parte de la Resolución de Aprobación, el reporte oficial "Aprobación Institucional de Apertura para el Año Fiscal" (Formato N° 01A y Formato N° 02A) señalado en el inciso a), así como los Formatos y Anexos contenidos en el Cuadro "Reporte Oficial, Formatos, Anexos y Modelo", los mismos que serán suscritos por el Titular de la ETE, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y el Contador General, o quienes hagan sus veces en la ETE.

Artículo 9°.- Plazo de Aprobación y Presentación del Presupuesto Institucional de Apertura

El Titular de la Entidad, bajo responsabilidad, aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura a más tardar el 31 de diciembre del Año Fiscal precedente.

La Información de Aprobación Institucional a que se refiere los incisos d) y e) del artículo 8° de la Directiva, es presentada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección Nacional del Presupuesto Público, dentro del plazo establecido para tal efecto.

Artículo 10°.- Registro de Información del Presupuesto de Apertura

Las ETEs deben efectuar el registro de la Información Presupuestaria en el "Sistema de Información Financiera Presupuestal - ETEs" que para tal fin se encuentre disponible en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas: www.mef.gob.pe.

El registro de la información por este medio, no exime a la ETE de su obligación en la presentación a la Dirección Nacional del Presupuesto Público, de los Formatos y Anexos detallados en el Cuadro "Reporte Oficial, Formatos, Anexos y Modelo". Dichos Formatos y Anexos serán impresos del "Sistema de Información Financiera Presupuestal - ETEs".

CAPÍTULO IV

ACCIONES DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA ENTIDAD Y LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Artículo 11°.- Responsabilidad en las Acciones de Control

El Órgano de Control Interno es responsable de evaluar que las acciones efectuadas por la Entidad, se hayan realizado en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva.

Artículo 12°.- Responsabilidad del Titular de la ETE

Para efecto de las acciones que se desarrollen durante la fase de aprobación presupuestal, le corresponde al Titular de la ETE o quien haga sus veces, la responsabilidad de revisar y aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal respectivo, presentada por la Oficina de Presupuesto o quien haga sus veces.

Artículo 13°.- Responsabilidad de la Oficina de Presupuesto

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces, es responsable de la coordinación, seguimiento y control del registro de la información de Aprobación Institucional así como de su presentación a los Organismos correspondientes.

Artículo 14°.- Calidad de Declaración Jurada

Todos los documentos que se presenten ante la Dirección Nacional del Presupuesto Público, tienen el carácter de Declaración Jurada, y en consecuencia se sujetan a las responsabilidades y consecuencias legales correspondientes.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 15°.- ETEs que inicien o efectúen operaciones durante el Año Fiscal

Las ETEs que inicien o efectúen operaciones durante el Año Fiscal, regulan su aprobación presupuestaria conforme a lo establecido en la Directiva y a los

lineamientos que para el efecto establezca la Dirección Nacional del Presupuesto Público.

Artículo 16°.- Incumplimiento

El incumplimiento de la presente Directiva implica responsabilidad del Titular de la ETE, del Jefe de la Oficina de Presupuesto o el que haga sus veces y de los Jefes de las áreas involucradas, dando lugar a las sanciones administrativas aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, conforme lo establece el artículo 65° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Asimismo, el mencionado incumplimiento será comunicado a la Contraloría General de la República; de persistir dicha situación, se procederá a su publicación así como el nombre de la Entidad en el Diario Oficial El Peruano, dando cuenta a la Contraloría General de la República, a efecto que determine la responsabilidad administrativa a que hubiere lugar, conforme a ley.

Artículo 17°.- Coordinaciones y Consultas

Cualquier información o consulta, comunicarse a los teléfonos y dirección electrónica asignados al personal de la Dirección de Presupuesto de Entidades de Tratamiento Empresarial: Teléfonos: 311-5930 ó 311-9900 (Anexos 2263, 2243, 2244, 2245, 2264 ó 2273) y línea directa 626-9932 así como a la Dirección Electrónica: dnpp_etes@mef.gob.pe

CUADRO

REPORTE OFICIAL, FORMATOS, ANEXOS Y MODELO

DOCUMENTOS	DENOMINACIÓN
REPORTE OFICIAL:	"Aprobación Institucional de Apertura para el Año Fiscal ..."
01A	Presupuesto de Ingresos a Nivel de Partidas del Ingreso
02A	Presupuesto de Egresos a Nivel de Actividad y/o Proyecto y Genérica del Gasto
FORMATOS:	
01A-1	Presupuesto de Ingresos a Nivel de Específicas del Ingreso - Desagregado Trimestral - Por Fuente de Financiamiento
02A-1	Presupuesto de Egresos a Nivel de Actividad y/o Proyecto y Genérica del Gasto - Desagregado Trimestral - Por Fuente de Financiamiento
03A	Flujo de Caja
04A	Financiamiento por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias
05A	Detalle de las Deudas de la Entidad
06A	Balance General (para Entidades Financieras)
06A-1	Balance General (para Entidades No Financieras)
07A	Estado de Ganancias y Pérdidas (para Entidades Financieras)
07A-1	Estado de Ganancias y Pérdidas (para Entidades No Financieras)
08A	Programación de las Metas Físicas
ANEXOS:	
01A	Resumen de los Objetivos Estratégicos
02A	Resumen de los Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempeño
MODELO:	
01A	"Resolución para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura para las Entidades de Tratamiento Empresarial"

435387-1

ENERGIA Y MINAS

Imponen derecho de servidumbre minera de uso para la construcción del Complejo Industrial Minero del Proyecto Tantahuatay, a favor de Compañía Minera Coimolache S.A.

RESOLUCIÓN SUPREMA N° 080-2009-EM

Lima, 14 de diciembre de 2009

VISTO, el Informe N° 952-2009-MEM-DGM/DNM, de la Dirección Normativa de Minería de la Dirección General de Minería sobre el establecimiento de servidumbre minera de uso, solicitada por COMPAÑÍA MINERA COIMOLACHE S.A. (en adelante LA COMPAÑÍA), con

R.U.C. N° 20140688640, inscrita en la Partida N° 11477429 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX, Sede Lima;

CONSIDERANDO:

Que, LA COMPAÑÍA mediante escrito N° 1810600, de fecha 8 de agosto de 2008, solicitó la imposición de una servidumbre minera de uso por veinte (20) años, sobre parte del terreno de propiedad de la Comunidad Campesina El Tingo (en adelante LA COMUNIDAD), ubicado en el distrito y provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca, inscrito en la Ficha 127621 del Registro de Propiedad Inmueble del Registro Público de Chota;

Que, la servidumbre es requerida para la construcción del Complejo Industrial Minero del Proyecto Tantahuatay (pad de lixiviación, pozas, echaderos, planta de procesos, talleres, laboratorios, campamentos, edificios, etc.) en la Unidad Económica Administrativa Coimolache N° 2, la cual fue aprobada mediante Resolución Jefatural N° 00654-2005-INACC/J;

Que, LA COMPAÑÍA presentó copia de la carta notarial (Notario - Abogado Luis Castañeda Cervantes) entregada con fecha 27 de mayo de 2008, mediante la cual propuso al Presidente de la Directiva Comunal de la Comunidad Campesina El Tingo celebrar una servidumbre convencional por el uso de diez (10) parcelas que hacen un total de 53 has., sin que en el lapso de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la carta notarial hubiera obtenido respuesta alguna por parte de la comunidad, por lo que se consideró culminada la etapa de trato directo;

Que, teniendo en cuenta que LA COMPAÑÍA cumplió con levantar las observaciones realizadas por la Dirección Normativa de Minería mediante Auto Directoral N° 690-2008-MEM-DGM/DNM y que presentó la carta notarial que establece la norma precitada, la Dirección General de Minería (en adelante DGM) mediante Resolución N° 620-2008-MEM-DGM/V, de fecha 16 de octubre de 2008, ordenó se tenga por agotado el trato directo para el establecimiento de servidumbre, iniciado por la COMPAÑÍA con LA COMUNIDAD, y citó a Reunión de Invitación a Conciliación para el décimo quinto día de recibida la notificación por la comunidad, por ser la parte cuyo domicilio es más distante;

Que, el Director Regional de Energía y Minas de Cajamarca mediante Oficio N° 1005-2008-GR-CAJ/DREM, ingresado al Ministerio de Energía y Minas con N° 1836159, el 10 de noviembre de 2008, remitió a la DGM el cargo de recepción de LA COMUNIDAD del Oficio N° 1027-2008-MEM/DGM, con el cual se remitió a LA COMUNIDAD la Resolución N° 620-2008-MEM-DGM/V, de fecha 16 de octubre de 2008, cargo firmado por el Presidente de LA COMUNIDAD con fecha 22 de octubre de 2008;

Que, el día 12 de noviembre de 2008, se realizó la Reunión de Invitación a Conciliar, en la Sala de Reuniones de la Dirección Normativa de Minería (en adelante DNM) a la cual sólo se presentaron los representantes de LA COMPAÑÍA, dando lectura al escrito N° 1835991 presentado por LA COMUNIDAD en el que indicó que sus representantes no asistirían a la reunión;

Que, habiendo esperado los quince (15) minutos de tolerancia sin que se presentaran los representantes de LA COMUNIDAD, LA COMPAÑÍA solicitó se dé por culminada la Etapa de Conciliación con LA COMUNIDAD y se continúe con el procedimiento administrativo de servidumbre legal;

Que, LA COMPAÑÍA mediante escrito N° 1837661, de fecha 13 de noviembre de 2008, solicitó formalmente el inicio del procedimiento administrativo de servidumbre legal, excluyéndose los lotes sobre los que ha llegado a realizar acuerdos;

Que, en base a dicha solicitud, la DGM mediante Resolución N° 762-2008-MEM-DGM/V, de fecha 17 de diciembre de 2008, ordenó lo siguiente:

a) Se inicie el procedimiento de servidumbre legal solicitado por LA COMPAÑÍA sobre el terreno de LA COMUNIDAD materia del Expediente N° 1810600.

b) Se cite a las partes a comparendo en la Dirección General de Minería, en la sede del Ministerio de Energía y Minas ubicada en Av. Las Artes Sur N° 260, San Borja, Lima, para el décimo quinto día de recibida la notificación por la comunidad, por ser la parte cuyo domicilio es más distante, a horas 3:00 p.m., bajo apercibimiento de continuar el trámite en caso de incomparencia de los representantes de la comunidad.

c) Se designe al perito minero de la nómina oficial Ing. Gustavo Cenzano Brea para determinar la necesidad y magnitud de la servidumbre solicitada, a quien se le debía expedir la planilla de gastos correspondientes; y,

d) Se solicite la designación de un perito agrónomo.

Que, el Director Regional de Energía y Minas de Cajamarca mediante Oficio N° 1228-2008-GR-CAJ/DREM, ingresado al Ministerio de Energía y Minas con escrito N° 1848436, de fecha 5 de enero de 2009, remitió el cargo de recepción del Oficio N° 1195-2008-MEM/DGM, con el cual se remitió a LA COMUNIDAD la Resolución N° 762-2008-MEM-DGM/V, cargo firmado por el Presidente de LA COMUNIDAD con fecha 22 de diciembre de 2008;

Que, con fecha 16 de enero de 2009, se realizó el Comparendo en la Sala de Reuniones de la DNM a la cual sólo se presentó el representante de LA COMPAÑÍA, quien solicitó que, ante la incomparencia de los representantes de LA COMUNIDAD, se haga efectivo el apercibimiento decretado por Resolución N° 762-2008-MEM-DGM/V, de fecha 17 de diciembre de 2008 y, en consecuencia, se continúe con el trámite correspondiente conforme a su estado;

Que, la DGM mediante Resolución N° 057-2009-MEM-DGM/V, de fecha 29 de enero de 2009, ordenó se haga efectivo el apercibimiento decretado mediante Resolución N° 762-2008-MEM-DGM/V y ordenó se continúe con el trámite de servidumbre legal minera con la incomparencia de LA COMUNIDAD;

Que, el Director Regional de Energía y Minas de Cajamarca mediante Oficio N° 324-2009-GR-CAJ/DREM, ingresado al Ministerio de Energía y Minas con escrito N° 1861810, del 18 de febrero de 2009, remitió el cargo de recepción del Oficio N° 088-2009-MEM/DGM con el cual se remitió a LA COMUNIDAD la Resolución N° 057-2009-MEM-DGM/V, cargo firmado por el Presidente de LA COMUNIDAD con fecha 10 de febrero de 2009;

Que, el ingeniero Gustavo Cenzano Brea mediante escrito N° 1855938, de fecha 30 de enero de 2009 presentó su informe de la diligencia pericial y posteriormente mediante escrito N° 1868391, de fecha 13 de marzo de 2009, presentó el levantamiento de observaciones que realizó la Dirección Técnica Minera mediante Auto Directoral N° 042-2009-MEM-DGM/DTM a su informe, en el que concluye básicamente lo siguiente:

- El área requerida por LA COMPAÑÍA como servidumbre está conformada por seis (6) lotes de terreno, los cuales son indispensables para la viabilidad del Complejo Minero Metalúrgico Industrial de su Proyecto Tantahuatay por tener una ubicación estratégica en la construcción y desarrollo del mencionado proyecto. Dicho complejo está constituido esencialmente por la preparación del tajo Tantahuatay, echaderos de desmonte de material inadecuado y de material orgánico, pad de lixiviación, pozas de soluciones y eventos mayores, carretera de acarreo, planta de procesos, laboratorio, talleres, campamento, oficinas, etc. No existe otra alternativa para la ubicación y desarrollo del proyecto.

- La diligencia pericial se llevó a cabo el día 15 de enero de 2009, con la presencia del perito minero, de un representante de LA COMPAÑÍA, así como de un comunero hábil de LA COMUNIDAD conforme aparece de la Certificación Notarial de Padrón de Asociados realizada por el Notario Dr. Luis Castañeda Cervantes, del 7 de marzo de 2009.

- LA COMUNIDAD ha asignado en usufructo 34 has. a seis (6) comuneros, correspondiéndoles, según el levantamiento topográfico, los siguientes lotes: i) Lote N° 1 a Carlos Chuquillin Chuquillin con 7.99 has; ii) Lote N° 2 a Nicolás Chuquillin Muñoz con 6 has; iii) Lote N° 3 a Roland William Gallardo Estela con 4.01 has; iv) Lote N° 4 a Sara Luz Estela Pérez con 5.97 has; v) Lote N° 5 a Rolando Gallardo Chuquillin con 4 has; y vi) Lote N° 9 a Gloria Cruz Bazán con 6 has. Dichos terrenos son eriazos y de fuerte pendiente, sin riego, mayormente utilizados para pastoreo, cuya vegetación predominante es el ichu.

- La magnitud de la servidumbre solicitada es de 34 has. considerando que LA COMUNIDAD es propietaria del 4,565 has., la afectación de la servidumbre sólo sería de 0.8% del área total, por lo que LA COMUNIDAD no se verá afectada sustancialmente por la servidumbre.

Que, el Director Nacional de Construcción mediante Oficio N° 396-2009/MIVIENDA-VMCS-DNC, ingresado al Ministerio de Energía y Minas con escrito N° 1870368, de fecha 24 de marzo de 2009, remitió seis (6) informes

técnicos sobre los lotes: N°s. 1, 2, 3, 4, 5 y 9 en los que se indicaba, entre otros aspectos, los montos de la servidumbre y del valor de daños y perjuicios como sigue:

LOTE N°	COMUNERO	HAS.	VALOR - USO DE TERRENO US\$	VALOR - DAÑOS Y PERJUICIOS US\$	VALOR TOTAL US\$
1	Carlos Manuel Chuquilín Chuquilín	8	8,458.72	30,481.61	38,940.33
2	Nicás Chuquilín Muñoz	6	6,344.04	15,252.19	21,596.23
3	Roland William Gallardo Estela	4	4,229.36	6,215.01	10,444.37
4	Sara Luz Estela Pérez	6	6,344.04	10,479.99	16,824.03
5	Rolando Homero Gallardo Chuquilín	4	4,229.36	11,612.01	15,841.37
9	Gloria Dionicia Cruz Bazán	6	6,344.04	8,709.31	15,053.35

Que, la DGM mediante Oficio N° 364-2009-MEM/DGM, de fecha 7 de abril de 2009, remitió al Director General de Competitividad Agraria del Ministerio de Agricultura los peritajes minero y agronómico para su pronunciamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto Supremo N° 017-96-AG, modificado por el Decreto Supremo N° 015-2003-AG;

Que, la Dirección Técnica Minera al evaluar los peritajes minero y agronómico mediante Informe N° 220-2009-MEM-DGM/DTM, de fecha 12 de mayo de 2009, opinó favorablemente, por lo que la DGM mediante Resolución N° 410-2009-MEM-DGM/V, de fecha 13 de mayo de 2009, aprobó el informe técnico de inspección ocular para el establecimiento de servidumbre de los seis (6) lotes presentado por el perito minero;

Que, con fecha 24 de julio de 2009, el Director Nacional de Construcción mediante Oficio N° 1020-2009/VIVIENDA-VMCS-DNC, con ingreso N° 1908721, presentó el denominado: "Informe Técnico sobre la posibilidad que la servidumbre enerve el derecho de propiedad" en el que concluye:

- La magnitud de la servidumbre es de 34 has. en lotes bajo asignación a seis (6) comuneros miembros de LA COMUNIDAD, la cual posee un remanente de 4,565 has., por lo que la afectación de la servidumbre sería del 0.7447% del área total.

- Los lotes materia de la solicitud de servidumbre se encuentran a una altitud entre 3,800 y 4,000 m.s.n.m., correspondiendo a tierras de naturaleza ácida -eriazas y de pastoreo- con pendientes pronunciadas en algunas partes y, además, en el contorno de las tierras sirvientes no existen asentamientos humanos, flora y fauna establecidas por el hombre que se pudiera perjudicar sustancialmente.

- La servidumbre solicitada no perjudicará al resto del predio sirviente de modo tal que lo haga inútil o lo afecte de manera sustantiva respecto de los fines para los cuales estaba siendo usado o estuviere destinado.

Que, el Director General de Competitividad del Ministerio de Agricultura mediante Oficio N° 2177-2009-AG-DGCA/DA, ingresado al Ministerio de Energía y Minas con N° 1917758 ha remitido opinión técnica sobre los peritajes minero y agronómico adjuntando el Informe Técnico Legal N° 008-2009-AG-DGCA-DA/EMG-FBB en el cual se concluye que: i) el procedimiento de servidumbre minera solicitado por LA COMPAÑIA se ha llevado a cabo de conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería y ii) La servidumbre minera es posible sin enervar el derecho de propiedad de LA COMUNIDAD;

Que, en el presente caso se ha cumplido con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, así como el Reglamento del artículo 7° de la Ley N° 26505, aprobado por Decreto Supremo N° 017-96-AG, modificado por el Decreto Supremo N° 015-2003-AG; y, además, se cuenta con los peritajes minero y agronómico, así como con las opiniones técnicas de la Dirección Técnica Minera de la Dirección General de Minería y de la Dirección General de Competitividad del Ministerio de Agricultura sobre los peritajes minero y agronómico;

Que, en consecuencia, es procedente la imposición del derecho de servidumbre solicitado por LA COMPAÑIA;

De conformidad con el artículo 4° del Reglamento del artículo 7° de la Ley N° 26505, sustituido por la Ley N° 26570, aprobado por Decreto Supremo N° 017-96-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Imponer el derecho de servidumbre minera de uso para la construcción del Complejo Industrial Minero del Proyecto Tantahuatay, a favor de COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE S.A. por veinte (20) años, sobre el área de treinta y cuatro (34) hectáreas de extensión de propiedad de la Comunidad Campesina El Tingo, ubicada en la zona denominada "El Hueco", sector de C° Tantahuatay - Los Gentiles, distrito de Hualgayoc, departamento de Cajamarca la cual consta de seis (6) lotes.

Artículo 2°.- Por concepto de indemnización, COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE S.A. deberá consignar en el Banco de la Nación, a la orden de la Dirección General de Minería, la suma de US\$ 118,699.68 (Ciento Dieciocho Mil Seiscientos Noventa y Nueve y 68/100 Dólares Americanos) en favor de la Comunidad Campesina El Tingo, en el plazo de diez (10) días hábiles de notificada la presente resolución, bajo apercibimiento de declarar el abandono de su solicitud de constitución de derecho de servidumbre.

Artículo 3°.- Al término de la servidumbre, COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE S.A. efectuará los trabajos de remediación del área afectada de acuerdo a su Plan de Cierre.

Artículo 4°.- La presente resolución suprema será refrendada por los Ministros de Energía y Minas y de Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ADOLFO DE CÓRDOVA VÉLEZ
Ministro de Agricultura

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

435388-8

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

Modifican R.M. N° 481-2009-MIMDES mediante la cual se aceptó la renuncia de Director de Investigación y Desarrollo Social

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 512-2009-MIMDES

Lima, 11 de diciembre de 2009

Vista la Nota N° 256-2009-MIMDES/DVMDS del Despacho Viceministerial de Desarrollo Social;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 481-2009-MIMDES se aceptó, a partir del 29 de octubre de 2009, la renuncia formulada por el señor VÍCTOR CARLOS SALAZAR CÓNDROR al cargo de confianza de Director de la Dirección de Investigación y Desarrollo Social de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Social del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social;

Que, con el documento del visto, el Despacho Viceministerial de Desarrollo Social ha solicitado que se considere como fecha de vigencia de la mencionada renuncia a partir del 22 de noviembre de 2009, debiéndose adoptar en consecuencia las acciones administrativas que pudieran corresponder a través de la modificatoria de la Resolución Ministerial N° 481-2009-MIMDES en su parte pertinente, conforme a la normativa vigente;

Que, el numeral 17.1 del artículo 17 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece